



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
**AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA**

**Resolución**

**Número:** RESOL-2025-173-APN-UIF#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 16 de Septiembre de 2025

**Referencia:** EXPTE. UIF N° 1367/2017 - M [REDACTED] L [REDACTED] ARGENTINA S.A. S/ SUPERVISION CNV IN SITU

**VISTO** el Expediente N° 1367/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y las Resoluciones UIF N° 229 del 13 de diciembre de 2011, 111 del 14 de junio de 2012 vigente al momento de los hechos, 229 del 26 de mayo de 2014, 96 del 27 de agosto de 2018 y sus respectivas modificatorias vigentes al momento de los hechos, y 44 del 13 de octubre de 2020, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 25.246 se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA.

Que la referencia a la Ley N° 25.246 a lo largo de la presente Resolución se efectúa conforme el texto ordenado según las modificatorias vigentes al momento de los hechos (previo a la reforma por Ley N° 27.739).

Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, enumera los Sujetos Obligados a informar ante esta UIF en los términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, el que incluía en su inciso 4 -actual inciso 7- a las personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo.

Que por la Resolución UIF N° 229/2011, vigente al momento de los hechos, se regularon las obligaciones que los Sujetos Obligados en cuestión debían cumplir ante esta UIF.

Que los artículos 23 y 24 del Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, establecieron el régimen sancionatorio que resulta aplicable ante posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la normativa antes señalada.

Que, a través de la Resolución UIF N° 111/2012, vigente al momento de los hechos, se reglamentó el

procedimiento sumarial tendiente a la aplicación de las sanciones previstas en el citado Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que, así las cosas, en el marco del expediente citado en el Visto, mediante la Resolución de la Unidad de Información Financiera (“UIF”) N° 44 del 13 de octubre de 2020 (v. fs. 597/612) (en adelante denominada la “Resolución de Instrucción” o “Acto de Apertura”), a efectos de establecer la responsabilidad que le pudiera corresponder a M[REDACTED] L[REDACTED] ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (CUIT N° 30-[REDACTED]9462-2) (en adelante denominado indistintamente “Sujeto Obligado” y/o “Me” y/o “la Sociedad” y/o “la Entidad” y/o “MLASA”) y a los integrantes de su órgano de administración y el/los oficial/es de cumplimiento, que se encontraban en funciones en la época en que los presuntos incumplimientos habrían tenido lugar, por haber incumplido, en principio, lo dispuesto en los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; vigente al momento de los hechos objeto del presente sumario, y en los artículos 3° inciso g), 7° incisos f) y g), 12 inciso b), 14 apartado I incisos h), i), j) y k) y apartado II, 18 inciso II), 19 inciso a), 20, 21 inciso f), 22, 26 primer párrafo e incisos b), m) y p), todos ellos de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias; y en el artículo 12 Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 y sus modificatorias.

Que, en este contexto, a través de la Resolución UIF N° 29 del 17 de marzo de 2020 y sus prórrogas, entre otras cuestiones, se dispuso la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos que tramitan ante esta UIF.

Que, posteriormente, en virtud del dictado del Decreto N° 876/2020 y lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución UIF N° 116/2020, se reanudó el curso de los plazos de los sumarios administrativos a partir del 30 de noviembre de 2020.

Que ello, en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/2020 y sucesivamente prorrogado a través de los DNU Nros. 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 577/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 794/2020 y 814/2020.

Que, asumida la instrucción, el 14 de octubre de 2020 se citó en calidad de sumariados a M[REDACTED] L[REDACTED] ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA, a los Sres. Martín Eugenio C[REDACTED], Leonardo Andrés [REDACTED], Adrián Fernando G[REDACTED], Sebastián Guido I[REDACTED], Diego Alberto Á[REDACTED], Francis Joseph Mc G[REDACTED], Lucas P[REDACTED] y a la Sra. Nuria M[REDACTED] y notificó de la apertura del sumario a los fines de que presenten sus descargos y ofrezcan prueba, otorgándoles a tales fines la posibilidad de tomar vista de las actuaciones de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 638/640). Asimismo, se los intimó a efectos de que obtengan el Código de Usuario del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes previsto en la Resolución UIF N° 96/2018.

Que en la sede de M[REDACTED] L[REDACTED] ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA el 14 de octubre de 2020 se notificó al Sujeto Obligado (fs. 645/647) y a los Sres. Martín Eugenio C[REDACTED] (fs. 648/650), Leonardo Andrés F[REDACTED] (fs. 651/653), Adrián Fernando G[REDACTED] (fs. 654/656), Sebastián Guido L[REDACTED] (fs. 657/659), Diego Alberto Á[REDACTED] (fs. 660/662), Francis Joseph Mc G[REDACTED] (fs. 663/665), Lucas [REDACTED] (fs. 666/668) y la Sra. Nuria M[REDACTED] (fs. 669/671).

Que, asimismo, a fin de preservar su derecho de defensa se notificó a Martín Eugenio C[REDACTED] al domicilio que surge del RENAPER mediante Carta Documento (fs. 643/644), al no constar en el expediente la fecha de efectiva notificación de la referida carta, cabe tomar como fecha de notificación la de la presentación espontánea del sumariado a través de su apoderado el Dr. Juan Antonio Z[REDACTED] en fecha 30 de noviembre de 2020 (fs. 706 y

717/718) y el retiro del Código de Usuario para acceder al Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes a fs. 702/703. Todo ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución UIF N° 111/2012.

Que, adicionalmente, se notificó al resto de los sumariados conforme al siguiente detalle: a Leonardo Andrés FERNÁNDEZ al domicilio informado por el RENAPER mediante cédula en fecha 14 de octubre de 2020 (fs. 684/686); a Adrián Fernando G. [REDACTED] mediante la publicación de edictos los días 16, 19 y 20 de octubre de 2020 (fs. 689/690, 693/694 y 697/698); a Sebastián Guido L. [REDACTED] al domicilio informado por el RENAPER, mediante cédula en fecha 14 de octubre de 2020 (fs. 672/674); a Diego Alberto Á. [REDACTED] al domicilio informado por el RENAPER, mediante cédula en fecha 14 de octubre de 2020 (fs. 681/683); a Francis Joseph Mc G. [REDACTED] al domicilio informado por el RENAPER, mediante cédula en fecha 14 de octubre de 2020 (fs. 675/677); a Lucas P. [REDACTED] al domicilio informado por el RENAPER mediante cédula en fecha 14 de octubre de 2020 (fs. 678/680); y a Nuria M. [REDACTED] mediante la publicación de edictos los días 16, 19 y 20 de octubre de 2020 (fs. 691/692, 695/696 y 699/700).

Que el 30 de noviembre de 2020, se presentó el Dr. Juan Antonio Z. [REDACTED] en carácter de apoderado de Leonardo Andrés F. [REDACTED] Sebastián Guido L. [REDACTED] Francis Joseph Mc G. [REDACTED] Lucas P. [REDACTED] S, Diego Alberto Á. [REDACTED] y Martín Eugenio C. [REDACTED] (fs. 706/718), obtuvo el Código de Usuario del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes y solicitó prórroga a fin de presentar el descargo, la cual le fue otorgada por el plazo de DIEZ (10) el que comenzó a correr a partir del vencimiento del plazo original (fs. 702/703).

Que, luego, el 4 de diciembre de 2020, el Dr. Juan Antonio Z. [REDACTED] se presentó en carácter de gestor de Nuria M. [REDACTED] y Adrián G. [REDACTED] (conf. art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y solicitó una prórroga a fin de presentar su descargo (fs. 722).

Que, en esa misma fecha, el Dr. Juan Antonio Z. [REDACTED] se presentó en las actuaciones en carácter de apoderado de M. [REDACTED] L. [REDACTED] ARGENTINA S.A. (fs. 725/729) solicitando que se le otorgara prórroga para presentar su descargo.

Que la Instrucción a fs. 733 otorgó las prórrogas requeridas por el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, plazo que comenzaría a correr desde el vencimiento del plazo original.

Que, posteriormente, en fecha 10 de diciembre de 2020, a fs. 734/738, el Dr. Z. [REDACTED] presentó el poder extendido a su favor por el Sr. Adrián G. [REDACTED] y ratificando la gestión invocada.

Que, finalmente, en fecha 23 de diciembre de 2020, el Dr. Z. [REDACTED] presentó el poder expedido en su favor por Nuria M. [REDACTED] ratificando su gestión (fs. 742/747).

Que en fecha 10 de diciembre de 2020 (fs. 732) se dejó constancia de la vinculación del Código de Usuario del Sr. Adrián Fernando G. [REDACTED] la Sra. Nuria M. [REDACTED] y de M. [REDACTED] L. [REDACTED] ARGENTINA S.A. entregado al Dr. Juan Antonio Z. [REDACTED] en este caso, en carácter de gestor de los primeros dos sumariados y apoderado el último.

Que, por otra parte, dentro del plazo legal establecido, la totalidad de los sumariados presentaron su descargo a través de su letrado apoderado, el Dr. Juan Antonio Z. [REDACTED] (fs. 749/1927). En dicha ocasión, los presentantes esbozaron las defensas que más adelante se analizarán, ofrecieron prueba y solicitaron se desestimaran los cargos objeto del presente sumario.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias, con fecha 14 de octubre de 2020, se citó a prestar declaración al Sr. Adrián Fernando G [REDACTED] y a la Sra. Nuria M [REDACTED] a las audiencias fijadas para el día 16 de diciembre de 2020, lo que fue notificado a los sumariados a través de los edictos publicados cuyas constancias obran agregadas a fs. 689/700. Al respecto, a fs. 740 se dejó constancia de la incomparecencia de ambos sumariados a las audiencias fijadas.

Que, por su parte, el 16 de septiembre de 2022 (fs. 2858/2864) se fijaron las audiencias en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012, el día 24 de octubre de 2022 para los Sres. Martín Eugenio C [REDACTED] Leonardo Andrés F [REDACTED] y Adrián Fernando G [REDACTED] el día 26 de octubre de 2022 para M [REDACTED] L [REDACTED] y los Sres. Sebastián Guido L [REDACTED] y Diego Alberto Á [REDACTED] y el día 28 de octubre de 2022 para los Sres. Francis Joseph Mc. G [REDACTED], Lucas PÈRÉS y la Sra. Nuria M [REDACTED]

Que, a fs. 3120, 3127 y 3130, se encuentran agregadas las actas de incomparecencia de los sumariados a las audiencias señaladas para cada uno.

Que, de conformidad con lo prescripto en el artículo 22 de la Resolución UIF N° 111/2012, el 16 de septiembre de 2022 se abrió la causa a prueba por el plazo de TREINTA (30) días (fs. 2858/2864).

Que en virtud de ello se agregó la documental acompañada y se ordenó la producción de la prueba informativa admitida por la Instrucción.

Que, asimismo, el 25 de noviembre de 2021, la Instrucción en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso a) acápite 1) de la Resolución UIF N° 111/2012, libró un oficio a la CNV a fin de que informe el detalle de las operaciones concertadas por MLPFS a través de MLASA – en su calidad de ALyC- durante el periodo comprendido entre el 18/05/2015 y el 19/05/2016 (fs. 2748/2749).

Que, en respuesta a dicho requerimiento, la CNV remitió la nota obrante a fs. 2750 del 21 de diciembre de 2021 acompañada de un CD con un archivo Excel en el que se informa el detalle de las operaciones. Dicho detalle de operaciones fue agregado a fs. 2751/2778.

Que, seguidamente, a efectos del esclarecimiento de los hechos investigados en las presentes actuaciones y de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva (artículo 1° inciso f) apartado 2) de la Ley 19.549), la Instrucción libró un nuevo oficio a la CNV a fin de que informe el detalle de las operaciones concertadas por M [REDACTED] L [REDACTED], P [REDACTED], F [REDACTED] & S [REDACTED] (en adelante “MLPFS”) a través de CITIBANK NA (sucursal Argentina) en su calidad de ALyC durante el período comprendido entre el 18/05/2015 y el 19/05/2016 (fs. 2782/2783).

Que, en virtud de ello, la CNV remitió su respuesta mediante nota de fecha 25 de abril de 2022 indicando que no se registraron operaciones concertadas de MLPFS a través del agente MAE N°107 CITIBANK NA Sucursal Argentina entre el 18/08/2015 y el 19/05/2016, agregando que en la búsqueda de las operaciones concertadas por MLPFS sólo se han observado operaciones canalizadas por el agente N°636 MLASA (fs. 2788/2789).

Que el 22 de agosto de 2023 (fs. 3470) la Instrucción de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Resolución UIF N° 111/2012 remitió las actuaciones a la Dirección de Análisis de la UIF para que informe si los sumariados debieron formular Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y si, efectivamente las formularon en el periodo objeto de estudio, esto es, 18/5/2015 al 19/05/2016, en relación a las operaciones que fueran identificadas por la Dirección de Supervisión en su Informe Final de fs. 550/562.

Que a fs. 3472/3475 luce la respuesta brindada por la Dirección de Análisis, las que fueron agregadas y de las

cuales se corrió traslado a los sumariados por el plazo de DIEZ (10) días a efectos de que presenten sus alegatos conforme lo informado por la mentada Dirección (fs. 3476).

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012, el 6 de febrero de 2023, no existiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción corrió traslado a los sumariados para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos presenten sus alegatos (fs. 3374).

Que, en tal sentido, los sumariados presentaron sus alegatos en fecha 13 de marzo de 2023 (fs. 3383/3453).

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012, el 22 de marzo de 2023, previa certificación del cumplimiento de la totalidad de las etapas del Sumario obrante a fs. 3456/3458, la Instrucción ordenó el pase de las actuaciones a la elaboración del Informe Final (fs. 3459), el cual fue elaborado en fecha 18 de junio de 2025 (fs. 3503/3587) y su aclaratorio de fecha 18 de agosto de 2025 (fs. 3591/3593).

Que a fs. 3469 y conforme el planteo efectuado por los sumariados relativo a la recusación del Presidente de la UIF, el Dr. Juan Carlos O. [REDACTED] a fin de que se abstenga de intervenir en la resolución del sumario, obrante a fs. 3446 vta./ 3448 se formó el incidente a efectos de dar tratamiento al recurso, el que tramitó por el Expediente N° EX-2023-94969831-APN-DGDYD#UIF.

Que, para ello alegaron que el Dr. O. [REDACTED] intervino con anterioridad en las actuaciones en calidad de Subgerente de Verificaciones de Operaciones Sospechosas de la CNV dictaminando sobre los hechos objeto del presente sumario.

Que, al respecto, detallaron cada una de las intervenciones del Dr. O. [REDACTED] en la etapa presumarial destacando que en los dictámenes concluyó que los hechos investigados constituirían infracciones al régimen de la Ley 25.246 y que, por lo tanto, deberían remitirse a la UIF.

Que, así, a fin de que se resuelva la recusación, solicitaron se eleven las actuaciones al Ministerio de Economía de la Nación por ser dicho ministerio el titular de la jurisdicción dentro de la cual la UIF actuaba.

Que, a efectos de resolver dicho planteo se formó incidente que tramita por el Expediente UIF N° EX-2023-94969831-APN-DDD#UIF el cual fue remitido al Ministerio de Economía para su resolución.

Que, luego, el 29 de febrero de 2024, atento el cambio de gestión, el referido organismo devolvió las actuaciones para su consideración por el servicio jurídico de este Organismo.

Que, en consecuencia, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UIF, en fecha 1 de marzo de 2024, concluyó en relación a la recusación planteada que *"...atento las modificaciones fácticas acaecidas, el doctor O. [REDACTED] no es el funcionario que se encuentra a cargo de la UIF ni tiene competencia para resolver estas actuaciones sumariales, por lo que carece de virtualidad todo pronunciamiento respecto de la recusación incoada, toda vez que la cuestión ha devenido abstracta (v. Fallos: 324:1775)."*

Que, previo a ingresar en el análisis de los cargos detallados en la Resolución de Apertura, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 de la Resolución UIF N° 111/2012, corresponde dar tratamiento a los distintos planteos efectuados por los sumariados.

Que en relación a la prescripción de la acción penal-administrativa, los sumariados sostuvieron en su descargo que la acción penal administrativa se encontraba prescripta respecto de todos los hechos por haber transcurrido en

exceso el plazo de DOS (2) años previsto en el artículo 62 inciso 5) del Código Penal a la fecha en que fueron notificados de la Resolución de Instrucción.

Que, asimismo, sostuvieron que la acción se encontraba prescripta incluso en forma previa al dictado de la Resolución de Instrucción.

Que, al respecto cabe destacar que, desde la óptica de los sumariados, los incumplimientos imputados derivados de las obligaciones previstas en el entonces artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 tuvieron lugar al momento de la constatación, es decir el día 19 de mayo de 2016, mientras que los incumplimientos imputados derivados de las obligaciones previstas por el entonces artículo 21 inciso b) de la ley tuvieron lugar el día CIENTO CINCUENTA Y UNO (151) contados a partir de cada una de las operaciones. Así, el incumplimiento al artículo 21 inciso b) de la primera operación bajo análisis, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2015, se habría configurado el 17 de octubre de 2015, este mismo criterio resulta aplicable a cada una de las operaciones posteriores.

Que, en cuanto a la defensa opuesta por los sumariados relacionada con la aplicación del plazo previsto por el Código Penal, cabe señalar que al momento de haberse constatado los incumplimientos que se imputan en el acto de apertura, se encontraba vigente la Ley N° 26.683 (sancionada en el 2011) que; entre otras cuestiones, modificó la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la que establecía en su artículo 24 inciso 4), que la acción para aplicar la sanción establecida prescribirá a los CINCO (5) años del incumplimiento.

Que, por tal motivo, a los efectos del cómputo de la prescripción resulta aplicable el plazo previsto en la Ley N° 25.246 y su modificatoria, la Ley N° 26.683 y no el establecido en el Código Penal, por lo que dicho argumento debe ser desestimado.

Que, por otra parte, manifestaron los sumariados que el plazo de CINCO (5) años previsto en la Ley N° 25.246 es inconstitucional (por irrazonable, desproporcionado y arbitrario) en tanto establece condiciones más estrictas para la prescripción que las previstas en el Código Penal para los delitos reprimidos con multa (2 años), y en consecuencia resulta aplicable el referido Código Penal.

Que, para sustentar sus dichos, citaron el fallo de la CSJN, “*CNV c/ Telefónica Holdings Argentina S.A.*”, en el que se dispuso que en materia de prescripción debe aplicarse la norma que sea más benigna a los sumariados al imponer un plazo más breve. Asimismo, citaron fallos en el marco de sumarios instruidos por la UIF respecto de hechos ocurridos antes de la reforma del 2011 en los que se aplicó el plazo de prescripción previsto en el Código Penal.

Que, en respuesta al planteo impetrado, cabe destacar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es una atribución del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo, por lo que dicho planteo no debe realizarse en sede administrativa.

Que, sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante indistintamente “la Cámara” y/o la “CAF”) sostuvo en los autos “*DINERS CLUB ARGENTINA SRL COMERCIAL Y DE TURISMO y otros c/ UIF*”, que: “*en lo que respecta a la prescripción, planteo que los actores vinculan con la previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 24.4 de la Ley N° 25.246, cabe adelantar que no tiene el más mínimo andamiaje*”.

Que, para fundar su sentencia, la Cámara expuso allí que: “*(...) el legislador previó en la norma especial de que se trata un plazo de prescripción de cinco años (art. 24.4). La única forma de desplazar esta norma es mediante la declaración de inconstitucionalidad postulada por los recurrentes. Sin embargo, no obstante la invocación de*

garantías constitucionales, el planteo carece de sustento en tanto no demuestra de qué modo tales garantías vinculan con el plazo de prescripción, al menos en las circunstancias de autos. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que lo atinente al régimen de prescripción es materia sujeta a la discreción del legislador (doctrina de Fallos 259:231), lo cual implica que éste puede decidir cuál es el plazo aplicable a las distintas conductas disvaliosas sobre las que legisla. La argumentación de los recurrentes importa un cuestionamiento a la política legislativa sobre el punto. Ninguna exigencia constitucional determina que el plazo de prescripción de las multas (sean de carácter penal o de otra naturaleza, como sucede en este caso) deba ser el mismo que contempla el Código Penal. Tal postulación de los actores sólo traduce una apreciación subjetiva, que carece de entidad para poner en crisis la validez del artículo 24.4 de la Ley N° 25.246”.

Que, adicionalmente, la Cámara añadió que: “el plazo cuestionado, introducido por la Ley N° 26.683, revela la valoración del legislador respecto de la gravedad de determinadas conductas, como lo son las vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, respecto de las cuales nuestro país ha asumido compromisos internacionales a fin de evitar su impunidad. No corresponde a los tribunales modificar tal valoración, si no se pone en evidencia que ella lleva a un resultado manifiestamente irrazonable. En lo que a la prescripción se refiere, se advierte que el plazo previsto no es mayor que el que se encuentra en otras normas del Derecho Administrativo Sancionador, como las que rigen en la legislación bancaria (cfr. Art. 42 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, que establece seis años) o tributaria (cfr. Art. 56 de la Ley N° 11.683). Ello es un reflejo de la diversidad de bienes jurídicos que el legislador estima necesario proteger y de la importancia que les asigna, lo cual es materia de política legislativa. En cuanto interesa, ninguna norma exige que las faltas administrativas sancionadas con multa deben estar sujetas al mismo plazo de prescripción del Código Penal”.

Que, a lo expuesto, la Cámara agregó que: “la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional entrega a la prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar y agrupar, distinguiendo y calificando los objetos de la legislación, siempre que las distinciones se basen en motivos razonables, y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupos de personas o indebido privilegio personal o de un grupo (doctrina de Fallos 320:1166; 315:1594; 315:1190; 313:410; entre muchos otros). Ello revela que la pretensión de que los plazos de prescripción sean idénticos en los casos de multas penales y administrativas carece de todo sustento, máxime cuando la diversidad de bienes jurídicos tutelados pudo llevar al legislador a considerar que, en el caso de la Ley N° 25.246 –donde se trata de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, bienes jurídicos que el Estado argentino se ha comprometido a proteger incluso en sede internacional- la necesidad de evitar la impunidad hacía necesario establecer un plazo mayor que el previsto en el Código Penal”.

Que, asimismo, consideró que: “resulta desacertada la invocación del precedente “Telefónica Holding de Argentina SA” (Fallos 335:1089), donde se trataba de un supuesto en que no existía –en el régimen especial- una norma aplicable en materia de prescripción. Dicha situación, que se verificaba también en el régimen original de la Ley N° 25.246, resulta ajena a la que se configura en autos: aquí el legislador ha previsto una solución específica en la materia, de modo que el intento de apartarse de él exigía del recurrente una demostración clara de su inconstitucionalidad, con argumentos que excedan de lo meramente opinable o de una crítica de lege ferenda”.

Que, por las razones apuntadas, y compartiendo el criterio esgrimido por el Ministerio Público Fiscal, la Cámara resolvió: “rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 24.4 de la Ley N° 25.246 (y sus modificatorias) y, en consecuencia, rechazar el argumento de que, por aplicación del Código Penal, la acción penal administrativa se encuentra prescripta”.

Que, ahora bien, sentado lo anterior, cabe recordar además que, tal como se desprende del fallo antes reseñado y demás jurisprudencia unívoca en la materia, son los propios interesados en la declaración de inconstitucionalidad de una norma quienes deben demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, siendo para ello esencial que precisen y acrediten fehacientemente el perjuicio que le origina su aplicación, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales.

Que, en el caso que nos ocupa, el Sujeto Obligado no ha dado argumentos que demuestren dicha circunstancia.

Que, en virtud de lo expuesto, no corresponde hacer lugar al planteo de prescripción planteado por el Sujeto Obligado, ya que resulta indudable que los incumplimientos detectados durante la supervisión tuvieron lugar encontrándose plenamente vigente las previsiones contenidas en el inciso 4 del artículo 24 de la Ley de PLA/FT y su modificatoria que establecía el plazo de prescripción de la acción punitiva de la UIF en CINCO (5) años.

Que, por otra parte, el fallo citado por los sumariados no resulta aplicable al caso de autos. Ello, toda vez que en dicha causa la CSJN determinó que resultaba necesario establecer cuál es el plazo que correspondía aplicar, ante la ausencia de una norma expresa que regule la prescripción de la acción sancionatoria en el texto de la ley vigente al momento de los hechos. Asimismo, la Corte agregó en dicho fallo que los principios y reglas del derecho penal resultan aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas siempre que la solución no está prevista en el ordenamiento jurídico específico.

Que, por último, en materia de prescripción de la acción sancionatoria, dicho Tribunal entendió que cuando el criterio que se debe observar no resulta de la letra y del espíritu del ordenamiento jurídico que le es propio, corresponde la aplicación de las normas generales del Código Penal.

Que, ahora bien, toda vez que la Ley N° 26.683, sancionada en el 2011, prevé expresamente el plazo de prescripción de CINCO (5) años, las circunstancias fácticas del fallo citado no se corresponden con las de autos. Respecto a los fallos instruidos por la UIF respecto de hechos ocurridos antes de la reforma del 2011, no corresponde su análisis toda vez que los hechos imputados en el presente sumario tuvieron lugar en forma posterior a dicha reforma.

Que, finalmente, detallaron las fechas de comisión de las infracciones imputadas y el correspondiente plazo de prescripción respecto de cada una de ellas (v. fs. 14/15).

Que, en relación a ello, sin perjuicio de señalar que el análisis efectuado por los sumariados es erróneo, en tanto fue realizado de acuerdo al plazo de DOS (2) años previsto en el Código Penal y no al plazo de CINCO (5) años previsto en la Ley N° 26.683, y sin adentrarnos a analizar la prescripción respecto de cada uno de los cargos analizados, destacamos que ninguno de ellos se encuentra prescripto. Ello, toda vez que, en relación a los incumplimientos derivados del entonces artículo 21 inciso a) de la Ley 25.246, tomando la fecha correspondiente al acta de verificación (que data del 19/05/2016), los incumplimientos constatados en dicha oportunidad recién hubiesen prescripto el 19/05/2021 de no haber mediado la notificación del presente sumario, interruptiva de dicha prescripción, la cual se practicó con fecha 14 de octubre de 2020. En consecuencia, no ha transcurrido el plazo de CINCO (5) previsto por la norma.

Que, ello así, conforme fuera resuelto en autos *“Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”* (Expte. N° 21.044/2016, sentencia de fecha 9/5/2017) en trámite por ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual resolvió, en lo que aquí interesa, que *“[e]n tal examen, debe señalarse que según se desprende de la reseña efectuada en el Considerando I, la autoridad de aplicación recién tomó acabado y debido conocimiento*



de las conductas infraccionales el 14/12/2011 con el acta de constatación por medio de la cual, en respuesta a la nota de requerimiento N° 6/2011, agentes de la U.I.F. recibieron determinada documentación –ya detallada– de parte de Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y cotejaron los legajos de algunos de los clientes. De este modo, al ser ésa la primera oportunidad en que la Administración tuvo a su alcance la documentación cuyo examen le permitiera advertir las irregularidades que determinaron -a fin de cuentas- el dictado de la resolución sancionatoria impugnada, resulta razonable considerar que el 14/12/2011 comenzó a correr el curso de la prescripción”.

Que, por otra parte, cabe destacar, en relación a los incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas por el entonces artículo 21 inciso b) de la ley que tuvieron lugar entre el 18/05/2015 y el 19/05/2016, que el cómputo del plazo de prescripción respecto de dichas operaciones debe efectuarse desde el día 151 – fecha en la que se verifica el incumplimiento al deber de reportar – sumando el plazo de CINCO (5) años previsto en la Ley N° 26.683 el cual habría operado el 17 de octubre de 2020 para la primera de ellas, en el caso que los sumariados no hubiesen sido notificados puesto que este acto interrumpe la prescripción. Sin embargo, contrario a lo sostenido por los sumariados, la notificación de la Resolución de Instrucción (acto interruptivo de la prescripción, conf. inciso 5° del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias) se efectuó previamente al 17 de octubre del 2020. En consecuencia, no ha transcurrido el plazo de CINCO (5) años previsto por el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias.

Que, a mayor abundamiento y en cuanto a la aplicación de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador se ha pronunciado la Cámara antes mencionada, señalando “En cuanto a la pretendida aplicación de reglas y principios del derecho penal, propuesta por los encartados en diversos pasajes del recurso, debe recordarse – en línea con lo señalado en la resolución impugnada– que las sanciones aplicadas por organismos administrativos revisten carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal (Fallos: 241:419; 251:343; 268:98; 275:265; 303:1776; 305:2130; esta Sala, “Eteira SRL c/ Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable s/ Conservación de la fauna – Ley 22.421 – Art. 29”, causa n° 16.906/14, del 07/07/15; “Banco Santander Río SA y otros c/ CNV s/ Mercado de capitales – Ley 26.831 – Art. 143”, causa n° 50.335/15, del 09/03/17; “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25” y “Magnanini Rafael y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, causas n° 380/16 y n° 449/16, resueltas conjuntamente el 20/09/16; en igual sentido, Sala III, “Banco Comafi SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, causa n° 475/19, del 05/11/19; Sala IV, “Casino de Buenos Aires SA – Compañía de Entretenimiento SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, causa n° 48.022/14, del 10/11/15). Como ha sostenido desde antaño la CSJN, “no se trata de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas” (Fallos: 19:231; 281:211). De tal modo, los principios y reglas del derecho penal resultarán aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales (Fallos: 335:1089, y sus citas). Es que -vale insistir– el legislador, cuya inconsecuencia no se presume (Fallos: 314:1849; 319:2249; 326:704), estableció un régimen sancionatorio aplicable a los sujetos alcanzados por la ley 25.246 y su normativa reglamentaria, que resulta notoriamente distinto del previsto para las acciones calificadas como delitos, sin que quepa –por extensión– otorgar a aquél, el mismo tratamiento que corresponde darle a éstos, ni aplicar iguales principios en los dos ámbitos, lo cual –cabe aclarar– no obsta, por supuesto, a la vigencia de ciertas garantías constitucionales básicas (esta Sala, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25” y “Pampuro José Juan Bautista y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, causas n° 6.094/19 y n° 6.591/19, resueltas conjuntamente el 11/02/20). Así las cosas, el carácter administrativo de irregularidades como las examinadas en autos impide una

*traslación acrítica y en bloque de la normativa y principios propios de la materia criminal, por lo que no puede convalidarse su aplicación indiscriminada, sino sólo bajo las modulaciones propias del procedimiento sumarial, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico tutelado, reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, en contraposición con la represiva del derecho penal (doc. Fallos: 330:1855; esta Sala, “Unilever de Argentina SA c/ DNCI – Disp. N° 87/13 – Expte. N° S01:389.419/11”, causa n° 21.929/13, del 13/03/14; “Emebur Sociedad de Bolsa SA y otros c/ UIF s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, causa n° 42.840/13, del 14/08/14; “Banco de la Provincia de Córdoba SA y otros c/ BCRA s/ Entidades financieras – Ley 21.526”, causa n° 41.543/13, del 15/07/14; “Transatlántico SA Casade Cambio c/ BCRA – Resol. N° 419/11 – Expte. N° 100.661/04 – Sum. Fin. N° 1138”, causa n° 7.691/12, del 10/07/12; “Sergio Vilella SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, causa n° 2.342/18, del 28/08/18; Sala V, “Urien Loza SA c/ SAGPYA – Resol. N° 1301/06 – Expte. N° S01:291.337/05”, causa n° 16.327/09, del 13/07/10)”, Fallo del 14 de febrero de 2023, “Fiduciaria DPA SRL c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”.*

Que, de conformidad con lo expuesto precedentemente, la Instrucción recomendó desestimar los planteos efectuados en este sentido.

Que, asimismo, en relación a la prescripción de la acción penal-administrativa los sumariados sostuvieron que se configuró una violación a la garantía de ser juzgados en un plazo razonable prevista en los artículos 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional.

Que, a fin de ilustrar sus dichos, mencionaron distintos actos llevados a cabo en el marco del expediente y el tiempo transcurrido entre cada uno de ellos.

Que sostuvieron que la demora incurrida por la autoridad administrativa es exclusivamente imputable a ella, la cual no debe redundar en contra de los sumariados.

Que la Instrucción entendió que no se encuentra vulnerada la garantía de juzgamiento en un plazo razonable. Ello, toda vez que, en primer lugar, como se expuso en el punto que antecede, el plazo de prescripción no llegó a cumplirse debido a la interrupción que produjo la notificación del acto de apertura a la totalidad de los sumariados.

Que, por efecto de la interrupción de la prescripción, en la medida que no transcurran cinco (5) años desde la notificación de la Resolución de Instrucción y hasta la notificación de la Resolución de Clausura del Sumario, no existe sustento para invocar irrazonabilidad en el plazo de juzgamiento.

Que, asimismo, los sumariados no han invocado ni han demostrado la vulneración de su garantía de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional) y su derecho a obtener una decisión en el plazo razonable al que alude el inciso 1) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que, la CSJN en el fallo “Losicer Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (Expte. 105666/86 - SUM FIN 708)” sostuvo que “...el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inc. 1, del art. 8, constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana -cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión

*similar- han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos "Genie Lacayo vs. Nicaragua", fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y "López Álvarez v. Honduras", fallado el 1º de febrero de 2006; "König", fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales)".*

Que conforme se desprende del criterio adoptado por la CSJN en el fallo mencionado anteriormente, no se aprecia en el caso de autos la existencia de una dilación irrazonable por parte de la Administración.

Que, en razón de lo expuesto, la Instrucción recomendó desestimar el planteo incoado.

Que respecto del planteo de prescripción de la acción penal-administrativa por nulidad de la notificación de la Resolución UIF N° 44/2020, manifestaron los sumariados en su descargo que el único hecho susceptible de interrumpir el curso de la prescripción penal-administrativa es la notificación de la resolución que dispone instruir el sumario.

Que, agregaron que, si la notificación del acto es nula, o bien la resolución es nula, entonces la interrupción de la prescripción no se puede considerar válidamente configurada. Como resultado de ello, la Resolución de Instrucción incluyendo hechos prescriptos entre las imputaciones, sería también nula de nulidad absoluta.

Que sostuvieron que tanto el Acto de Apertura de sumario como su notificación son nulas de nulidad absoluta.

Que señalaron tres (3) vicios respecto de la notificación.

Que, primero, indicaron que las cédulas, carta documentos y edictos que la UIF diligenció y publicó, respectivamente, estuvieron incompletos porque no se agregaron a los instrumentos de notificación los dictámenes a los cuales ese acto administrativo remite, en particular el anexo en el cual se encontraban identificadas las operaciones de compraventa de títulos entre MLASA y M [REDACTED] L [REDACTED], P [REDACTED], F [REDACTED] & S [REDACTED] (en adelante "MLPFS") supuestamente sospechosas.

Que agregaron que recién tomaron conocimiento de las mismas al presentarse en el expediente y tomar vista de las actuaciones lo cual habría vulnerado su derecho de defensa y por lo tanto garantía del debido proceso.

Que, adicionalmente, sostuvieron que en el entendimiento de que las notificaciones de la apertura del sumario fueron nulas, sólo podría haberse interrumpido el plazo de la prescripción en las fechas en las que los sumariados se presentaron en el expediente y tomaron vista del mismo (30/11/2020 y 04/12/2020), por lo que solicitan se declaren prescriptas todas las infracciones imputadas cuyos hechos tuvieron lugar con anterioridad a esas fechas.

Que, en segundo lugar, sostuvieron que el oficial notificador no cumplió con las reglas impuestas para el diligenciamiento de las cédulas en el caso de las notificaciones MLASA, al Sr. McG [REDACTED] a los Directores y Oficial de Cumplimiento en la sede social de MLASA.

Que las referidas cédulas fueron fijadas con la copia del Acto de Apertura pero no consta en ellas que la oficial de notificación hubiera intentado entregar las cédulas al encargado del edificio o a un tercero de la casa, antes de fijarlas en la puerta del inmueble, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Que, en consecuencia, en el entendimiento de que las notificaciones de la apertura del sumario fueron nulas, solo podría haberse interrumpido el plazo de la prescripción en las fechas en las que los sumariados se presentaron en el expediente y tomaron vista del mismo (30/11/2020 y 04/12/2020), por lo que solicitan se declaren prescriptas todas las infracciones imputadas cuyos hechos tuvieron lugar con anterioridad a esas fechas.

Que agregaron que idéntica situación corren las cédulas dirigidas a los Sres. [REDACTED], F [REDACTED], G [REDACTED], L [REDACTED], A [REDACTED], P [REDACTED] S y M [REDACTED], diligenciadas en la sede social de Della Paolera N° 265, Piso 11, CABA, toda vez que la oficial notificadora no dejó constancia de haber intentado entregar las cédulas al encargado del edificio en forma previa a fijarlas en la puerta de éste, razón por lo que correspondería declarar la nulidad de dichas notificaciones.

Que, finalmente, sostuvieron que no correspondía notificar por edictos al Sr. G [REDACTED] toda vez que su domicilio en el exterior no era desconocido para la UIF.

Que, al respecto manifestaron que, dicha notificación es nula en tanto su domicilio en Chile era conocido por la UIF, por lo que se lo debió notificar en aquel a través de cédula o instrumento de notificación correspondiente y mediando las correspondientes gestiones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

Que agregaron que la UIF no podía por razones de conveniencia reemplazar la notificación en Chile por edictos.

Que, así las cosas, en el entendimiento de que la referida notificación de la apertura del sumario fue nula, solo podría haberse interrumpido el plazo de la prescripción en la fecha en la que dicho sumariado se presentó en el expediente y tomó vista del mismo (04/12/2020), por lo que solicitan se declaren prescriptas todas las infracciones imputadas cuyos hechos tuvieron lugar con anterioridad a esa fecha.

Que respecto de los tres (3) vicios invocados por los sumariados, cabe señalar en primer lugar, que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 169 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no se puede declarar la nulidad de un acto procesal, si el acto no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado, debiendo existir y demostrarse el agravio concreto, mencionándose además las defensas concretas que no han podido oponerse (conf. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, Jorge L. Kielmanovich, ed. Abeledo Perrot, pág 443).

Que, en primer lugar, resulta atinado señalar que el artículo 41 inciso c) del Decreto N° 894/17 (RLNPA) establece como uno de los medios a la notificación: *"Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación"*. Por su parte, el artículo 141 del CPCCN indica: *"Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares"*. Así, es que en estos casos no hace falta cumplir con la formalidad del aviso, por lo que fijarlo en la puerta de acceso es un procedimiento válido, no susceptible de ser declarado nulo.

Que, por otra parte, cabe destacar que la totalidad de los sumariados han sido notificados de la Resolución de Instrucción conforme surge de los antecedentes, y que los mismos han podido ejercer acabadamente su derecho de defensa (v. descargo acompañado por los sumariados).

Que, a mayor abundamiento, los sumariados no han invocado ni demostrado el agravio concreto que les habría producido las presuntas deficiencias invocadas en relación a la notificación del Acto de Apertura, como tampoco las defensas concretas que no han podido oponer.

Que, a su vez, el artículo 170 del referido Código dispone que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiera sido consentido, aunque fuera tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Agrega que se entiende por consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto.

Que cabe destacar que el planteo de nulidad efectuado en el descargo por los sumariados ha sido realizado fuera del término previsto en dicho artículo, por lo que se entiende que ha mediado consentimiento respecto de la notificación del Acto de Apertura del sumario.

Que, a mayor abundamiento, el artículo 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que la nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido, lo que, tal como surge de lo expuesto previamente, ha tenido lugar en este sumario.

Que agrega dicho artículo que quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración, y mencionar en su caso, las defensas que no ha podido oponer, todo lo cual no fue expuesto por los sumariados.

Que, por último, el artículo 173 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que cuando no se hubiera cumplido con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 172 o cuando fuera manifiestamente improcedente, se desestimarán sin más trámite el pedido de nulidad (rechazo *in limine*).

Que sobre el particular la Procuración del Tesoro de la Nación (en adelante "PTN") ha sostenido que "[a]/ haberse notificado el interesado del acto recurrido y tomado vista de las actuaciones no se encontró en una situación de inferioridad o de dificultad para el ejercicio de sus derechos. No siempre el incumplimiento de los requisitos establecidos determinará la nulidad de la notificación, pues debe partirse del principio que no hay nulidad por la nulidad misma, sino que esa sanción queda supeditada a la existencia de un perjuicio. Expte. N° 1034702/00. Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos; 10 de mayo de 2001" (Dictámenes 237:156).

Que, a modo de corolario, los sumariados han planteado la nulidad por la nulidad misma.

Que, ello, en tanto la notificación del Acto de Apertura ha logrado su finalidad, no se han invocado ni demostrado agravios concretos respecto a la notificación del Acto de Apertura como tampoco se han mencionado las defensas que no han podido oponer debido a la forma en que fue realizada dicha notificación y que, tanto la notificación como el Acto de Apertura se encuentran consentidos al no haberse efectuado el planteo de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto.

Que, finalmente, en relación al Sr. G. [REDACTED] además de señalar que la notificación efectuada se realizó conforme la normativa vigente, resulta atinado mencionar que, tal como lo ordena la Ley 19.550 en su artículo 256: "...[t]odos los directores deberán constituir un domicilio especial en la República, donde serán válidas las notificaciones que se les efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones, incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad."

Que, es decir, los directores tienen la carga de constituir un domicilio en el país, en el caso que nos ocupa, el Sr. G. [REDACTED] no contaba con el mismo por lo que se lo notificó en la sede de la empresa y, a efectos de preservar su derecho de defensa, también se lo notificó por edictos, de conformidad con el detalle descripto previamente.

Que, por todo lo expuesto, la Instrucción entendió que los planteos de nulidad deben ser desestimados.

Que, de manera subsidiaria, y para el caso de que se considerara que la acción penal administrativa no hubiera prescripto, los sumariados realizaron un planteo de nulidad de la Resolución de Instrucción por vicios en su causa, motivación, procedimiento y objeto.

Que, al respecto y antes de analizar cada argumento en particular, corresponde señalar que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, conforme surge de los términos del artículo 12 de la Ley N° 19.549. No obstante ello, la Administración tiene la aptitud de suspender la ejecución de las medidas ordenadas en ese acto por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

Que, a la luz del precepto normativo citado ut supra, se presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare lo contrario por vía del órgano competente (Conf. CSJN: “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ Juicio de Conocimiento”, sentencia del 20/08/1996; y C.N.A.C.A.F, Sala IV: “Biondi, Graciela J. c/ Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. – res. 324/1995”, Sentencia del 19/06/1996, entre otros).

Que, la vigencia de este principio deviene indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administración puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría ser cuestionada con la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos como consecuencia de anteponer el interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la preponderancia que aquellos representan como causa final del Estado (conf. Cassagne, Juan Carlos: “Derecho Administrativo”, Tomo II, Capítulo I, Abeledo-Perrot, 7ma Edición Actualizada).

Que, asimismo, corresponde, en la especie, la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos - consagrado jurisprudencialmente y por la PTN- y de reglas rectoras en materia de nulidades, tales como que el interés en su declaración está limitado por el perjuicio causado por el acto que se pretende inhábil -lo que hace inadmisibles la nulidad por la nulidad misma- y que su interpretación debe ser necesariamente restrictiva y favorable a la subsistencia y validez del acto atacado (Dictamen PTN 195:77).

Que, sentado lo anterior, corresponde analizar los cuestionamientos de los sumariados a fines de determinar si en el caso de autos se verifican las circunstancias que conllevarían la nulidad de la Resolución de Instrucción.

Que los sumariados manifestaron que la Resolución de Instrucción es nula por presentar un vicio en su causa de derecho en tanto la Ley Antilavado es una norma inconstitucional por contener una delegación inconstitucional a favor de la UIF para establecer, por vía de reglamentación, tipos infraccionales. En adición, sostuvieron que los tribunales suspendieron cautelarmente las disposiciones de la referida ley vinculadas al deber de reportar operaciones sospechosas en virtud de la vaguedad y falta de objetividad de sus términos al regular esa obligación.

Que, finalmente, indicaron que la referida inconstitucionalidad les produjo un perjuicio concreto toda vez que aquella vaguedad no fue atenuada sino amplificada por las normas reglamentarias, dando como resultado una imputación administrativa formulada en abstracto y de manera indeterminada.

Que, en primer término, corresponde destacar que más allá del interés teórico que estos temas puedan suscitar, lo cierto es que, tal como lo indicó la Instrucción como instancia integrante de un órgano descentralizado de la administración pública, carece de facultades para pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad incoado

por los sumariados.

Que, ello, toda vez que, en nuestro sistema jurídico, el control de constitucionalidad de las leyes (tanto formales como materiales) es de carácter judicial y difuso, lo que implica que dicho control se realiza exclusivamente dentro de la esfera de la administración de justicia (conf. Bidart Campos, Germán J.: “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo I, Capítulo V, Quinta reimpresión).

Que, en dicha línea, la CSJN ha dicho que: *“En este sentido es claro que, cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocer al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe –sin embargo– admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de éstas. Ello así, porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por lo órgano legislativo...”* (fallos 269:243).

Que, excepcionalmente, se ha admitido que la Administración se abstenga de aplicar una norma que se encuentre en manifiesta contravención con el texto constitucional sólo en aquellos casos en que la tacha de inconstitucionalidad haya sido declarada previamente en sede judicial y que presenten tal similitud que no exista ninguna diferencia apreciable entre el marco fáctico y jurídico del precedente judicial (Dictamen PTN 300:158) o en aquellos casos en que las diferencias entre los casos resulten jurídicamente intrascendentes (Dictamen PTN 298:207).

Que, no obstante ello, dichas circunstancias no se evidencian en el caso de autos, dado que la CNACAF, ha ratificado en diversas oportunidades la potestad sancionatoria de esta UIF por incumplimientos a las obligaciones emergentes del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y a las Resoluciones específicas dictadas por la UIF.

Que, a mayor abundamiento, recientemente la CSJN al expedirse sobre la constitucionalidad del régimen de PLA/FT previsto en la Ley N° 25.246, y en las normas dictadas por la Unidad de Información Financiera, en autos *“Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo”* (FLP 1298/20008/CSI-CA1, sentencia del 4/9/2018), ha expresado que: *“...tratándose de materias que presenten contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (Fallos: 246:345; 311:2453; 328:940). En efecto, la mera indeterminación en el tipo sancionatorio administrativo no implica violación del principio de legalidad penal ya que no comporta, en sí misma, la habilitación implícita al órgano sancionador para llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio (Fallos: 329: 3617) el cual se encuentra constreñido por el principio de razonabilidad.”*

Que, en virtud de lo expuesto, la Instrucción consideró que el planteo impetrado por los sumariados es improcedente por no ser ésta la instancia en la cual correspondería resolver el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 25.246. Ello, sin perjuicio de meritarse que la jurisprudencia nacional ha ratificado, en numerosos precedentes, la constitucionalidad del régimen sancionatorio en materia de PLA/ FT.

Que, en conclusión, la Instrucción entendió que el planteo de nulidad basado en la inconstitucionalidad de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, no resulta procedente.

Que, los sumariados alegaron un vicio en la causa de la Resolución UIF N° 44/20 por ser vagas e imprecisas las reglamentaciones supuestamente infringidas, lo que vicia su objeto y hace que no puedan ser invocadas válidamente como causa para sustentar una imputación infraccional.

Que, al respecto, expresaron los sumariados en su descargo que las normas reglamentarias sobre las cuales la UIF sostiene la imputación de autos, carecen del grado de precisión y determinación necesario, impuesto por las garantías del debido proceso y legalidad (artículo 18 y 19 de la CN) para integrar los tipos penales-administrativos en blanco de la Ley Antilavado.

Que agregaron que las disposiciones de las Resoluciones UIF N° 229/2011 y 229/2014 carecen de idoneidad para integrar las disposiciones de la Ley Antilavado.

Que sostuvieron que son normas que no definen con precisión y claridad los alcances de las obligaciones impuestas a los sujetos alcanzados por el régimen de la referida ley, lo cual impide considerar que se encuentren satisfechos los principios y garantías de seguridad jurídica y legalidad y, por lo tanto, resultan inconstitucionales.

Que a fin de ilustrar sus dichos citan el artículo 18 inciso II) y el artículo 26 incisos b), m) y p) de la Resolución UIF N° 229/2011 y manifiestan que las mismas evidencian una peligrosa falta de determinación que atenta contra las garantías de legalidad y debido proceso.

Que los sumariados adicionaron que las citadas normas reglamentarias no establecen reglas claras que brinden previsibilidad a los sujetos obligados acerca de los alcances de la obligación así como de su cumplimiento o incumplimiento, contribuyendo a la profundización de la inseguridad jurídica.

Que, finalmente, refieren al artículo 7° inciso c) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos que dispone que el objeto del acto administrativo debe ser cierto.

Que, en lo que respecta al planteo de nulidad por ser vagas e imprecisas las normas reglamentarias, los sumariados no dan fundamentación suficiente que sustente el mismo.

Que, asimismo, cabe destacar que las Resoluciones a las que refiere son de carácter general y no resulta razonable ni posible que la norma aplicable prevea todas las vicisitudes que pueden presentarse a los sujetos obligados. La norma prevé los lineamientos y directivas que deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que a mayor abundamiento de los extensos descargos presentados por los sumariados se advierte que han podido defenderse en forma acabada respecto de los incumplimientos imputados.

Que, en virtud de lo expuesto, la Instrucción consideró que la nulidad planteada debe ser desestimada.

Que los sumariados invocaron la nulidad de la Resolución UIF N° 44/2020 por formular imputaciones objetivas, en violación a las garantías constitucionales de debido proceso, culpabilidad y legalidad.

Que, en relación a este punto los sumariados manifestaron que nuestros tribunales sostuvieron que en los procesos sancionatorios administrativos rigen las garantías y los principios propios de todo proceso penal ya que, materialmente, las sanciones penales administrativas y las penales propiamente dichas no difieren entre sí.

Que, en tal sentido, destacaron que una de las garantías fundamentales del Derecho Penal es que el acto acusatorio debe ser claro, autosuficiente y debe describir con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las supuestas infracciones imputadas. Sin ello, el imputado se encuentra en situación de desventaja procesal afectándose su derecho de defensa.



Que, en esa línea, indicaron que resulta necesario que el sujeto acusador no sólo identifique en forma clara al sujeto supuestamente responsable sino que además es necesario que se invoque, precise y detalle en forma clara, cuál fue la intervención material y concreta de las personas imputadas en los hechos investigados, la relación de causalidad con el supuesto resultado antijurídico y lesivo al bien jurídico y si dicha actuación se hizo con dolo o culpa.

Que sostuvieron que la Resolución de Instrucción formula cargos sin identificar la conducta concreta llevada a cabo por las personas humanas imputadas lo cual supone una imputación objetiva reñida con elementales garantías ligadas al debido proceso.

Que respecto a la falta de mención y análisis de los elementos que tendrían por configurada la culpabilidad de los imputados con relación a los hechos investigados, sostuvieron que la jurisprudencia ha descartado la posibilidad de atribuir responsabilidad administrativa con sustento únicamente en factores objetivos como el cargo ostentado por el imputado al momento de configurarse la supuesta infracción.

Que concluyeron que las garantías penales rigen plenamente en los procedimientos sancionatorios administrativos y por lo tanto los actos administrativos que formulan cargos por supuestas infracciones que no contienen un análisis sobre la culpabilidad de los imputados, son nulos de nulidad absoluta.

Que, consecuentemente, la formulación de una imputación objetiva como la de la Resolución UIF N° 44/2020 ocasiona que el acto administrativo presente vicios insanables en su objeto y procedimiento.

Que el Sujeto Obligado planteó la aplicación directa de los principios del derecho penal al presente Sumario, y, por tanto estiman aplicables, las garantías constitucionales desarrolladas por el derecho penal sustantivo y adjetivo.

Que, al respecto, debe señalarse que las sanciones aplicadas por esta UIF por infracciones al régimen en materia de PLA/FT tienen naturaleza administrativa, en tanto no son sino la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246), y no participan de la naturaleza de las “penas” contempladas en el Código Penal de la Nación y sus leyes complementarias. Por ende, no es de su esencia que se apliquen de forma directa y automática, a los sumarios por infracciones al régimen de PLA/FT, las reglas del derecho penal.

Que tal postura ha sido invariablemente sostenida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ha resuelto que las sanciones impuestas por esta UIF “...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturaleza de las medidas represivas propias del derecho penal” (Sala II, causas “Emebur”, citada, y “Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal –Ley 25.246 –Dto. 290/07 Art. 25”, pronunciamiento del 21 de abril de 2015).

Que, con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión “pena” contenida en el entonces artículo 24, inciso 1°, de la ley 25.246 debe interpretarse como sinónimo de “sanción” (Francisco J. D’Albora (h), ‘Lavado de dinero y régimen penal administrativo’, La Ley 2003-C-1272).

Que, es por ello que no puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación directa de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las normas específicas (Fallos: 330:1855).

Que la circunstancia de que en algunos capítulos de la Ley N° 25.246 se hace referencia a figuras y delitos

contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones apuntadas, aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las consecuencias o reproches previstos en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 pertenecen al ámbito del derecho administrativo sancionador (causa “Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25” del 14/08/2014”).

Que dicho razonamiento ha sido también sostenido por la Cámara, entre otros, en los precedentes: i) “Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 36/10” (Expte. 68/10) del 24/05/2016, ii) “Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25”, del 20/09/2016, iii) “Yecora, Fernando José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25”, del 23/02/2016, iv) “Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/2007 Art. 25”, del 23/02/2016; y v) “Sergio Villella SA y otros c/UIF s/Código Penal – Ley 25246 – Dto 290/07 art 25”, Sala II, del 18/08/2018.

Que teniendo en consideración la unánime y consolidada jurisprudencia antes expuesta, cabe concluir que la aplicación de los principios del derecho penal a los sumarios sustanciados ante la UIF por infracciones al régimen en materia de PLA/FT no es directa, sino que debe efectuarse con ciertos matices y considerando las especiales características del régimen administrativo sancionador.

Que en cuanto al carácter formal de las imputaciones, cabe resaltar que el marco normativo describe conductas de cumplimiento exigible, siendo su incumplimiento punible, sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. Tampoco se evalúa la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la legislación vigente.

Que, al respecto, la jurisprudencia sostuvo que “...debe señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose –para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de ‘pura acción’ u ‘omisión’ y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re ‘Castex Propiedades S.A. c/ D.N.C.I.’ del 28/2/2012; ‘Aguas Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C.I.’ del 1/12/2009 y en autos ‘Viajes Ati S.A. – Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.’, del 13/3/2009; entre otros). Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa a instruir el procedimiento sumarial” (CCAF, Sala II, “Sergio Villella SA y otros c/UIF s/Código Penal – Ley 25246 – Dto 290/07 art. 25”, 18/08/2018, “Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25” del 14/08/2014, 14/8/2014 y “Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley N° 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, 21/4/2014).

Que, asimismo, se afirmó que “...el ‘Régimen Penal Administrativo’ de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse (op. cit.,

págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan." (CCAF, Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25", 21/5/2015; "Casino Buenos Aires S.A.- Compañía de Inversiones en Entretenimiento S.A. y Otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 - DTO 290/07 ART 25"; y "SMG Life Seguro de Vida S.A. y Otros c/ UIF-RESOL 220/13 (EX 1690/11)", 16/7/2015").

Que, por todo lo expuesto y de acuerdo con las constancias de autos, cabe concluir que la defensa incoada por los sumariados no puede prosperar.

Que los sumariados alegaron un vicio en la motivación de la Resolución UIF N° 44/2020 por no identificar, precisar y desarrollar extremos relevantes para la correcta acusación: fecha en la cual las supuestas infracciones fueron cometidas y cuáles son, en concreto, las operaciones supuestamente sospechosas y las razones que hacen que ellas sean sospechosas.

Que, en su descargo, los sumariados sostuvieron que la Resolución de Instrucción es un acto acusatorio inválido, con graves vicios en su causa, motivación y objeto porque no especifica las fechas en las cuales ocurrieron las supuestas infracciones y no identifica las supuestas operaciones sospechosas realizadas por MLPFS.

Que sostuvieron que no indica las fechas en las que se habrían cometido las supuestas infracciones imputadas lo cual implica un vicio en la motivación del Acto de Apertura que lo invalida como acto acusatorio. Indicaron que tal dato resulta relevante a efectos de reconstruir los hechos bajo imputación y precisar el sustrato fáctico que es base condicionante del ejercicio de su defensa, además de determinar si la acción penal administrativa prescribió o no antes de que el acto fuera notificado. La necesidad de realizar tal inferencia a cargo del imputado y como resultado de la imprecisión de la imputación es incompatible con las garantías constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia.

Que agregaron que la Resolución de Instrucción no individualiza ni identifica las supuestas operaciones sospechosas. Mucho menos expone y explica los extremos en función de los cuales esas operaciones son supuestamente sospechosas.

Que manifestaron que tal identificación es vital para el correcto ejercicio del derecho de defensa.

Que sostuvieron que no satisface el deber de fundar la acusación a través de la transcripción de informes presumariales ni que se remita a los anexos de dictámenes e informes presumariales donde se detallan dichas operaciones.

Que indicaron que la UIF se limitó a invocar de manera genérica y dogmática los incisos b), p) y m) del artículo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011 para sostener el carácter sospechoso de las operaciones, pero sin detallar qué extremos y características fácticas encuadrarían dentro de los supuestos de esas normas, lo cual no satisface las exigencias de una adecuada motivación.

Que, en primer lugar, tal como fuera dicho previamente, debe tenerse presente que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad.

Que a la luz del precepto normativo citado *ut supra*, se presume que la actividad de la Administración guarda

conformidad con el ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare lo contrario por vía del órgano competente (Conf. CSJN: “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ Juicio de Conocimiento”, sentencia del 20/08/1996; y C.N.A.C.A.F, Sala IV: “Biondi, Graciela J. c/ Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones Fed. – res. 324/1995”, sentencia del 19/06/1996, entre otros).

Que la vigencia de este principio deviene indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administración puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría ser cuestionada con la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos como consecuencia de anteponer el interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la preponderancia que aquellos representan como causa final del Estado (conf. Cassagne, Juan Carlos: “Derecho Administrativo”, Tomo II, Capítulo I, Abeledo-Perrot, 7ma Edición Actualizada).

Que, asimismo, corresponde, en la especie, la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos - consagrado jurisprudencialmente y por la PTN- y de reglas rectoras en materia de nulidades, tales como que el interés en su declaración está limitado por el perjuicio causado por el acto que se pretende inhábil -lo que hace inadmisibles la nulidad por la nulidad misma- y que su interpretación debe ser necesariamente restrictiva y favorable a la subsistencia y validez del acto atacado (Dictamen PTN 195:77).

Que, por otra parte, cabe tener en cuenta que a través de la Resolución de Instrucción, a la que se arribó como consecuencia de un procedimiento de verificación, no se impuso sanción alguna. Por el contrario, a través de la referida Resolución de Instrucción se dio inicio a un procedimiento sumarial, previsto a efectos de que los particulares puedan ofrecer sus defensas respecto de los hechos que les son imputados. Es decir, que no se configuran los supuestos de violación normativa alguna ni a la garantía de defensa en juicio, o perjuicio concreto para los sumariados, o razones de interés público que justifiquen controvertir y desechar la presunción de legitimidad de la que goza el acto atacado, conferida por el artículo 12 de la Ley N° 19.549.

Que corresponde tener presente lo dictaminado sobre este tipo de procedimientos por la Procuración del Tesoro de la Nación: “*La sola disposición de instruir un sumario no constituye agravio suficiente desde que durante su sustanciación se ofrecerá la oportunidad de esclarecer todos los hechos y circunstancias a favor de la Administración y de los propios interesados de los denunciantes y presuntos implicados (...) La decisión de instruir sumario no es susceptible de ser recurrida conforme la doctrina anterior citada en “Dictámenes” 110:34, pues dicho acto no puede afectar derecho o interés legítimo ya que solo habilita para verificar hechos y recién luego del llamado a prestar declaración indagatoria, el trámite se endereza hacia un sujeto determinado. Por su parte, una citación efectuada con ese alcance tampoco resultaría impugnabile, porque integra las amplias y discrecionales facultades investigatorias.*” (Dictámenes: 99:146; 159:113).

Que, en este sentido, el hecho de ser sometido al procedimiento sumarial es parte de la carga que tienen los sujetos obligados y determinados directivos ante las leyes y normativa sobre PLA/FT por la actividad que realizan y los cargos que ocupan. Así, el acto administrativo que ordena la apertura de un sumario no constituye una sanción en sí mismo.

Que, a mayor abundamiento, tal como se detalla en la Resolución de Instrucción, los hechos que motivan las imputaciones han sido descritos con la debida claridad, incluyendo tanto las fechas en que se habrían efectuado las operaciones observadas como los montos correspondientes, expresados tanto en pesos como en dólares. En virtud de ello, los sumariados han podido ejercer plenamente su derecho de defensa, contando con los elementos necesarios para conocer con precisión el alcance de los cargos que se le atribuyen.

Que, ello se evidencia con el extenso descargo presentado por los sumariados de donde se desprende que han podido defenderse de cada uno de los hechos imputados. Asimismo, se han podido defender de los mismos ubicándolos temporalmente, extremo que echa por tierra el planteo articulado.

Que, en tales circunstancias nos enfrentamos, por tanto, a un nuevo planteo de nulidad por la nulidad misma que, como tal, debe ser rechazado.

Que asimismo alegaron un vicio en la motivación de la Resolución UIF N° 44/2020 por incurrir en una fundamentación dogmática e incoherente.

Que alegaron que se trataba de una fundamentación dogmática e incoherente respecto de la supuesta infracción por falta de análisis, detección y reporte de operaciones sospechosas.

Que, en relación a las operaciones, los sumariados sostuvieron que la Resolución de Instrucción no brinda argumentos de por qué razón son sospechosas y por lo tanto debían ser reportadas, la misma hace una remisión a dictámenes presumariales e invoca los incisos b), m) y p) del artículo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011 pero no desarrolla ningún argumento fáctico que lleve a concluir que las operaciones eran sospechosas. Tampoco realiza un análisis de cada una de ellas, limitándose a efectuar consideraciones genéricas sobre el conjunto de las operaciones ocurridas entre el 18/5/2015 y el 19/5/2016. Esa falta de adecuada motivación priva de validez y eficacia al Acto de Apertura.

Que agregaron que lo expuesto respecto de la invalidez de la Resolución UIF N° 229/2011 lleva a la ausencia de un punto de referencia normativo en el que pueda apoyarse la autoridad administrativa para exigir determinadas conductas a los administrados, así como para sancionarlos por no haber satisfecho los requisitos de cumplimiento de la obligación.

Que continuaron manifestando que esa falta de punto de referencia normativo en la reglamentación conlleva la inexistencia de causa de derecho del acto administrativo de alcance particular. Y ello acarrea a su vez una argumentación dogmática de la autoridad administrativa por no poder sustentar su criterio en disposición normativa alguna que precise en forma objetiva y precisa los extremos a tenor de los cuales cabe considerar configurada la infracción.

Que, asimismo, sostuvieron que la Resolución de Instrucción incurre en contradicción, lo cual vicia aún más su motivación. Manifiestan que el Acto de Apertura tiene una transcripción parcial del Informe de la Dirección de Supervisión del cual surge que de las diecisiete operaciones concertadas para su liquidación en dólar cable solo pudo efectuarse su correspondencia con el cliente MLPFS en siete de ellas, por lo que se pudo vincular las cuentas de origen y destino de los fondos con MLPFS. Sin embargo, luego, y remitiéndose al mismo informe, se señala respecto de la totalidad de las operaciones de MLPFS que no pudo verificarse el origen de los fondos con los que el comitente MLPFS opera. Los sumariados sostienen que existe en ello una contradicción por no reconocer esas siete operaciones en las que se encontraban determinadas las cuentas de origen y destino de los fondos.

Que, al respecto, sostuvieron que tal contradicción conlleva a la nulidad de la Resolución de Instrucción por vicio en su motivación.

Que, en respuesta al planteo, cabe señalar que en el Acto de Apertura se encuentran detallados uno a uno y de forma clara los cargos que fueron imputados.

Que cada uno de ellos hizo referencia al hallazgo detectado por la inspección, a la respuesta brindada por la CNV y a la conclusión arribada, tanto por la CNV como por la UIF en una etapa posterior.

Que, asimismo, se encuadró cada cargo en la normativa que se consideró *prima facie* infringida, posibilitando a los sumariados ejercer su derecho de defensa, como efectivamente han hecho sin dificultad, identificando en cada caso correctamente a qué se refería cada cargo.

Que en lo que respecta a la supuesta contradicción señalada por los sumariados, resulta atinente destacar que la determinación del origen de los fondos no se encuentra saldada con la indicación de la cuenta de origen y cuenta de destino.

Que, más aun, se trata de dos requerimientos distintos, por un lado, conocer remitente y receptor de una operación, o cuenta de origen y cuenta de destino y por el otro, conocer de dónde provienen los fondos involucrados en la operación, es decir, de dónde o qué actividad económica generó los fondos, lo cual no se satisface con el simple conocimiento de la cuenta de origen.

Que la determinación del origen de los fondos implica el conocimiento de dónde proceden o cómo se han obtenido, es decir, requiere un conocimiento mayor al del conocimiento del titular de la cuenta de origen.

Que, así, vale concluir que no existe tal contradicción y que el planteo incoado no resulta procedente.

Que, por otra parte, sostuvieron los sumariados que el Acto de Apertura imputa que el Oficial de Cumplimiento no dio respuesta a la CNV durante la etapa presumarial y por lo tanto habría incurrido en un incumplimiento al artículo 7 inciso g) de la Resolución UIF N° 229/2011 y al artículo 12 del Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014.

Que, manifestaron que la Resolución de Instrucción carece de lógica e incurre en un absurdo al afirmar por un lado que MLASA no contaba con los registros de cuentas corrientes de MLPFS y por lo tanto incumplió su obligación de conocer el origen y destino de los fondos de su cliente y por el otro que no cooperó con los requerimientos de la CNV al no aportar dicha información, que supuestamente según las mismas imputaciones efectuadas por la UIF, no tenía.

Que esa falta de lógica de la imputación torna el cargo en una afirmación puramente dogmática y por lo tanto debe ser declarada nula.

Que, por otra parte, agregaron que la UIF no explica en qué sentido ni cómo se tornó más dificultoso el análisis de los hechos a raíz de la supuesta falta de colaboración imputado. Tampoco se precisa las circunstancias de la supuesta falta de entrega por lo que no puede derivarse de ello que haya mediado una negativa deliberada de cumplir con lo requerido o un cese de colaboración con intención de entorpecer u obstruir la tarea de los inspectores.

Que, así, concluyeron que la ausencia de explicación sobre el contexto y conducta del Oficial de Cumplimiento devienen en una imputación que se sustenta en afirmaciones dogmáticas, lo cual es desde su particular óptica inadmisibles, especialmente cuando se trata de actos administrativos por los cuales se ejercen acciones penales administrativas contra los administrados.

Que, en relación al presente planteo, sin perjuicio de adelantar que tampoco puede prosperar, para una mayor claridad expositiva se estima conveniente que su tratamiento sea desarrollado más adelante al examinar los

incumplimientos atribuidos al Oficial de Cumplimiento.

Que los sumariados alegaron un vicio en el procedimiento, la causa, la motivación y el objeto de la Resolución UIF N° 44/20 por haberse soslayado presentaciones realizadas por MLASA durante la etapa presumarial.

Que los sumariados sostuvieron que el Acto de Apertura se encuentra viciado en su procedimiento toda vez que no se agregó a las actuaciones documentación acompañada por MLASA durante la etapa presumarial.

Que indicaron que la CNV, mediante nota SCCNV N° 68/68 LF del 7 de enero de 2019, requirió a MLASA que acompañara la documentación referida a MLPFS determinada por los artículos 11, 12, 14, 19 y 20 de la Resolución UIF N° 229/2011 de la UIF y los estados contables de MLPFS correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 y que MLASA contestó dicho requerimiento en fecha 28 de enero de 2019 mediante nota presentada ante la CNV. No obstante ello, tanto la nota como la documentación no obran agregadas a las actuaciones.

Que, en virtud de ello, sostuvieron que carecen de sustento los cargos formulados por la UIF toda vez que MLASA contaba con la información exigida sobre su cliente MLPFS.

Que, asimismo, concluyeron que la omisión respecto a la referida documentación priva de validez a la Resolución de Instrucción.

Que, al igual que en el punto anterior, este planteo también debe ser rechazado, por los motivos que serán desarrollados más adelante, al analizar el cargo correspondiente.

Que los sumariados alegaron también la atipicidad de los hechos investigados por inexistencia de afectación del bien jurídico protegido por la normativa sobre control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Que sostuvieron los sumariados en su descargo que no existió afectación al bien jurídico protegido por la normativa sobre control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y que, para que pueda atribuirse responsabilidad penal administrativa y consecuentemente imponer una sanción, es necesario demostrar que la acción del sumariado ocasionó una afectación al bien jurídico protegido por la norma supuestamente infringida.

Que, así, esa falta de afectación del bien jurídico protegido conlleva a la atipicidad del hecho investigado y consecuente nulidad de la imputación formulada.

Que al respecto manifestaron también que la afectación del bien jurídico no se presume sino que debe ser alegada y probada por quien formula la acusación, lo cual no fue llevado a cabo por la UIF.

Que agregaron que las operaciones realizadas por MLASA con MLPFS no han sido penalmente investigadas y juzgadas como operaciones de LA o FT por lo que no se puede concluir que la falta de reporte hubiera contribuido a la materialización o facilitación de operaciones ilícitas.

Que refirieron a lo resuelto por la UIF en el expediente JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION SUCURSAL ARGENTINA mediante Resolución UIF N° 16 del 28 de febrero de 2019 donde se resuelve que las deficiencias formales encontradas no revistieron entidad suficiente para poner en riesgo la integridad del sistema financiero por lo que no se aplicó sanción respecto de la imputación efectuada en relación a los incisos e), i) y h) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011.

Que, en relación al presente planteo, cabe considerar lo resuelto por la Sala II de la C.N.A.C.A.F. en los autos caratulados: *“Cerviño, Guillermo A. y Otros c/ Banco Central de la República Argentina”*, sentencia de fecha 29 de abril de 2008, en los que se ha expresado que *“La responsabilidad en la materia sub examine no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular -contrariamente a lo sostenido por los recurrentes-, pues el interés público se ve afectado aun por el perjuicio potencial que aquél pudiere ocasionar (conf. sala II, in re “Banco Patagónico S.A”, del 17/10/1994 y esta sala, in re “Banco Regional del Norte Argentino S.A”, del 6/4/1993), por lo que se descartan los argumentos con los que los recurrentes pretenden eximirse de responsabilidad con motivo de la ausencia de beneficios propios o perjuicios a terceros. Dado el carácter técnico administrativo de las irregularidades en cuestión, su punibilidad surge de la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello se derive, resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes (conf. sala 3ª, in re “Pérez Álvarez, Mario A.” del 4/7/1986). El sistema normativo que rige la actividad de las Entidades financieras prevé que las infracciones en él consagradas se produzcan sólo por el potencial daño que provoque una actividad emprendida sin cumplir con las exigencias legales, por lo que carece de toda Entidad, a los efectos de la aplicación de sanciones, la falta de un efectivo daño a los intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar (conf. sala 3ª, in re “Compañía Franco Suiza de Inversiones S.A”, del 7/10/1982)”*.

Que, en similar sentido, se ha expresado recientemente la misma Sala en los autos caratulados *“Sergio Villella SA y otros c/UIF s/Código Penal – Ley 25246 – Dto 290/07 art 25”*, sentencia del 28 de agosto 2018.

Que, en virtud de lo expuesto, cabe concluir que no resulta procedente la defensa incoada por los sumariados.

Que en relación a lo indicado respecto de lo resuelto por la UIF en el expediente *JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION SUCURSAL ARGENTINA* mediante Resolución UIF N° 16 del 28 de febrero de 2019, es importante destacar que no todos los casos pueden resolverse de manera uniforme, ya que cada situación presenta particularidades propias que deben ser evaluadas en su contexto específico.

Que, en el caso citado, la UIF concluyó que las deficiencias formales detectadas no revestían entidad suficiente para comprometer la integridad del sistema financiero, motivo por el cual no se aplicó sanción respecto de los incisos e), i) y h) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 121/2011. Sin embargo, la correspondencia o no con la aplicación de dicho criterio debe analizarse a partir de los cargos concretamente imputados en este expediente, considerando la naturaleza, alcance y circunstancias de las conductas observadas.

Que, por lo tanto, la Instrucción entendió que la evaluación debe realizarse de forma individualizada, atendiendo a los hechos específicos del presente caso, sin que ello implique una aplicación automática de precedentes que, aunque orientativos, no resultan vinculantes ni necesariamente trasladables.

Que los sumariados alegaron la atipicidad de los hechos por inexistencia de obrar humano doloso o culpable y la inadmisibilidad e improcedencia de responsabilidad de los hechos investigados a los Directores y Oficiales de Cumplimiento de MLASA.

Que alegaron los sumariados en su descargo que la Resolución de Instrucción no invoca y mucho menos acredita una participación personal, en los hechos del caso, de las personas humanas imputadas así como tampoco que hayan actuado con dolo o culpa.

Que, sostuvieron que, si no existe un obrar humano material, concreto, doloso o culposo vinculado a los hechos investigados, no puede concluirse la existencia de infracción y que, si las personas humanas no son responsables, tampoco lo será la persona jurídica imputada y representada por aquella.



Que indicaron que la imputación contra los Directores y Oficiales de Cumplimiento tienen como único fundamento el haberse desempeñado como funcionarios de la compañía pero no por haber intervenido puntualmente en los hechos y que la imputación de responsabilidad en las infracciones requiere de un factor de atribución que proyecte la culpa o el dolo, requisitos que la UIF debería invocar y acreditar con carácter previo a cualquier imputación y, más aún, a la imposición de cualquier tipo de sanción.

Que, de manera preliminar, debemos precisar que la Recomendación N° 35 del GAFI establece que las sanciones deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a las actividad y profesiones no financieras designadas (APNFD), sino también a sus directores y a la alta gerencia.

Que, en sentido concordante, la Ley N° 25.246 en su artículo 24 establece las sanciones que pueden ser aplicables a la persona que, actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica, incumpla alguna de las obligaciones ante la UIF.

Que, así, en el caso de autos por medio de la Resolución de Instrucción se ordenó instruir el presente Sumario a M [REDACTED] LY [REDACTED] ARGENTINA S.A., a los integrantes de su órgano de administración, y a el/los oficial/oficiales de cumplimiento que se encontraban en funciones al momento en que los incumplimientos tuvieron lugar dando aplicación concreta a lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 25.246, vigente al momento de los hechos objeto del sumario.

Que, al respecto, debe tenerse en consideración que las diversas salas que componen la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal –tribunal competente para entender en los recursos judiciales directos que se interpongan contra las resoluciones de la UIF, conforme lo establecido por el artículo 25 de la citada ley y el artículo 33 de la Resolución UIF N° 111/12- han sido contestes al reconocer la responsabilidad de las personas humanas que componen el órgano de una sociedad por incumplimientos a las obligaciones establecidas por la UIF. Ello, en el entendimiento que un ente ideal no se expresa sino a través de sus órganos.

Que, en tal sentido, resulta pertinente señalar que se ha dicho que: *“En el caso de autos, los cargos imputados constituyen incumplimientos -cuyo sustento legal ya se ha examinado- que resultan susceptibles de sanción. Desde luego, ésta es aplicable a la persona jurídica, pero también a sus órganos, ya que la voluntad del ente ideal se expresa a través de ellos (como lo es el Directorio). Si bien los recurrentes argumentan en torno a la imposibilidad de penalizar a las personas físicas sancionadas en el acto impugnado, es menester advertir que las acciones u omisiones de aquéllas son indicativas de un obrar negligente”* (Entre otros: “Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y Otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25.246 - DTO 290/07 ART 25 – 21/05/2015”; “Casino Buenos Aires S.A.- Compañía de Inversiones en Entretenimiento S.A. y Otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 - DTO 290/07 ART 25 – 10/11/2015”).

Que, a su vez, recientemente la CNACAF ha sostenido que *“...es incompatible con la finalidad del especial régimen de autos, a la luz de la trascendente misión de la UIF. Para la aplicación de sanciones como las resistidas en autos –conteste con lo expuesto por la autoridad administrativa en la decisión en pugna–, no es menester daño concreto, ni dolo o culpa en el obrar, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley, dado que el reproche surge de la mera contrariedad objetiva con la regulación y del menoscabo potencial que de ello derive. En efecto, la apreciación de las transgresiones constatadas en autos es objetiva, por manera que, independientemente de la existencia de un detrimento directo, y de un obrar culposo – o aún intencional–, las normas imponen una conducta que debe ser respetada, bajo apercibimiento de sanción, y de allí que no podría válidamente afirmarse que el incumplimiento no llega a tener entidad suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por su falta de entidad (esta Sala, “Daian Sebastián Adolfo y otro c/ UIF s/Código Penal – Ley*

25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, causa n° 48.480/19, del 13/08/20). Así, nada impide que se tipifiquen normativamente conductas de riesgo, que son sancionables independientemente de que tal riesgo se materialice (Sala V, “Forexcambio SA y otros c/ BCRA s/ Recurso directo de organismo externo”, causa n° 39.090/13, del 30/06/16)”, Sala II “FIDUCIARIA DPA SRL Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25”, Causa N° 1260/21, del 14/02/23.

Que, asimismo, se ha sostenido que la responsabilidad que les incumbe a los miembros del órgano de administración no es de carácter objetivo sino que se fundamenta en el incumplimiento al deber de diligencia que pesa sobre cada miembro del directorio por el mero hecho de ocupar el cargo.

Que, al respecto, se ha dicho que: “Al cuestionar la sanción recibida con base en el principio de culpabilidad, los recurrentes critican la norma según la cual la obligación de informar es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración (art. 20 bis de la Ley N° 25.246, texto según la Ley N° 26.683). En rigor, esta norma no hace sino reiterar un criterio general ya contenido en la Ley de Sociedades N° 19.550, norma indudablemente aplicable a la sociedad sancionada. //Se trata de que la Gerencia asuma en los hechos las responsabilidades inherentes (arts. 58, 59, 157 y ss y cc de esa ley), proveyéndolos incluso de atribuciones y medios para hacer valer sus protestas u objeciones ante un proceder que importe incurrir en un mal desempeño (v. en análogo sentido esta Cámara, Sala II, “Transatlántico SA Casa de Cambio y otros c/ BCRA – Resol. 419/11 (Expte. 100661/04 – Sum. Fin 1138)” del 10/07/2012, y sus citas; Sala IV, “Intermutual SA y otros c/ BCRA – Resol. 185/11 (Expte. 100032/01 – Sum. Fin. 1026)”, del 20/10/2013, y sus citas). Por ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan. Ante la inequívoca comprobación de los hechos, no rebatidos en sede judicial, la genérica invocación del principio de culpabilidad no resulta eficaz para excusar las omisiones de actuar imputables a los actores.” (Entre otros: “Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y Otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25.246 - DTO 290/07 ART 25”; “Casino Buenos Aires S.A.- Compañía de Inversiones en Entretenimiento S.A. y Otros c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 - DTO 290/07 ART 25”; “SMG Life Seguro de Vida S.A. y Otros c/ UIF-RESOL 220/13 (EX 1690/11) - 16/07/2015”).

Que, en sentido concordante, la Sala II ha expresado en relación con los directores que se encontraban designados en una Entidad sumariada que el hecho de ocupar el cargo “...los hace responsables en la medida en que no acreditaran -como les incumbe- que tales circunstancias les resultaban ajenas o que invocaran o demostraran la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (conf. esta Sala, in re: “Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. y otros c/B.C.R.A. - Resol. 483/12”, del 12 de junio del corriente), extremos que no se encuentran acreditados en la especie” (“Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25 – 14/08/2014”).

Que, a mayor abundamiento, la Cámara ha manifestado que: “En razón de lo expuesto hasta aquí, la responsabilidad de los directores por la omisión imputada surge clara ya que, en razón de los cargos que detentaban sus integrantes al momento de los hechos investigados en estas actuaciones, no pueden alegar válidamente un desconocimiento de los hechos infraccionales, toda vez que el ejercicio de sus funciones determinaba que debían tomar la correspondiente intervención no sólo para evitar que los desvíos normativos se produzcan sino, incluso, adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. Y que en las deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la organización de la entidad, como así también a quienes son responsables directos de las áreas comprometidas, esto es, los integrantes del directorio de la entidad” (“Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”).

Que, en virtud de lo expuesto, la Instrucción consideró que no debe hacerse lugar al planteo incoado por los sumariados.

Que, por otra parte, manifestaron los sumariados que en varias oportunidades dentro del período bajo análisis estuvieron fuera del país a raíz de viajes por cuestiones laborales o personales. Indicaron que esa ausencia es clave porque las infracciones solo podrían configurarse en el territorio nacional.

Que en relación con los Sres. C [REDACTED], Á [REDACTED] y C [REDACTED] los sumariados manifestaron en su descargo que no ostentaron los cargos de Director u Oficial de Cumplimiento cuando las supuestas infracciones tuvieron lugar.

Que, al respecto, cabe destacar que en fecha 11 de enero de 2021 se ordenó la creación del incidente de falta de legitimación pasiva, que tramita por el Expediente UIF N° 18/2021.

Que el mismo se encuentra pendiente de resolución toda vez que en fecha 8 de febrero de 2022 la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UIF devolvió las actuaciones a esta DRAS indicando que *“resulta preciso que la Instrucción continúe con el tratamiento de sumario, situación que habilitará a esta Asesoría expedirse respecto de la presunta intervención de los sumariados en los hechos bajo estudio...”*.

Que, en virtud de ello, a efectos de celeridad y economía procesal la Instrucción remitió nuevamente (acumulado), junto con el Informe Final y el proyecto de resolución, el referido incidente al servicio jurídico, indicando que se acompaña junto con el principal donde se dio tratamiento a la cuestión planteada.

Que previo a analizar la situación particular de cada sumariado cabe determinar el período de estudio a fin de poder dar respuesta a la cuestión.

Que, en este orden de ideas, el período de estudio del presente sumario tiene inicio el día 17 de octubre de 2015, es decir el día 151 computado desde la primera operación que debió ser reportada como sospechosa por el Sujeto Obligado, la cual tuvo lugar el día 18 de mayo de 2015 y hasta el 2 de noviembre de 2017, fecha en que se constató la falta de documentación respaldatoria y determinación del perfil del cliente (v. fs. 309).

Que los sumariados sostuvieron que el Sr. G [REDACTED] no fue Director ni Oficial de Cumplimiento de MLASA cuando ocurrieron las supuestas infracciones investigadas en autos.

Que el Sr. G [REDACTED] fue designado como Director Titular el 15 de marzo de 2017 por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MLASA lo cual fue notificado a la CNV mediante la presentación #468562.

Que, luego, con fecha 21 de marzo de 2017, el Directorio de MLASA designó al Sr. G [REDACTED] como Oficial de Cumplimiento, hecho que fue notificado a la CNV mediante presentación #474710.

Que, al respecto, adjuntaron copias certificadas de las actas de asamblea y de directorio referidas previamente.

Que, así, observando la documentación acompañada en copia certificada a fs. 1812/1814 se desprende que éste fue efectivamente nombrado director titular de MLASA con fecha 15 de marzo de 2017 (presentación por AIF #468562) y luego, con el acta de directorio N° 329 acompañada en copia certificada a fs. 1677 se demuestra que éste fue nombrado como oficial de cumplimiento de MLASA con fecha 21 de marzo de 2017 (presentación por AIF #474710).

Que, al respecto, cabe señalar que las operaciones cuya falta de reporte se imputa tuvieron lugar entre los días

18/5/2015 y el 19/5/2016, venciendo el plazo de reporte de esta última el día 17/10/2016.

Que, en consecuencia, al momento en que debieron reportarse las operaciones sospechosas analizadas en autos, el Sr. G [REDACTED] no formaba parte del órgano de administración del Sujeto Obligado y, por lo tanto, la Instrucción sugirió declarar la falta de legitimación pasiva del referido sumariado respecto del cargo por falta de análisis y reporte de operaciones sospechosas.

Que, por su parte, cabe señalar con relación a los restantes incumplimientos que el Sr. C [REDACTED] formaba parte del órgano de administración al momento en que los mismos se configuraron con las respuestas brindadas al traslado de observaciones efectuado por la Comisión Nacional de Valores, el día 2 de noviembre de 2017 (fs. 309/372).

Que, en consecuencia, la Instrucción entendió que no corresponde hacer lugar al planteo de falta de legitimación pasiva respecto a los incumplimientos en infracción a los artículos 3° inciso g), 7° incisos f), 12 inciso b), 14 apartado I incisos h), j) y k) y 14 apartado II, 18 inciso II), 19 inciso a), 20, 21 inciso f) y 22 de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que los sumariados sostuvieron que el Sr. Á [REDACTED] fue Director Titular y Oficial de Cumplimiento suplente hasta el 27 de septiembre de 2015 toda vez que el 4 de septiembre de 2015 presentó su renuncia irrevocable al cargo con efecto a partir del 28 de septiembre de ese año, fecha en que el Directorio aceptó la renuncia y notificó a la UIF de ello. Asimismo, esa renuncia fue notificada a la CNV mediante la presentación #336067. Concluyeron que el Sr. Á [REDACTED] no ostentaba ningún cargo en MLASA a la fecha en que se produjeron las supuestas infracciones imputadas.

Que, en lo que respecta al Sr. Á [REDACTED], resulta adecuado destacar que con el acta de asamblea acompañada en copia certificada a fs. 1682 se acredita que el referido sumariado fue director titular y oficial de cumplimiento suplente hasta el 28/09/2015. Esto es, de forma previa a la confección del Acta de Constatación para los incumplimientos relativos al artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246. Asimismo, se advierte que el sumariado no se encontraba en funciones al momento del vencimiento del plazo para reportar las operaciones alcanzadas por el artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246.

Que, en virtud de la determinación del período bajo estudio efectuada, la Instrucción entendió que procedería hacer lugar al planteo de falta de legitimación pasiva respecto a dicho sumariado.

Que los sumariados sostuvieron que el Sr. C [REDACTED] no fue Director ni Oficial de Cumplimiento cuando ocurrieron las infracciones imputadas en autos. En su caso, presentó la renuncia irrevocable a su cargo como Director Titular de MLASA el día 28 de octubre de 2013 con efecto a partir del 31 de octubre de 2013, renuncia que fue aceptada por el Directorio el día 30 de octubre de 2013.

Que, en relación al referido sumariado, se inició también el incidente señalado previamente, el cual será, como fuera aclarado, remitido nuevamente al servicio jurídico para su resolución.

Que luego en fecha 6 de febrero de 2014 los accionistas de MLASA reunidos en asamblea ordinaria y extraordinaria, resolvieron aceptar su renuncia y aprobar su gestión hasta el 31 de octubre de 2013, acta que fue presentada ante la CNV con el número #272874.

Que, al respecto, cabe señalar que con las actas de directorio N° 276 y 277 acompañadas en copia certificada a fs. 1686 y 1687 se acredita que el Sr. C [REDACTED] fue reemplazado el 23 de octubre de 2013 como oficial de

cumplimiento por el Sr. F [REDACTED] y que, en fecha 30 de octubre de 2013 fue aceptada su renuncia al cargo de Director Titular.

Que en virtud de la determinación del período bajo estudio efectuada, la Instrucción consideró que procedería hacer lugar al planteo de falta de legitimación pasiva respecto a dicho sumariado.

Que los sumariados solicitaron en su descargo que se aplique respecto de todos los cargos imputados una medida correctiva en lugar de una sanción en virtud de lo previsto en el artículo 39 de la Resolución UIF N° 21/2018 cuya aplicación retroactiva se impone por ser más benigna.

Que fundamentaron dicho requerimiento en la falta de afectación al bien jurídico protegido por la Ley y que las operaciones de MLPFS no estuvieron penalmente denunciadas e investigadas ante los tribunales de justicia.

Que agregaron que la aplicación de una sanción no sólo se traduciría en un exceso de punición sino que además sería contraria a las garantías de debido proceso, legalidad, culpabilidad, razonabilidad y seguridad jurídica y viciaría de nulidad absoluta el acto administrativo sancionatorio. En relación a ello, refieren al precedente Banco de la Nación Argentina donde se aplicó una medida correctiva respecto del cargo por supuesta falta de reporte de operaciones sospechosas.

Que, al respecto, debe señalarse que aun cuando el principio de retroactividad de la ley más benigna no se encuentre expresamente previsto en el capítulo de garantías y derechos de la Constitución Nacional, la más destacada doctrina ha señalado que su vigencia podría extraerse del principio de razonabilidad de la Constitución Nacional.

Que, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce expresamente dicha garantía y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22) de la Constitución Nacional, dicha Convención forma parte del bloque de constitucionalidad argentino.

Que corresponde señalar que para que dicha garantía resulte aplicable, debe configurarse en el caso un régimen represivo más benigno para el infractor, siendo necesario que la reforma desincrimine la conducta típica, lo que implicaría una total ausencia de interés público en reprimirla por haber dejado de ser objeto de desaprobación, o que refleje un menor reproche cuantitativo, por lo cual la modificación debe afectar directamente la específica norma que reprime la conducta y no los restantes dispositivos extrapenales de los que aquella se nutre.

Que, asimismo, vale destacar que la CSJN, el 11 de abril de 2006 en el fallo “Cristalux” (Fallos: 329:1053), que refleja la postura sentada ya en “Ayerza” (Fallos: 321:824), se expidió sobre la aplicabilidad de la ley penal más benigna al régimen administrativo sancionador.

Que, en el caso particular, vale destacar que la Resolución UIF N° 21/2018, prevé expresamente la posibilidad de la aplicación de ley más benigna, al establecer que *“A los efectos de determinar la aplicación temporal de la presente, y en su caso la ultractividad de las Resoluciones UIF N° 229/2011 y N° 140/2012, deberá darse cumplimiento a las siguientes reglas: a) A los procedimientos sumariales que se encuentren en trámite a la fecha del dictado de la presente, o bien, al análisis y supervisión de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, se aplicará la Resolución UIF N° 229/2011 o en el caso de los fideicomisos financieros con oferta pública la Resolución UIF N° 140/2012, dejando a salvo, en caso de corresponder, la aplicación del principio de la norma más benigna.”*(el resaltado no pertenece al original).

Que los sumariados buscan la aplicación de dicha norma a efectos de que en su caso, se les aplique su artículo 39

de la Resolución UIF N° 21/2018, el cual actualmente prevé: *“El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y deberes establecidos en la presente resolución será pasible de sanción conforme con lo previsto en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan.” Sin perjuicio de ello, la UIF podrá disponer el cumplimiento por parte del Sujeto Obligado, conforme la regulación que establezca, de acciones correctivas idóneas y proporcionales, o en su caso de un plan de regularización, con el objeto de subsanar los procedimientos o conductas observadas.”*

Que la posibilidad de aplicar medidas correctivas se encuentra también prevista tanto en el artículo 14 inciso 10) de la Ley N° 25.246, donde se faculta a esta UIF para *“Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley...”*, como en el artículo 31 de la Resolución UIF N° 111/2012 que establece que: *“El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA dictará resolución en la que, de corresponder, aplicará las sanciones previstas en los artículos 23 ó 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.”* ***La Resolución Final podrá requerir a los Sujetos Obligados la adopción de medidas tendientes a mejorar los sistemas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que hubieran implementado y/o a garantizar la eficacia de los mismos.”*** (el resaltado no pertenece al original).

Que, no existiendo dudas respecto de la posibilidad de que esta UIF aplique medidas correctivas en los casos que así lo considere pertinente, incluso como complemento de las posibles sanciones a aplicar, por lo que la Instrucción tuvo en cuenta dicha circunstancia al proponer la solución de cada uno de los incumplimientos detectados en razón de las características particulares de cada caso concreto en cada cargo particular, siempre que se detecten inobservancias parciales o cumplimientos defectuosos que no hayan puesto en riesgo el sistema PLA/FT del Sujeto Obligado, supuesto contrario al de las presentes actuaciones.

Que, los sumariados solicitaron que, llegado el caso, la sanción a imponer sea proporcionada y razonable. Recordaron que en el derecho argentino ningún acto estatal es válido si no es razonable, principio que se extrae de los artículos 28, 17 y 33 de la Constitución Nacional. Asimismo, indicaron que la razonabilidad alude a la medida con que debe ejercitar la administración sus potestades y ella supone la proporcionalidad que opera a través de un proceso valorativo de ponderación justificada y razonable de los elementos de la norma habilitante del órgano emisor.

Que, agregaron que este principio, además de ser de índole constitucional, fue consagrada en la LNPA conjuntamente con el de razonabilidad, lo cual hace que sea de inexcusable aplicación. Manifestaron que a la luz de los hechos y de los términos de la Resolución UIF N° 44/2020, para el caso que se decidiera aplicar multa a los sumariados, correspondería aplicar la escala del inciso 3) del artículo 24 de la Ley N° 25.246, ello atento que las infracciones objeto de cada cargo son meramente formales.

Que, si la UIF pretendiera aplicar una multa según la escala prevista en los incisos 1) y 2) del referido artículo 24 de la Ley Antilavado, considerando la valuación que la UIF hizo de las operaciones de compra-venta de títulos valores que tuvieron lugar entre el 18/5/2015 y 19/5/2016 con MLPFS, tal sanción sería arbitraria y nula de nulidad absoluta.

Que, al respecto, agregaron que la escala prevista en esos incisos es manifiestamente inconstitucional toda vez que tanto la aplicación de su tope como de su mínimo derivaría, en este caso, en un monto a todas luces irrazonable. Asimismo, sostuvieron que la aplicación de toda pena o sanción debe tener una relación razonable con la infracción en virtud del principio de proporcionalidad con el fin de evitar la concurrencia de un “exceso de punición”.

Que, finalmente, sostuvieron que la irrazonabilidad de la aplicación de la escala prevista en los incisos 1) y 2) del artículo 24 de la Ley N° 25.246, surge del reproche formulado a los sumariados por infracciones administrativas formales con la imposición de una multa similar a la que correspondería si las operaciones fueran consideradas, en el marco de un proceso penal, operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De esta forma, se estaría aplicando una sanción administrativa tan gravosa como una sanción penal. Concluyeron que ello sería absurdo y que de ese absurdo deriva la inconstitucionalidad de la aplicación de la multa prevista en los incisos 1) y 2) de la Ley N° 25.246.

Que esta UIF como órgano descentralizado de la Administración Pública, carece de facultades para pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad incoado por los sumariados.

Que, nuevamente cabe agregar que, toda vez que, en nuestro sistema jurídico, el control de constitucionalidad de las leyes (tanto formales como materiales) es de carácter judicial y difuso, lo que implica que dicho control se realiza exclusivamente dentro de la esfera de la administración de justicia (conf. Bidart Campos, Germán J.: "Manual de la Constitución Reformada", Tomo I, Capítulo V, Quinta reimpresión).

Que, en dicha línea, la CSJN ha dicho que: *"En este sentido es claro que, cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocer al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe –sin embargo– admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de éstas. Ello así, porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por lo órgano legislativo..."* (fallos 269:243).

Que, excepcionalmente, se ha admitido que la Administración se abstenga de aplicar una norma que se encuentre en manifiesta contravención con el texto constitucional sólo en aquellos casos en que la tacha de inconstitucionalidad haya sido declarada previamente en sede judicial y que presenten tal similitud que no exista ninguna diferencia apreciable entre el marco fáctico y jurídico del precedente judicial (Dictamen PTN 300:158) o en aquellos casos en que las diferencias entre los casos resulten jurídicamente intrascendentes (Dictamen PTN 298:207).

Que tal como puede apreciarse y del análisis de las actuaciones, no puede afirmarse que alguna de esas situaciones se encuentre presente en el caso.

Que, al respecto, se resolvió en la causa "HCI S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246- Dto. 290/07 Art. 25" que: *"[e]n ese sentido, lo cierto es que la autoridad de aplicación tuvo en cuenta los parámetros señalados en orden a la graduación de la sanción y, en función de la norma que resulta aplicable –esto es, el inc. 3° del art. 24 de la Ley N° 25.246-, el monto impuesto a cada sumariado se advierte dentro de los límites legales y no se exhibe como desproporcionado en los términos impuestos por la norma."*

Que, por ello, el planteo referido a la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, no resulta procedente.

Que habiendo dado tratamiento a las defensas interpuestas, se procederá en adelante a resolver los cargos imputados.

Que, a fin de resguardar la identidad de los clientes del Sujeto Obligado analizados en las presentes actuaciones, se los identificará con sus correspondientes iniciales.

**Que en relación con el cargo por falta de identificación y conocimiento del cliente la Instrucción tuvo por**

**acreditado el incumplimiento en infracción al artículo 14 apartado I incisos h), j) y k) de la Resolución UIF N° 229/2011 y aconsejó la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).**

Que en la Resolución de Instrucción se imputó: *"Que en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de identificación y conocimiento del cliente, la Dirección de Supervisión indicó que, conforme surge de los términos vertidos en el punto diez (10) del acta de inspección obrante a fs. 5, la CNV le solicitó al Sujeto Obligado que aporte los registros de las cuentas corrientes de títulos, de pesos y de moneda extranjera de sus clientes y que, en respuesta a lo requerido, el Oficial de Cumplimiento de ML [REDACTED] L [REDACTED] ARGENTINA manifestó que, "...no posee la custodia de sus clientes y que la misma sería realizada por otro agente y no contarían con esa información". //Que, asimismo, el mencionado Oficial agregó que el Sujeto Obligado sólo poseía dos (2) clientes siendo el principal de ellos M., L., P., F. Y S. INC. (en adelante, también MLPF&S, indistintamente). El otro era la firma P. E. S.A., respecto del cuál informó haber realizado únicamente una operación puntual. //Que, en base a ello, la Dirección informante indicó que la inspección "... se centró en el análisis de la operatoria efectuada por el comitente MLPF&S", respecto del cual señaló que el mismo integra el grupo económico al que pertenece M. L. A., esto es al B. O. A. M. L. I. //Que, igualmente, expresó que de acuerdo a lo que surgía de los informes confeccionados por la CNV (detallados en el punto 2 de su Informe Final) en ocasión de la primera verificación efectuada el 19 de mayo de 2016 se detectaron una serie de observaciones formales, las cuales fueron parcialmente subsanadas mediante las medidas correctivas aplicadas por dicho organismo colaborador (fs. 429/431). //Que, no obstante, la Dirección de Supervisión destacó que "... siguieron persistiendo incumplimientos en relación a identificación y conocimiento del cliente." Ello así, y con fundamento en la documentación obrante en autos, la instancia preopinante indicó que "...no surge...": (i) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado; (ii) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/ o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo prescripto en los puntos a) a j) del artículo 13; (iii) Titularidad del capital social (actualizada); y (iv) Identificación de los Propietarios/Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica. //Que, en base a ello, la Dirección de Supervisión entendió que estas falencias constituían -prima facie- un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, apartado I, incisos h), i), j) y k) de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias (conforme apartado II).*

Que en lo que hace a la normativa aplicable, el artículo 14 en su apartado I incisos h), i), j) y k) de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias establecen: *"Datos a requerir a Personas Jurídicas. Clientes Ocasionales-Habituales. I. En el supuesto de Personas Jurídicas que revistan el carácter de clientes ocasionales, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente, por lo menos, la siguiente información: (...) h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado. // i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme los puntos a) a j) del artículo 13. //j) Titularidad del capital social (actualizada). //k) Identificación de los Propietarios/Beneficiarios y de las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica."*

Que, respecto del presente cargo, los sumariados sostuvieron que MLASA contaba con la información cuya falta se imputa. Indicaron que la información requerida estaba disponible y era conocida por MLASA por lo que no se le puede reprochar no haber conocido a su cliente.

Que a fin de fundar sus dichos indicaron que MLPFS es una compañía renombrada y reconocida a nivel mundial



dedicada a realizar inversiones, asesoramiento y actividades de corretaje en los mercados de capitales en todo el mundo.

Que la misma es una sociedad sujeta a control y regulación por parte de la *Securities and Exchange Commission* (SEC), autoridad administrativa de aplicación de las regulaciones sobre el mercado de capitales de los Estados Unidos de América.

Que, atento ello, MLPFS se encuentra sujeta a obligaciones de informar al mercado y al público inversor sobre su situación económico-financiera y societaria, en forma similar al deber que tienen los agentes del mercado de capitales en Argentina respecto de la CNV. Esa información que MLPFS suministra a la SEC es de acceso y consulta pública.

Que agregaron que a través de ese sitio web puede accederse a los estados contables consolidados y auditados de MLPFS correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, citando el link de acceso a cada uno de ellos.

Que señalaron que de esos documentos surge que el controlante directo de MLPFS era *B. N. A. H. C.* siendo ella controlada por *B. o. A. C.*

Que, asimismo, agregaron que los estados contables de 2015 y 2016 fueron acompañados por MLASA durante la etapa presumarial y acompañaron copia de los mismos al descargo.

Que, por otra parte, indicaron que la condición de accionista directo de MLPFS de *B. N. A. H. C.* también surge del formulario de apertura de cuenta suscrito por el Sr. R. K. J. (fs. 147).

Que finalmente mencionaron los formularios 10-k presentados por *B. o. A. C.* ante la SEC, respecto de los períodos 2015 y 2016, en los que se encuentra asentado que MLPFS es una compañía subsidiaria de aquella sociedad.

Que, en virtud de ello, sostuvieron que no se puede reprochar a MLASA la falta de conocimiento de la estructura del capital social de MLPFS y de su controlante/beneficiario final por tratarse de información pública, de fácil acceso y conocida por MLASA.

Que, por otra parte, manifestaron que MLPFS está sujeta a fiscalización y control de *Financial Industry Regulatory Authority Inc.* (en adelante "FINRA"), entidad privada, sin fines de lucro, autorizada por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para controlar y fiscalizar a los agentes de bolsa en ese país y verificar que se respeten los derechos de los inversores y la seguridad y transparencia. En virtud de ese control, MLPFS debe suministrar a FINRA información entre la cual se encuentra quiénes son sus accionistas directos e indirectos y la composición del directorio. Esa información se encontraría online para ser consultada.

Que, de la información disponible en la página web de FINRA surge que el accionista directo de MLPFS es *B. N. A. H. C.*, que su controlante es *B. o. A. C.* (la cual controla a *N. H. C.*, la cual a su vez controla a *B. N. A. H. C.* y surge también el nombre y apellido de sus directores y otros funcionarios relevantes.

Que aseguraron que esta información era de acceso público y conocida por MLASA. Sostuvieron que esta disponibilidad pública de información respecto de MLPFS desbarata cualquier intento de imputar a MLASA el desconocimiento de su cliente por la inexistencia de respaldo documental impreso.

Que agregaron a ello que el artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011 no establece que tal documentación

deba tenerse en soporte papel.

Que, asimismo, afirmaron que oportunamente suministraron a la CNV copia apostillada y traducida de la resolución societaria de MLPFS por la que se designó al Sr. R. K. J. como *Managing Director* de la sociedad, con facultades suficientes para representar a MLPFS (fs. 313/327). Por lo que se cumplió en recabar la documentación requerida en el inciso h) del artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, por su parte, indicaron que los datos personales del Sr. K. fueron recabados por MLASA a través del formulario de apertura de cuenta de MLPFS así como su DDJJ sobre PEP (fs. 147/148 y 153).

Que, así, manifestaron que no puede sostenerse que hayan incumplido con la obligación de contar con la información requerida por el artículo 14 incisos h) e i) de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, finalmente refirieron que MLASA y MLPFS integran el mismo grupo económico el cual tiene cúspide en *B. o. A. C.* Por ello no resultaría razonable suponer que MLASA no conocía la composición del Directorio de MLPFS, la distribución de su capital social y a quién correspondía su control directo e indirecto.

Que respecto de esta misma imputación solicitaron la aplicación retroactiva de la Resolución UIF N° 21/2018 aduciendo que establece exigencias formales más benignas que las previstas en la Resolución UIF N° 229/2011 para el caso de clientes que sean subsidiarias de compañías que listan en mercados locales o internacionales autorizados y estén sujetas a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información.

Que, en relación a ello, manifestaron que MLPFS es subsidiaria de *B. o. A. C.*, sociedad listada en la bolsa de Nueva York y sujeta a regulaciones sobre transparencia y revelación de información a cargo de la SEC.

Que agregaron que resulta exigible la aplicación de la garantía de la retroactividad de la ley penal más benigna, garantía plenamente aplicable en procedimientos administrativos sancionatorios conforme los sostuvo la CSJN y tribunales inferiores y citaron el artículo 42 inciso a) de la Resolución UIF N° 21/2018.

Que finalmente refieren a ciertos precedentes de la UIF donde se sostuvo la aplicación de la garantía de la retroactividad de la ley penal más benigna, a saber: “Banco de Galicia y Buenos Aires” (Resolución UIF N° 32/2020); “Willis Argentina S.A.” (Resolución UIF N° 30/2019); “JP Morgan Chase Bank National Association Sucursal Argentina” (Resolución UIF N° 16/2019); y “Banco de la Nación Argentina” (Resolución UIF N° 293/2018).

Que en virtud de esa aplicación retroactiva de la Resolución UIF N° 21/2018 es que sostuvieron que no se puede formular reproche penal administrativo alguno a MLASA.

Que, en primer término, cabe destacar que las imputaciones efectuadas en la Resolución de Instrucción se corresponden con las consideraciones efectuadas por la CNV y la Dirección de Supervisión de esta UIF en su Informe Final de fs. 550/563.

Que en relación con la copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado, si bien se encuentra agregada la designación del Sr. R. K. Jr. Como *Managing Director* de la sociedad a fs. 313/317, lo cierto es que dicha documentación no es suficiente para tener por cumplido lo requerido en el inciso h) apartado I del artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011, por cuanto la sola identificación de uno de los representantes de la Entidad no da claridad respecto de la conformación de su órgano de administración.

Que, a diferencia de lo requerido en el inciso i) del artículo 14 de la mencionada Resolución, no se aclara que deba presentarse únicamente copia del acta de nombramiento de la autoridad, representante legal y/o autorizado con uso de firma social que opere ante el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica, sino que el requerimiento es general.

Que, si bien se acompañó la designación de quien firmó la documentación del cliente MLPFS ante MLASA, ello no da cumplimiento a lo requerido en el mencionado inciso.

Que, dicho incumplimiento fue constatado por la Dirección de Supervisión de esta UIF conforme surge de fs. 552 y, los sumariados, no han logrado desvirtuar el cargo imputado toda vez que no han demostrado la oportuna presentación de la copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social.

Que, por ello, la Instrucción consideró que la imputación se encuentra acreditada en infracción al inciso h) del artículo 14 apartado I de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que con respecto a los datos identificatorios de las autoridades, representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme los incisos a) a j) del apartado I del artículo 13 de la Resolución UIF N° 229/2011, a fs. 147/ 148 se encuentra agregado el formulario de apertura de cuenta de donde surgen los siguientes datos del Sr. R. K. Jr., representante de MLPFS que actuó frente al Sujeto Obligado: nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, pasaporte, identificación tributaria, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, profesión y declaración jurada de persona expuesta políticamente (PEP).

Que la Instrucción entendió que se encontrarían cumplidos los requisitos previstos en el artículo 13 de la Resolución UIF N° 229/2011 incisos a), c), d), f), g), h), i) y j), faltando únicamente la indicación de lugar de nacimiento y la copia del pasaporte del Sr. K.

Que teniendo en cuenta el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y toda vez que la ausencia de esos dos requisitos no revisten calidad de graves y no afectan el sistema PLA/FT del Sujeto Obligado, la Instrucción consideró que no tienen entidad suficiente para considerar que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 inciso i) de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que en lo que respecta a la titularidad del capital social (actualizada), si bien surge del formulario de apertura de cuenta de MLPFS (fs. 147) que B. N. A. H. C. ejerce el control al 100% del cliente, lo cierto es que dicho formulario no estaría actualizado al momento de la inspección por ser del año 2015.

Que ello no sólo resulta contrario a la exigencia legal sino que también lo es respecto a lo prescripto en el propio Manual de Procedimientos en materia PLA/FT de MLASA. En tal sentido, dicho manual establece *“Será responsabilidad del Front Office con el apoyo de Operaciones de verificar que los datos y documentos de identificación de sus clientes, se mantengan actualizados, para lo cual, durante el curso de la relación comercial, se verificará y solicitará la actualización tanto de los datos como de los documentos, en los siguientes casos: // Cuando venza el ciclo de actualización en LEO según el riesgo del cliente (DUE DATE REPORT). // Cuando detecten cambios significativos en el comportamiento transaccional habitual del cliente y de los cuales el ejecutivo de cuenta no haya podido proveer una explicación razonable de los mismos.// Cuando surjan dudas acerca de la veracidad de dichos documentos. // Tratándose de clientes de Alto Riesgo, así como de aquellos que se consideren Personas Políticamente Expuestas (SPF/PEP), la actualización de la carpeta del cliente se deberá hacer una vez al año, para lo cual se deberá revisar que la documentación en la carpeta del cliente continúe*

*vigente y que de acuerdo a los estatutos de la compañía no hayan habido cambios en la denominación social, en su estructura corporativa y en sus representantes legales. El formato de conocimiento del cliente, se deberá actualizar sobre el sistema LEO de manera anual invariablemente para todos los clientes de alto riesgo y los clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas."*

Que conforme surge de la determinación del perfil del cliente agregada a fs. 395/396, se calificó a MLPFS como cliente de riesgo alto, por lo que, conforme lo establece el Manual, debería contar con información actualizada anualmente de dicho cliente.

Que, por otra parte, lo alegado por los sumariados en cuanto a la disponibilidad de la información en las páginas web de la SEC y de FINRA no logra desvirtuar el presente cargo. Dicha defensa contraría lo dispuesto en el propio Manual de Procedimiento del Sujeto Obligado que refiere *"MLSA debe informar y proveer la documentación requerida por la UIF, la CNV (...) en su carácter de órganos de contralor en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo (...) MLSA se compromete a remitir tan pronto como sea posible cualquier tipo de información y/o documentación a su alcance requerida por la UIF, la CNV (...)"* (fs. 25/26).

Que el hecho de que la información se encuentre allí disponible no es suficiente, el Sujeto Obligado debía no solo conocer sino también contar con la misma y debió haberla entregado a la CNV al momento de la supervisión de conformidad con lo dispuesto en la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, así las cosas, teniendo en consideración que la Dirección de Supervisión constató la falta de documentación relativa a la titularidad del capital social actualizada y que los sumariados no lograron desvirtuar el cargo, la Instrucción consideró que la imputación se encuentra acreditada en infracción al inciso j) del artículo 14 apartado I de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que en lo atiente a la identificación de los Propietarios/Beneficiarios y de las personas que, directa o indirectamente, ejerzan el control de la persona jurídica, una vez más alegaron los sumariados que MLPFS es subsidiaria de B. o. A. C. y que por lo tanto no se puede reprochar a MLASA la falta de conocimiento de su controlante o beneficiario final. Asimismo, sostuvieron que dicha información es pública, de fácil acceso y conocida por MLASA.

Que, nuevamente, cabe aclarar que no basta con que la información sea pública para acreditar el conocimiento por parte de MLASA de los beneficiarios finales del cliente MLPFS, dicha documentación debió estar disponible y ser entregada a los agentes de la CNV al momento de su requerimiento.

Que, a mayor abundamiento, a fs. 309 MLASA indicó que *"la Sociedad no cuenta beneficiarios finales. A tal fin se acompaña un diagrama con sus accionistas y compañías vinculadas."* Ahora bien, tal como lo sostiene el GAFI, el beneficiario final es siempre una *persona natural* por lo que aquella manifestación es a todas luces improcedente. En este punto cabe también referir la definición de beneficiario dada en el artículo 2 inciso g) de la Resolución UIF N° 229/2011, que establece: *"Propietario/Beneficiario: se refiere a las personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución."*

Que la definición otorgada en la norma nos lleva a concluir que a efectos de cumplir con el requisito de identificación del beneficiario final debe señalarse a la persona humana detrás de la cadena de control de la Entidad.

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han ilustrado la necesidad de identificar y verificar la identidad de los beneficiarios finales, dado que *“por medio de complejas cadenas de propiedad de personas y estructuras jurídicas en numerosas jurisdicciones se puede ocultar la identidad de los “verdaderos propietarios” de los activos, incluidos los financieros, así como la verdadera finalidad y el origen de los fondos o los activos. Para reforzar el anonimato se pueden usar otros mecanismos, como acciones al portador, apoderados de accionistas o de miembros del órgano de administración, o entidades tales como fideicomisos, sociedades pantalla (shell companies) o sociedades inactivas y otras estructuras similares. En última instancia, se oculta la identidad de los “verdaderos propietarios”, es decir, los beneficiarios finales, frente a las autoridades tributarias y otras autoridades competentes”* (Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales, “Construyendo Marcos Eficaces de Beneficiarios Finales: un Manual Conjunto del Foro Global y el BID”, 2022).

Que, por otra parte, cabe destacar que, si bien MLPFS es subsidiaria de *B. o. A.*, ello no resulta suficiente para tener por acreditada la identificación de los beneficiarios finales, es necesario que ello se encuentre documentado y a disposición del órgano de contralor.

Que, así las cosas, habiendo sido constatada la falta de identificación de los propietarios/beneficiarios y de las personas que, directa o indirectamente ejerzan el control de la persona jurídica por parte de la Dirección de Supervisión de esta UIF y, toda vez que los sumariados no lograron desvirtuar el cargo imputado, la Instrucción concluyó que el mismo se encuentra acreditado en infracción al inciso k) del apartado I del artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que el artículo 23 de Resolución UIF N° 229/2011 establece que el legajo del cliente debe contener las constancias de cumplimiento de los requisitos prescriptos en los artículos 11 a 17 y 20 de la misma.

Que, finalmente, los sumariados solicitaron la aplicación retroactiva de la Resolución UIF N° 21/2018, más específicamente el inciso f) del artículo 25 de la Resolución UIF N° 21/2018, para ello citaron el precedente del Banco Nación y dos precedentes de la Sala III de la CNCAF (“Forlón” y “Banco de la Nación Argentina”).

Que manifestaron que en tanto la norma prevé en un artículo distinto la obligación de identificación respecto de los organismos públicos, ello significaba según la propia UIF, que el regulador buscó dar un tratamiento especial a los clientes que fueran organismos públicos, eximiéndolos de la obligación de obtener los documentos requeridos para las personas jurídicas en general. Sostuvieron que en este caso el artículo 25 de la Resolución UIF N° 21/2018 otorga igual tratamiento a los organismos públicos como a las subsidiarias de compañías que listen en mercados internacionales y estén sujetas a requisitos de transparencia y/o revelación de información, que lo hace en un artículo especial distinto al de los clientes personas humanas y jurídicas en general (artículos 23 y 24) y exige al Sujeto Obligado información mínima de sus clientes.

Que concluyeron que en tanto MLPFS se trata de un cliente respecto del cual aplican los requisitos de identificación mínimos, se los exime de obtener los documentos que se debe gestionar y obtener con relación a las personas jurídicas en general, por lo que no le resultaba exigible a MLASA confeccionar un perfil de su cliente MLPFS.

Que al respecto aclararon que MLPFS es subsidiaria de *B. o. A. C.* y por ello debería aplicarse dicha normativa.

Que, ahora bien, conforme surge de fs. 328 MLPFS pertenece al grupo económico de *B. o. A. C.* Por su parte, de fs. 401 vta. se desprende que MLASA también pertenece a dicho grupo económico. No obstante ello, en ningún

momento se observa, en la documentación presentada por los propios sumariados, que MLPFS y MLASA se encuentren relacionadas.

Que en lo que respecta a la norma cuya aplicación se solicita prevé que **las sociedades, sus filiales, y subsidiarias**, que listan en Mercados locales o internacionales autorizados y estén sujetas a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, podrán abrir una cuenta y dar inicio a la relación comercial sin otro trámite que: (i) la identificación en los términos del artículo 23 de la persona humana que operará la cuenta, y (ii) la entrega de copia del instrumento por el que dicha persona humana haya sido designada a tales efectos.

Que, es decir, habla únicamente de las sociedades, sus filiales y subsidiarias, no indica nada respecto de empresas de un mismo grupo económico por lo que, la Instrucción entendió que no resulta aplicable el inciso f) del artículo 25 de la Resolución UIF N° 21/2018 al caso que nos ocupa.

Que, en conclusión, la Instrucción consideró que se encuentran acreditados los incumplimientos imputados en infracción a los incisos h), j) y k) del apartado I del artículo 14 de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, por otra parte, en atención al análisis efectuado previamente, la Instrucción entendió que el cargo formulado en relación al artículo 14 apartado I, inciso i) no se encuentra acreditado.

**Que en relación con el cargo por falta de determinación del perfil del cliente y documentación de respaldo para la determinación del mismo, la Instrucción tuvo por acreditado el incumplimiento en infracción a los artículos 12 inciso b), 14 apartado II, 19 inciso a) y 20 de la Resolución UIF N° 229/2011 y aconsejó la aplicación de un multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).**

Que en la Resolución de Instrucción se imputó: *"Que en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de determinar el perfil del cliente, el Informe señaló que mediante Nota del 2 de noviembre de 2017 obrante a fs. 309, M [REDACTED] L [REDACTED] ARGENTINA manifestó que "... en cuanto al perfil de cliente, se informa que en función del tipo y monto de las operaciones concertadas, el mismo se ha clasificado como habitual, en los términos del artículo 2, inciso b) de la Resolución UIF N° 229/2011". //Que, adicionalmente, mencionó que "... a fojas 395/396 se encuentra anexada una planilla denominada "Perfil del Cliente" para enero 2018 y febrero 2017 respectivamente del cual surge que, para la determinación del perfil del cliente se consideró como base, la información de la transaccionalidad del año 2017 y 2016 respectivamente y su proyección al año 2018, como así también la información que suministre el cliente. Destacando que MLPF&S es una compañía subsidiaria de B. o. A. C., es decir que pertenece al mismo grupo económico que M [REDACTED] L [REDACTED] Argentina S.A."//Que también destacó que M [REDACTED] L [REDACTED] ARGENTINA expresó que "...para la determinación del perfil transaccional se consideraron los EECC y de resultados de MLPF&S correspondientes a los periodos 2016 y 2015. De esta manera le fueron estimados volúmenes de operaciones mensuales de USD 750 mil millones para el año 2018 y de USD 390 mil millones para 2017.// Que, no obstante ello, el Informe expresó que lo afirmado por el Sujeto Obligado no pudo ser verificado... toda vez que los Estados Contables a los que hacen referencia no fueron aportados, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por los agentes de la CNV (fs. 398/419). Cabe aclarar que, los Estados Contables presentados por la entidad bajo análisis corresponden a M [REDACTED] L [REDACTED] Argentina S.A. (el sujeto obligado objeto de esta verificación) y no los pertenecientes al comitente requerido (fs. 398/419)."//Que, de acuerdo a ello, concluyó que las falencias señaladas constituirían -prima facie- un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 inciso b), 14 Apartado II, 19 inciso a) y 20 de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias "... por no contar el legajo con la documentación respaldatoria utilizada para determinar el perfil del cliente." //Que, en igual sentido, hizo mención a que "... tampoco pudo verificarse si el perfil determinado por el sujeto obligado se condice con lo manifestado, siendo que el legajo aportado en el*

marco de la verificación no cuenta con documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera del cliente, por lo que se **tendría por incumplido el inciso b) del artículo 12, inciso a) artículo 19 y artículo 20 de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias. A estas instancias cabe señalar, que para la determinación del perfil también debe tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria (el destacado pertenece al original).**"

Que, en relación a la norma invocada como infringida, el inciso b) del artículo 12 de la Resolución UIF N° 229/2011 establece: *"La política de conozca a su cliente será condición indispensable para iniciar y/o continuar la relación comercial o contractual con el cliente. //*

*La contratación de productos y/o servicios así como cualquier otra relación comercial o contractual debe basarse en el conocimiento de la clientela, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución —según corresponda—, con el propósito de evitar el Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo. A esos efectos el Sujeto Obligado observará lo siguiente: (...) b) Adicionalmente, para el caso de los clientes habituales, se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 20 de la presente Resolución."*

Que el artículo 14 apartado II de la Resolución UIF N° 229/11 establece: *"En el caso de personas jurídicas que revistan el carácter de clientes habituales se deberá requerir la información consignada en el apartado I y la documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto por el artículo 20 de la presente Resolución."*

Que, por su parte, el inciso a) del artículo 19 de la referida resolución dispone: *"La política de conocimiento del cliente debe incluir criterios, medidas y procedimientos que contemplen al menos: a) La determinación del perfil de cada cliente (...)"*.

Que, finalmente, el artículo 20 de la Resolución UIF N° 229/2011 establece: *"Los Sujetos Obligados deberán definir un nivel de riesgo del cliente y un perfil transaccional, que estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional, y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el mismo, o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado. //*

*En base a la información y documentación a que se refiere el párrafo precedente, los Sujetos Obligados establecerán un monto anual estimado de operaciones, por año calendario, para cada cliente. //*

*También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el Cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria."*

Que, en relación al presente cargo, los sumariados reiteraron que los estados contables de MLPFS podían y pueden ser consultados en forma pública y gratuita en el sitio web de la SEC por lo que no resultaría razonable sostener que MLASA soslayó la compulsión y estudio de esos estados contables.

Que, nuevamente alegaron que no resulta exigible contar con documentación en soporte físico y que, encontrándose disponible la información en bases públicas, no puede sostenerse que MLASA no haya respaldado documentalmente el perfil de MLPFS.

Que, agregaron, una vez más que MLASA y MLPFS integran el mismo grupo económico por lo que no es razonable sostener que la primera no tuviera registro y conocimiento de la información y documentación económica, patrimonial y financiera de MLPFS.

Que, en virtud de ello, sostuvieron que habiendo MLASA elaborado y respaldado documentalmente un perfil de

MLPFS para los años 2015 y 2016, no correspondería formular ningún reproche.

Que, por otra parte, y para el caso en que se concluyera que MLASA no contaba con un perfil debidamente respaldado de MLPFS, solicitaron la aplicación retroactiva del artículo 25 inciso f) de la Resolución UIF N° 21/2018. Al respecto, indicaron que ello fue sostenido por la UIF en el precedente *“Banco de la Nación Argentina”* resuelto mediante Resolución UIF N° 293/2018 como por la CNACAF en los casos *“Forlon”* y *“Banco de la Nación Argentina” con fecha 5 de diciembre de 2019.*

Que en esos precedentes se sostuvo en relación al deber de conocimiento de clientes que fueran organismos estatales que, atento que la normativa aplicable preveía requisitos de identificación mínima para esos clientes, no resultaba razonable sostener que el Sujeto Obligado tuviera obligación de elaborar un perfil de dicho cliente.

Que, en primer término, cabe remitirnos a lo expuesto precedentemente respecto de la insuficiencia de la accesibilidad a la documentación relativa a MLPFS por encontrarse en la página web de la SEC. El Sujeto Obligado, debe contar con la documentación de respaldo para la determinación del perfil del cliente, tal como lo exige la norma.

Que esa documentación además debe estar disponible y ser entregada al organismo de contralor cuando se le exija. Nuevamente se advierte que conforme lo expuesto, los sumariados no pudieron comprobar que MLPFS fuera una filial o subsidiaria de MLASA, con los alcances normativos que ello implica.

Que al momento de la verificación se solicitó al Sujeto Obligado que entregara la *“ficha comitente y legajos completos en los términos de la Res. UIF N°229/2011 del comitente M. L., P., F. & S.”* (fs. 5).

Que, luego, la CNV en su informe de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero del 24 de enero de 2017 agregado a fs. 271/275 indicó que *“No se aporta en este legajo un perfil de riesgo del cliente; constituiría un incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 Res. 229/11 de la UIF.”*

Que, asimismo, en relación a la situación patrimonial, económica, financiera y tributaria del cliente manifestó que: *“No se aporta en el legajo comitente documentación válida alguna que justifique la operatoria del cliente. No se aportan juegos de EE.CC. ni declaraciones juradas impositivas ni manifestación de bienes alguna. //Con la información disponible no puede determinarse el origen de fondos operados.”*

Que, luego, en el Informe de fs. 277/282, la CNV señaló que: *“A fs. 147 en el formulario de apertura de cuenta se incluye el perfil del inversor, el cual se encuentra incompleto debido a que no se le ha asignado la capacidad de riesgo del cliente.”*

Que, agregó que se detectaron observaciones con relación a la *“[[falta el Perfil del Cliente en los términos del artículo 20 de la Resolución UIF N° 229/2011.”*

Que de las observaciones se dio traslado al Sujeto Obligado mediante nota del 26 de septiembre de 2017.

Que, en virtud de ello, el 3 de noviembre de 2017 MLASA envió su respuesta a la CNV (fs. 309) junto con documentación (fs. 310/372). En dicha oportunidad informaron: *“en función del tipo y monto de las operaciones concertadas, el mismo ha sido calificado como habitual, en los términos del artículo 2, inciso b) de la Resolución UIF N° 229/2011...”*

Que, al respecto, la CNV en el informe del 7 de marzo de 2018 observó que: *“En relación al Perfil del Cliente, se*



*solicitó al Sujeto Obligado que elabore dicho Perfil en los términos del artículo 20 de la Resolución UIF N° 229/2011. En este sentido, la respuesta brindada no sería satisfactoria, ya que no han aportado lo requerido. Luego respecto de la documentación respaldatoria que acredite el origen de los fondos operados, no han presentado documentación” (fs. 375).*

Que, así las cosas, conforme lo aconsejado por la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, la CNV remitió una nota a MLASA el 19 de marzo de 2018 indicando respecto del cliente MLPFS que: *“en relación al Perfil del Cliente, si bien han informado que se trata de un cliente habitual, el requerimiento formulado consiste elaborar el Perfil del Cliente de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la Resolución UIF N° 229/2011.”*

Que, en respuesta a ello, MLASA envió la nota agregada a fs. 379 recibida por la CNV el 23 de abril de 2018 junto con la documentación obrante a fs. 380/421.

Que, a fs. 395 se encuentra agregado el perfil del cliente MLPFS correspondiente a enero de 2018 asignándole un riesgo Alto e indicando que para la determinación del perfil *“se tomó como base la información de transaccionalidad del año 2017 y su proyección para el presente año, como así también la información suministrada por el cliente. Cabe destacar que M. L. P. F. & S. es una subsidiaria de B. o. A. C., es decir del mismo grupo empresarial que M. L. P. F. & S. Argentina S.A. Asimismo, se tomaron en consideración para la determinación del perfil transaccional los estados contables y de resultados de M. L. P. F. & S. de fecha 31 de diciembre de 2016.”*

Que, por otra parte, a fs. 396 luce agregado el perfil del cliente MLPFS correspondiente a febrero de 2017 con una asignación de riesgo alto. A efectos de la determinación del referido perfil indicaron que *“se tomó como base la información de transaccionalidad del año 2016 y su proyección al presente año. Asimismo, el cliente informó su proyección de transacciones y volumen para 2017, donde queda de manifiesto que para el presente año se espera un incremento significativo respecto del año 2016. Finalmente, se tomaron en consideración para la determinación del perfil transaccional los estados contables y de resultados de M. L. P. F. & S. de fecha 31 de diciembre 2015...”*

Que sobre el particular se advierte que ello no logra desvirtuar el cargo respecto de la falta de determinación del perfil para el periodo en estudio, esto es, del 18/5/15 al 19/5/16, puesto que se trata de documentación posterior a la verificación.

Que, luego, a fs. 398/418 se encuentran los estados contables de **MLASA** al 31 de diciembre de 2016.

Que el 6 de agosto de 2018 la CNV emitió un nuevo informe (fs. 429/431).

Que, luego, en virtud de lo manifestado por los sumariados en su descargo respecto de la presentación ante la CNV de los estados contables de MLPFS correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, se libró oficio al referido organismo a fin de que acompañara copia de la nota y la respuesta completa brindada por MLASA.

Que, en virtud de ello, a fs. 2922/3107 se encuentra agregada la respuesta al oficio remitida por la CNV junto con la documentación solicitada.

Que, así las cosas se observa agregada a fs. 2928: la Nota S.C.C.N.V. N° 68/GPLD del 7 de enero de 2019; a fs. 2929: la nota de respuesta remitida por MLASA a la CNV del 28 de enero de 2019; a fs. 2931/ 2939: el *“Company profile”* de MLPFS; a fs. 2940/2947: acta de decisiones del Directorio de MLPFS; a fs. 2948/2957: el formulario de apertura de cuenta de MLPFS; a fs. 2958: el perfil del cliente MLPFS de enero de 2018; a fs.

2959/2960: la búsqueda realizada en el Listado Unificado de Terroristas el 20/10/2017; a fs. 2961: Declaración jurada de licitud de fondos de MLPFS; a fs. 2962: Declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente; a fs. 2963: Declaración jurada respecto de la condición de Sujeto Obligado de MLPFS, indicando que no lo es; a fs. 2964/3049 Manual de Procedimientos para Prevención del Lavado de Activos de Origen Ilícito y Financiación del Terrorismo de MLASA de marzo de 2018; a fs. 3050/3093 los estados contables de MLPFS al 31 de diciembre de 2016; a fs. 3094/3100: copia del estatuto actualizado de MLPFS; a fs. 3101/3107 copia del acta de directorio de MLPFS de fecha 25 de junio de 2015.

Que, finalmente, la Dirección de Supervisión de esta UIF indicó que *“a fs. 395/396 se encuentra anexada una planilla denominada “Perfil del Cliente” para enero 2018 y febrero 2017 respectivamente, de la cual surge que, para la determinación del perfil del cliente, se consideró como base la información de la transaccionalidad del año 2017 y 2016 respectivamente y su proyección al año 2018, como así también la información que suministre el cliente. Destacando que MLPG&S es una compañía subsidiaria de B. o. A. C., es decir que pertenece al mismo grupo económico de M [REDACTED] Argentina S.A. El sujeto obligado agrega que, para la determinación del perfil transaccional, se consideraron los EECC y de resultados de MLPF&S correspondientes a los períodos 2016 y 2015. // De esta manera le fueron estimados volúmenes de operaciones mensuales de USD 750 mil millones para el año 2018 y USD 390 mil millones para 2017. // No obstante lo manifestado por el Sujeto Obligado, dicha situación no pudo ser verificada toda vez que los Estados Contables a los que hacen referencia no fueron aportados, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por los agentes de la CNV (fs. 398/419). (...) Conforme lo detallado ut supra, se concluye prima facie que el sujeto obligado no cumpliría con lo estipulado en el apartado II del artículo 14 de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias, por no contar el legajo con la documentación respaldatoria utilizada para determinar el perfil del cliente. // De igual forma, tampoco pudo verificarse si el perfil determinado por el sujeto obligado se condice con lo manifestado, siendo que el legajo aportado en el marco de la verificación no cuenta con documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera del cliente por lo que se tendría por incumplido el inciso b) del artículo 12, inciso a) artículo 1 y artículo 20 de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias. // A estas instancias cabe señalar que para la determinación del perfil del cliente también debe tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria”*.

Que de lo expuesto se desprende que el Sujeto Obligado, al momento de la verificación, es decir, en mayo de 2016, no contaba con un perfil transaccional determinado para el cliente MLPFS ni con documentación de respaldo a tal efecto.

Que recién en el año 2018 acompañaron el perfil transaccional definido respecto del cliente MLPFS de febrero de 2017 y enero de 2018, es decir, fuera del periodo objeto de estudio.

Que, finalmente, el 28 de enero de 2019 MLASA, entre otros documentos presentó ante la CNV los estados contables de MLPFS al 31 de diciembre de 2016.

Que, así las cosas, cabe concluir, en primer lugar, que **al momento de la verificación MLASA no contaba con el perfil del cliente ni con documentación respaldatoria para definir tal perfil.**

Que, luego de reiteradas solicitudes por parte de la CNV, MLASA presentó el perfil transaccional del cliente para los años 2017 y 2018, no lo hicieron respecto de los años 2015 y 2016, cuyas operaciones se encontraban bajo análisis.

Que, finalmente, más de dos años después de la verificación acompañaron los Estados Contables del cliente al 31 de diciembre de 2016, utilizado, según lo informado por el propio Sujeto Obligado, para la determinación del perfil del cliente para el año 2018.

Que, cabe agregar en esta instancia lo señalado por la Dirección de Supervisión en tanto la determinación del perfil del cliente también debe tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria, respecto de lo cual tampoco obra constancia de que el Sujeto Obligado lo haya utilizado para definir los perfiles 2017 y 2018.

Que se pone de resalto que dicho artículo refiere a la identificación de otros tipos de cliente mientras que la imputación es más amplia que tal presupuesto. Allí se refiere a la definición del nivel de riesgo del cliente y su perfil transaccional que se tiene que basar en un análisis integral del propósito y naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional, la documentación económica, patrimonial y financiera, los tipos, montos, naturaleza y frecuencia de las operaciones, el origen y destino de los fondos y su evolución. Además de la documentación respaldatoria, debe constar un análisis por parte del Sujeto Obligado que fundamente cómo arribó a la determinación de dicho perfil. Los sumariados no se han pronunciado en este sentido.

Que, por otra parte, en lo que respecta a la solicitud de aplicación del inciso f) del artículo 25 de la Resolución UIF N° 21/2018, cabe remitirnos al análisis efectuado previamente en el cual se concluyó que no resulta suficiente ser parte de un mismo grupo económico para la aplicación de dicho inciso en tanto el mismo establece estrictamente que resulta aplicable para las sociedades, sus filiales y subsidiarias.

Que, en consecuencia, la Instrucción entendió que el cargo por falta de documentación respaldatoria para la determinación del perfil del cliente y la falta de determinación del mismo se encuentra acreditado en infracción a lo dispuesto en los artículos 12 inciso b), 14 apartado II, 19 inciso a) y 20 de la Resolución UIF N° 229/2011.

**Que en relación al cargo relacionado con la operatoria del cliente la Instrucción tuvo por acreditado el incumplimiento en infracción al artículo 18 inciso II) y aconsejó la aplicación de una multa por la suma de PESOS CIEN MIL (\$100.000).**

**Que, asimismo, en relación al cargo de delegación de obligaciones previstas en la normativa, la Instrucción tuvo por acreditado el incumplimiento en infracción al artículo 22 de la Resolución UIF N° 229/2011 y aconsejó la aplicación de una multa por la suma de PESOS CIEN MIL (\$100.000).**

Que en la Resolución de Instrucción se imputó: *“Que en lo que respecta al análisis de la operatoria realizada por M. [REDACTED] L. [REDACTED] ARGENTINA, concretamente y en el marco de este procedimiento de inspección, los funcionarios de la CNV solicitaron el detalle de las operaciones que fueron realizadas en el periodo que abarca desde el 18 de mayo de 2015 al 19 de mayo de 2016, a fin de verificar el debido cumplimiento de las políticas de PLA/FT por parte del Sujeto Obligado.//Que respecto de estas operaciones, el Informe señaló que “... fueron realizadas por el Sujeto Obligado en su calidad de ALyC para su cliente MLPF&S en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Durante el periodo bajo análisis, el cliente del sujeto obligado realizó operaciones tanto en pesos como en la modalidad denominada Dólar Cable. De la base de operaciones aportada por el sujeto obligado surge que el total operado en el periodo bajo análisis fue el siguiente...” y, a continuación, reflejó las mismas en un cuadro del cual surge el siguiente detalle: (i) Operaciones en Dólares Estadounidenses por un total de USD 94.855.359, discriminadas en USD 82.042.627 correspondientes a ventas y USD 12.812.732 correspondientes a compras; y ii) Operaciones en Pesos: por un total de \$ 11.749.452.494, discriminadas en \$*

5.458.908.813 correspondientes a ventas Y \$ 6.290.543.681 correspondientes a compras.//Que en cuanto al objeto y modalidad de dichas operaciones, como así también en lo que hace a los diferentes requerimientos de información por parte de la CNV a M██████ L██████ ARGENTINA y las respuestas a los mismos que brindó el Sujeto Obligado, el Informe efectuó una extensa descripción la que se estima pertinente transcribir en algunos de su párrafos a fin de no alterar el sentido de lo allí expuesto, dejando a salvo que los destacados pertenecen al texto original.//Que, así, dijo que "La operatoria realizada consistió en su gran mayoría en compra-venta de Títulos Públicos y de LeBac externas, en MAE (conforme surge de la base aportada bajada en la ruta detallada en el punto 2). En primer lugar, según consta en el punto -9 y 10- del Acta de Verificación (fs. 3/5) se le requirió información respecto de las operaciones y transferencias cursadas durante el periodo 18.05.2015 a 19.05.2016. En respuesta a lo solicitado, los Sres. Diego P██████ y Lucas Pe██████ (en carácter de apoderado y oficial de cumplimiento respectivamente de la sociedad) manifestaron que 'por no poseer la cuenta custodia de los títulos no realizan este tipo de operaciones. Todas las operaciones realizadas por M██████ L██████ Argentina S.A. en el MAE son para cartera propia, como así también las del ROFEX. Agregando que, 'la sociedad no posee la custodia de su cliente, que la misma es realizada por otro agente y que no cuentan con esta información.//En relación a sus clientes (...) se identifican solo dos clientes en el periodo bajo análisis, MLPF&S y P. E. S.A., que en el caso de este último realizó una operación puntual".// Asimismo, expresó que "En función de las observaciones relevadas por los profesionales intervinientes de la GPLD/ CNV se propuso como curso de acción la aplicación de medidas correctivas notificando al sujeto obligado los incumplimientos detectados a fin de que sean subsanados, destacando (entre otros incumplimientos) que, con la información disponible no pudo determinarse el origen y destino de los fondos (fs.287/ 291). En consecuencia y mediante nota SCCNV N°4191/ GPLD de fecha 22.08.2018, en el marco del seguimiento de las medidas correctivas se envían a esta Dirección de Supervisión, copias certificadas de la documentación aportada por el sujeto obligado y los nuevos informes finales, de los que se desprende que a partir de la documentación acompañada por la sociedad a criterio de la CNV no se ha acreditado el origen de los fondos en relación a la operatoria del comitente MLPF&S (fs. 434), informando que se ha conformado nuevas actuaciones para profundizar el análisis en relación a dicho comitente en el ámbito de la Subgerencia de Análisis de Reporte de Operaciones Sospechosas (SAROS)."// Que continuó expresando que "en función de lo expuesto en el acápite precedente, con fecha 15.05.2020 se le requirió nuevamente al organismo actuante, que informe si ha podido constatar si el sujeto obligado posee el registro de las cuentas corrientes de sus clientes (incluyendo los de cartera propia) y si se pudo individualizar cada cuenta con sus registros, en consideración de los requerimientos oportunamente cursados (fs. 440/ 441). En respuesta a lo requerido ut supra, mediante Nota N°: NO-2020-33506572-APN-GPLD# CNV 21.05.2020, el Dr. Mariano Rentería Anchorena, en su carácter de Gerente de PLD/ CNV, informó que **'...a partir de la documentación que fuera aportada por la entidad, respecto de MLPF&S no se ha podido determinar de dónde provienen los fondos para las operaciones que se realizan por el orden del comitente MLPF&S sociedad perteneciente al mismo grupo económico del sujeto obligado'**. Agregando que, **-de las operaciones concertadas en pesos no se ha podido identificar en ninguno de los casos que la cuenta emisora y/o la receptora sea de la titularidad de MLPF&S, similar situación sucede con algunas operaciones concertadas en dólar cable'** (fs. 442/443).// Que, adicionalmente, el informe destacó que "Con fecha 05.06.2020 y, atento a la respuesta brindada por CNV, descrita en el acápite precedente, se solicitó la documentación a partir de la cual se alcanzó la conclusión que se informó, en la citada nota, como así también el análisis de las operaciones requeridas en el periodo bajo estudio (18.05.2015 al 19.05.2016), junto con el material de soporte correspondiente y el monto total que alcanzaron las mismas, expresados en pesos (fs. 446/447). Mediante Nota SCCNV N° 1185/ GPLD de fecha 16.06.2020, curso respuesta mediante la cual la CNV detallo las conclusiones arribadas de la investigación realizada por la Subgerencia de Análisis y Reportes de Operaciones Sospechosas (SAROS), acompañada de la documentación de respaldo correspondiente (fa 449/ 540)."// Que, en ese orden de ideas, el Informe indicó que "Al respecto surgen las siguientes consideraciones:// A través de Nota SCCNV N° 4089/ GPLD de fecha 18/ 09/ 2019, dicha gerencia

le requirió nuevamente al sujeto obligado que aporte la documentación que respalde las operaciones detalladas en esa misiva.//Del análisis efectuado por dicha subgerencia se concluye que de las diecisiete (17) operaciones concertadas para su liquidación en dólar cable, solo pudo efectuarse su correspondencia con el cliente MLPF&S en siete (7) de ellas, conforme se detalla en el anexo I obrante a fs. 539. Y respecto a las operaciones concertadas para su liquidación en pesos no ha podido identificarse al comitente MLPF&S en el origen y destino, según corresponda a compra o ventas de los fondos.//Que en su informe, la Dirección de Supervisión expresó que: **“En instancia, y tal como lo ha venido concluyendo la CNV en reiteradas ocasiones (las que han sido expuestas a lo largo del presente informe), ha quedado acreditado que no se ha podido determinar de dónde provienen los fondos para las operaciones que se realizan por orden del comitente MLPF&S sociedad perteneciente al mismo grupo económico del sujeto obligado”**. Sumado a esto el Sujeto obligado manifestó que “respecto de lo requerido en el punto b) de la Vista se informa que quien actúa en calidad de Agente Custodio del Comitente es Citibank NA, por lo que cualquier requerimiento referido a la cuenta en pesos, títulos y dólares del Comitente deberá ser dirigido al Citibank”, evidenciándose que el sujeto obligado no guarda registro respecto de la modalidad en las que los fondos ingresan y egresan a fin de realizar esas operaciones. Conforme lo manifestado por el sujeto obligado, se incumpliría lo dispuesto en el inc. II) del Art. 18 de la Res. 229/2011.” Que la Dirección de Supervisión también hizo mención a que el artículo 22 de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias establece la prohibición de delegar en terceros ajenos al sujeto obligado los deberes que esa norma les impone y agregó que lo manifestado ut supra por el sujeto obligado no lo desliga de sus funciones como tal, teniéndose por incumplido en prima facie el citado artículo”. Que, en igual sentido, el Informe hizo hincapié en que “El sujeto obligado tampoco realiza el control de las cuentas corrientes en pesos, dólares y/ o títulos de su cliente. Por lo tanto, no realiza el control del origen y el destino de los fondos. Dicha circunstancia refuerza lo analizado en el punto 7.2 en **relación al posible incumplimiento de determinación del perfil del cliente conforme Artículo 20 de la Resolución UIF 229/2011 y modif**, ya que la norma dispone que además deberá considerarse para su confección el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.”

Que en lo que respecta a la normativa invocada como infringida, el inciso II) del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011 establece: “Los Sujetos Obligados deberán: (...) II) En las transferencias electrónicas, ya sean nacionales o extranjeras, los Sujetos Obligados deberán recabar información precisa del remitente y receptor de la operación y de los mensajes relacionados. La información deberá permanecer con la transferencia, a través de la cadena de pagos. //En el supuesto de tratarse de fondos provenientes de otro Sujeto Obligado alcanzado por la presente normativa se presume que se verificó el principio de “conozca a su cliente”.//Dichas presunciones no relevan al Sujeto Obligado de cumplimentar los requisitos de identificación y conocimiento del cliente, establecidos en estas normas, respecto de los clientes destinatarios de los fondos”.

Que, por su parte, el artículo 22 de la mencionada Resolución dispone: “Las obligaciones emergentes del presente Capítulo, no podrán ser delegadas en terceras personas ajenas a los Sujetos Obligados.”

Que, en lo que respecta al presente cargo, sostuvieron los sumariados en su descargo que el inciso II) del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011 nada dice acerca de contar con constancia documental identificatoria de las cuentas en cuestión por lo que la UIF sostiene su imputación excesiva de la normativa que no se ajusta a las garantías de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica.

Que, agregaron que, sin perjuicio de ello, siempre estuvo identificada la cuenta, tanto la utilizada para la custodia de los títulos como la bancaria utilizada para las transferencias de fondos de MLPFS para la realización de las operaciones de compraventa investigadas. Indicaron que las compraventas de títulos se realizaron en ámbitos altamente regulados y sujetos a registro, por lo que no resulta ajustado a la realidad sostener que se desconocían las cuentas de MLPFS.

Que luego realizaron una explicación respecto a la operatoria.

Que en relación con el sistema de registro, liquidación y compensación de operaciones en el ámbito del Mercado Abierto Electrónico S.A. (en adelante "MAE") indicaron que todas las operaciones investigadas fueron realizadas en el seno del MAE y, más precisamente en el segmento bilateral del mercado secundario, en el cual se facilita la formulación de ofertas a individuos puntuales y determinados.

Que agregaron que las operaciones investigadas fueron realizadas en el ámbito de negociación correspondiente a "*Operaciones de Trading*". Allí MLASA actuó como Agente del MAE con membresía plena MAE N° 636 y matrícula CNV N° 121 dada su condición de ALyC y AN- Propio, mientras que MLPFS, dada su condición de persona jurídica constituida en el exterior actuó como Inversor Calificado.

Que, de esta forma, las operaciones fueron directamente concertadas entre MLASA y MLPFS en el segmento de negociación bilateral-TRD del MAE.

Que, a su vez, MLPFS recurrió a los servicios de Citibank, sucursal Argentina, como ALyC y AN- Integral en la cual abrió una cuenta custodia de títulos, desde y hacia la cual eran transferidas las cantidades nominales de títulos vendidos y adquiridos por MLPFS a MLASA en el marco de las operaciones aquí investigadas.

Que remarcaron que MLASA no fue agente de MLPFS por lo que no realizó compras o ventas por cuenta y orden de esa compañía. Al respecto, indicaron que las operaciones investigadas fueron realizadas por MLASA para sí misma y para su propia cartera y que MLPFS fue quien compró o vendió a MLASA, según el caso, los títulos objeto de las operaciones investigadas en autos. A esos efectos, MLPFS instruyó a su ALyC, Citibank, Sucursal Argentina, a que interviniera en la liquidación de operaciones.

Que las operaciones, conforme indicaron en el descargo, fueron registradas en el sistema SIOPEL y luego derivadas a Citibank, en su condición de ALyC de MLPFS para que interviniera.

Que, respecto de la liquidación, contaban con dos opciones: i) que la liquidación fuera practicada bilateralmente por ellas, respecto de los fondos únicamente o de las cantidades nominales de títulos solamente o bien tanto de los títulos como de los fondos, en este último caso, no intervenía el MAE, a diferencia de los otros dos; y ii) que la liquidación fuera practicada por el MAE o la entidad autorizada por el MAE para liquidar operaciones de mercado.

Que, en este caso, dada la calidad de MLPFS de tercero, no podía liquidar por sí mismo las operaciones, debía intervenir el ALyC que le prestaba servicios.

Que por otra parte, los sumariados explicaron luego el rol de Argenclear (entidad autorizada por el MAE para liquidar operaciones del mercado) y el MAE, a los fines de la liquidación y compensación de las operaciones.

Que, al respecto, señalaron que Argenclear estuvo a cargo de la liquidación y compensación de operaciones con títulos valores en el ámbito del MAE hasta diciembre de 2016. No obstante ello, a partir de febrero de 2016 el MAE también prestó el servicio de liquidación y compensación, por lo que, entre febrero y diciembre de 2016 se podía optar entre los servicios de MAE o Argenclear.

Que indicaron algunos términos del contrato de MLASA con Argenclear: la liquidación y compensación a cargo de Argenclear debía ser realizada bajo la modalidad de neteo multilateral; la liquidación abarcaba no solo las cantidades de títulos nominales sino también los fondos objeto de esas transacciones; a fin de que Argenclear

llevara a cabo el servicio de liquidación contratado, era necesario que MLASA tuviera una cuenta de depositante o cuenta custodia de títulos en Caja de Valores S.A., en este caso cuenta 1686 (Cuenta MLASA cartera, propia); asimismo, MLASA debía tener una cuenta de liquidación exclusiva para la operatoria liquidatoria de Argenclear abierta en la Caja de Valores, cuenta 7604, subcuenta 10000 correspondiente a los títulos objeto de las liquidaciones efectuadas por Argenclear; en cuanto a la liquidación de fondos, Argenclear se valía de dos cuentas de Interbanking S.A. a los fines de las transferencias de fondos correspondientes a las liquidaciones de las operaciones mencionadas, una en dólares estadounidenses, abierta en Nueva York y la otra en pesos argentinos abierta en el BCRA, cuenta MEP; MLASA no contaba con cuenta en el BCRA que le permitiera operar por sistema MEP pero se valía de los servicios de Citibank, sucursal Argentina, con cuenta MEP 16. Así, MLASA instruía a Citibank a transferir fondos desde la cuenta bancaria a la cuenta MEP y viceversa; cuentas bancarias de MLASA para transferir o recibir fondos: a) cuenta bancaria 36128831 en Citibank, sucursal Nueva York, (US\$) y; b) cuenta bancaria 0808989/018 en Citibank, sucursal Argentina (pesos argentinos).

Que, en el caso de la liquidación efectuada por el MAE, las mismas se realizaban conforme el Reglamento Operativo y el Reglamento de Liquidación y Compensación del MAE y las Circulares emitidas por la entidad. En ese momento, la Circular vigente preveía que las liquidaciones se realizarían bajo el principio “*Entrega contra Pago*” (DvP) mediante el esquema de neteo multilateral de todas las instrucciones de liquidación en el día de su vencimiento.

Que, así, indicaron que algunas operaciones fueron liquidadas bilateralmente mientras que otras fueron objeto de liquidación a través de Argenclear y el MAE.

Que en los casos de operaciones sujetas a liquidación por neteo multilateral a cargo de Argenclear o MAE, las cuentas de origen de los títulos y fondos recibidos por MLASA, así como las cuentas de destino de los títulos y fondos remitidos por MLASA, no correspondían a MLPFS, a diferencia de las operaciones sujetas a liquidación bilateral.

Que, por otra parte, indicaron cuáles fueron las operaciones liquidadas bilateralmente, en las cuales el MAE habría intervenido únicamente a los fines de registrar la operación.

Que, aquí la liquidación, conforme lo manifestaron en su descargo, recayó en cabeza de MLASA, por ser el ALyC parte en las operaciones referidas (MLASA realizaba las operaciones para cartera propia y MLPFS encuadraba como Inversor Calificado). MLPFS tenía cuenta custodia en Citibank, sucursal Argentina, por lo que ese ALyC intervenía en la liquidación. Asimismo, tanto MLASA como MLPFS debían instruir a las entidades bancarias donde tenían abiertas cuentas para transferir los fondos correspondientes a las operaciones liquidadas.

Que en cuanto al pago del precio de las operaciones realizaron ciertas aclaraciones, a saber: (i) respecto de las siete operaciones en dólar cable, se reconoció que se habían identificado las cuentas de origen y destino; (ii) respecto de las restantes operaciones en dólares estadounidenses, en las cuales sostuvieron que MLPFS fue en todas comprador, los montos adeudados a MLASA fueron pagados por M. L. C. S. (MLCS), otra compañía del grupo B. o. A. C. El pago se realizó así en virtud de un “*back to back trading*” con MLCS. Así MLPFS, luego de adquirir los títulos inmediatamente lo vendió a MLCS al mismo precio al cual los había adquirido. Por ello, acordaron que MLCS pagaría directamente a MLASA, por cuenta y orden de MLPFS, el precio correspondiente por la adquisición de títulos objeto de las operaciones. Es así que las transferencias de fondos correspondientes al pago del precio fueron hechas por MLCS desde su cuenta abierta en B. o. A., sucursal Nueva York. Acompañaron los extractos de la cuenta bancaria de MLCS como Anexo XVIII; (iii) en el caso de las operaciones en pesos argentinos, en las jornadas 20/1/2016 y 16/3/2016 se liquidaron operaciones en las cuales MLASA fue

compradora y MLPFS vendedora y viceversa. Así, los montos se compensaban arrojando el monto neto, acreedor o deudor de MLASA y MLPFS respecto de cada jornada. El 20/1/2015 el saldo neto deudor de MLASA fue de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL (\$44.000) mientras que el 16/3/2016 el saldo neto deudor de MLASA fue de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (\$2.920.373); (iv) el monto de las operaciones 420833 y 420913 de la jornada del 25/4/2016, no fue compensado pero consta que fueron efectivamente transferidos, el primero a favor de MLASA por la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA (\$29.000.490) y el segundo a favor de MLPFS por la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHENTA (\$29.062.080); (v) se incluyó en la imputación una operación realizada el 17/5/2016 y liquidada el 19/5/2016 por DOSCIENTOS MIL (200.000) títulos valor nominal de la especie H03G36 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRECE MIL CIENTO VEINTIDOS (US\$ 13.122). Esa operación no fue realizada y dada de baja por lo que solicitaron que se excluyera de la acusación.

Que concluyeron que las transferencias de títulos y de fondos estuvieron debidamente registradas ante Caja de Valores S.A. y en el sistema bancario mediante las intervenciones de *Citibank* y *Bank of America*, contando MLASA con la documentación que acredita esas transferencias.

Que, en relación a las operaciones liquidadas por Argenclear y MAE, los sumariados indicaron que la liquidación y la compensación era realizada por un sujeto distinto a las partes de la operación de compraventa.

Que luego, detallaron las operaciones objeto de acusación que fueron liquidadas bajo la modalidad de neteo multilateral (DvP).

Que, a continuación, indicaron que la liquidación de algunas operaciones entre MLASA y MLPFS se hizo de forma diferida, es decir, no se liquidó la totalidad de ellas en una sola jornada, sino que se dividió en más de una. Indicaron cuáles fueron esas operaciones: 107627, 175844, 375900, 386697, 395160, 398645, 414677, 420900, 421016 y 421183.

Que, nuevamente refirieron que, en este caso, las cantidades nominales de títulos y fondos que finalmente correspondía recibir a cada participante del mercado eran determinados por Argenclear o MAE considerando la totalidad de operaciones realizadas por ese participante durante la jornada.

Que, de esta forma, la posición neta de cada participante determinaba si al final de la jornada sería acreedor o deudor del mercado o si terminaría empatado con el mercado.

Que esa posición neta se determinaba considerando la totalidad de las compras y ventas de títulos realizadas por el participante respecto de todos los participantes del mercado.

Que indicaron los sumariados que la liquidación de cantidades nominales de títulos implica que la liquidación y compensación es realizada respecto de cada especie de título valor operado por cada participante.

Que una vez determinadas las cantidades nominales netas de una determinada especie de títulos valores que correspondía a cada participante recibir o entregar, el MAE o Argenclear realizaban las transferencias de títulos. Para ello, cada participante debía poner a disposición del MAE o Argenclear las cantidades nominales objeto de sus respectivos saldos deudores.

Que en el caso de las liquidaciones practicadas por Argenclear esas cantidades nominales debían ser transferidas a la cuenta de liquidación abierta en Caja de Valores S.A., donde serían puestas a disposición de Argenclear.



Recordaron que la cuenta de liquidación de MLASA era la 7604 subcuenta 10000 correspondiente a liquidaciones con el mercado. Por su parte, MLPFS recurrió a la cuenta de liquidación de Citibank, sucursal Argentina, abierta en Caja de Valores S.A. 7531/10000, indicando el 10000 la subcuenta de liquidaciones con el mercado.

Que, por su parte, las liquidaciones practicadas a través del MAE, las cantidades nominales objeto de saldos deudores de MLASA debían ser transferidas a la cuenta de liquidación 1735 abierta por el MAE en Caja de Valores, subcuenta 636 que correspondía a los saldos deudores de MLASA. En el caso de MLPFS, indicaron que el comportamiento era similar a través de instrucciones a Citibank, sucursal Argentina, para que transfiriera las cantidades de títulos correspondientes a los saldos deudores de MLPFS a la subcuenta de Citibank, sucursal Argentina correspondiente a la cuenta de liquidación del MAE.

Que una vez realizada la recaudación de las cantidades nominales de títulos valores de una determinada especie, Argenclear y MAE transferían a los participantes con posición acreedora las cantidades nominales correspondientes a sus respectivos saldos acreedores.

Que, en definitiva, conforme fuera dicho previamente, las cantidades nominales de títulos objeto de esas operaciones fueron objeto de transferencias entre las cuentas de custodia abiertas en Caja de Valores S.A.

Que conforme surge de los extractos de movimientos de la cuenta de MLASA, emitidos por Caja de Valores S.A., los cuales acompañaron como prueba documental (Anexo XI), las cantidades nominales de los títulos objeto de las operaciones, se transfirieron, en todos los casos (tanto en las operaciones en US\$ como en ARS) hacia/desde esa cuenta y desde/hacia la cuenta 1305/807796.

Que, de esta forma, concluyeron que las operaciones investigadas fueron realizadas en el marco de un ámbito de negociación controlado, en el cual el flujo de títulos y las cuentas de origen y destino correspondientes a las partes de las operaciones estuvieron siempre debidamente fiscalizadas y registradas.

Que en relación a la liquidación de fondos, los sumariados indicaron que la misma también se realizó mediante el sistema de neteo multilateral pero a fin de liquidar los mismos se debían considerar todas las operaciones hechas por el participante respecto de la totalidad de títulos adquiridos y vendidos en la jornada.

Que, al respecto, acompañaron dos cuadros, uno correspondiente a los saldos netos globales de fondos de MLASA por jornada, relativos a las operaciones liquidadas por Argenclear y otro respecto de los saldos netos globales de fondos de MLASA por jornada, relativos a operaciones liquidadas por el MAE, realizando ciertas aclaraciones respecto de las jornadas del 22/9/2015, 25/1/201 y 4/5/2016 (liquidaciones de Argenclear) y 4/5/16 (liquidada por MAE).

Que agregaron que las operaciones DvP entre MLASA y MLPFS investigadas en autos y liquidadas mediante el sistema de neteo multilateral, fueron todas ellas realizadas en pesos argentinos (ARS). En consecuencia, en el caso de las operaciones liquidadas por Argenclear, las sumas objeto de los saldos deudores debían transferirse a la cuenta MEOP 91389 de Interbanking y, desde esa cuenta, se transfirieron los saldos acreedores. En el caso del MAE, la cuenta MEP era la número 101.

Que, por su parte, las cuentas bancarias utilizadas por MLASA y MLPFS eran las ya referidas cuentas abiertas en Citibank, sucursal Argentina, 0808989/018 de MLASA y 5807795017 de MLPFS.

Que atento que estas cuentas no eran cuentas MEP, para transferir los fondos desde ellas a las cuentas MEP de Argenclear y MAE y viceversa era necesario que los fondos fueran canalizados a través de la cuenta MEP del

Citibank, cuenta 16.

Que, en virtud de lo expuesto, indicaron respecto de los montos de las operaciones entre MLASA y MLPFS que se analizaron que no correspondía que se MLASA transfiriera directamente a una cuenta de MLPFS o al revés.

Que sostuvieron los sumariados que a la luz de la prueba acompañada, siempre estuvieron adecuadamente registradas las cuentas de origen y destino de los fondos.

Qué, en primer término, cabe destacar que el inversor calificado actúa en el ámbito bilateral del MAE siempre a través de una ALyC, es decir, el hecho de que MLPFS revistiera la calidad de inversor calificado no lo habilitaba para actuar directamente en el MAE.

Que, así las cosas, cabe en esta instancia hacer alusión a las respuestas brindadas por la CNV a los oficios remitidos en fecha 25 de noviembre de 2021 y 11 de abril de 2022.

Que por medio del primer oficio se requirió a la CNV que informara el detalle de las operaciones concertadas por MLPFS a través de MLASA durante el período comprendido entre 18 de mayo de 2015 y 19 de mayo de 2016 (fs. 2748/2749).

Que a fs. 2750/2778 se encuentra agregada la respuesta remitida por la CNV de donde surge el detalle de operaciones concertadas por MLPFS a través de MLASA en el período indicado.

Que, luego, en fecha 11 de abril de 2022 se envió un nuevo oficio a la CNV a fin de que informara el detalle de operaciones concertadas por MLPFS a través de CITIBANK NA, sucursal Argentina, en su calidad de ALyC durante el período comprendido entre el 18 de mayo de 2015 y el 19 de mayo de 2016 (fs. 2784/2785).

Que la respuesta a dicho requerimiento obra agregada a fs. 2788/2789 donde se informó que *“1 – Que de la consulta realizada través del sistema de monitoreo Stockwatch, no surge que se hayan registrado operaciones concertadas de M. L. P. F. & S. a través del agente MAE N° 107 CITIBANK NA Sucursal Argentina entre el 18/05/2015 y el 19/05/2016. En la búsqueda de las operaciones concertadas por M. L. P. F. & S., solo se ha observado operaciones canalizadas por el agente N° 636 M [REDACTED] L [REDACTED] ARGENTINA S.A. // 2- Que asimismo, se verificó esta consulta con la información que surge de la Resolución General CNV N° 624 Régimen Informativo Especial que remiten los Mercados autorizados a esta CNV con el resumen de operaciones de sus agentes registrados, donde nuevamente se verifica que no se registran operaciones cursadas por el comitente M. L. P. F. & S. con el agente MAE N° 107 CITIBANK NA Sucursal Argentina”*.

Que, en virtud de lo informado por la CNV, no cabe más que concluir que se encuentra probado que MLPFS concertó las operaciones informadas a través de MLASA y que las mismas, contrariamente a lo manifestado por los sumariados, no fueron concertadas por CITIBANK NA Sucursal Argentina.

Que, de esta forma, el sólo hecho de haber concertado las operaciones para MLPFS, sin importar quién las liquidó luego, hace nacer en cabeza de MLASA el deber de debida diligencia respecto de su cliente.

Que, en lo que respecta al presente cargo, MLASA debía conocer las cuentas de origen y destino de los fondos, tal como lo exige el inciso II) del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, así, la CNV en su informe de fs. 429/431 indicó lo siguiente: *“A su vez considerando lo analizado por el Licenciado Grillo, interviniente anterior, a fs. 281 que se transcribe a continuación: “realizado el análisis de la*

*cuenta comitente M. L., P., F. y S. I., se destaca que la totalidad de las operaciones de ese cliente habrían sido realizadas a través de una cuenta cartera propia del SO que actuaría como intermediario de aquella”. //Es decir, las operaciones solicitadas por el cliente (sean compra o venta) son cursadas hacia el mercado (MAE) a través de la cuenta cartera propia M. L. A. S.A. (en forma de compra o venta). A su vez esta cuenta fue utilizada para realizar operaciones de contratos de futuros de dólar en el Mercado ROFEX: \$12.118.653.000 COMPRAS Y \$11.675.336.750 VENTAS.//No se encuentran cuentas corrientes que puedan explicar el origen ni el destino de los fondos utilizados para las operaciones descriptas”*

Que, a fs. 442/443 obra agregada la Nota N° NO-202033506572-APN-GPLD#CNV, a través de la cual la CNV hace saber a la UIF respecto del cliente MLPFS que: “(...) 2- De las operaciones concertadas en pesos no se ha podido identificar en ninguno de los casos que la cuenta emisora y/o receptora sea de titularidad de MLPF&S. Similar situación sucede con algunas de las operaciones concertadas en dólar cable”.

Que, en virtud de la referida nota, la Jefa de Departamento Operativo de Supervisión de la Dirección de Supervisión de esta UIF, solicitó a la CNV que enviara la documentación a partir de la cual se alcanzó la conclusión informada en la nota citada previamente (fs. 446/447).

Que, en esa oportunidad, la CNV remitió a la UIF una nota junto con documentación indicando que “... de las DIECISIETE (17) operaciones concertadas para su liquidación en dólar cable, sólo pudo efectuarse su correspondencia con el cliente MLPFS en DIEZ (10) de ellas (...) 5.- En el caso de las operaciones concertadas para su liquidación en pesos, no ha podido identificarse al Comitente MLPFS en el origen y destino- según corresponda a compras o a ventas- de los fondos...” (fs. 449).

Que, por su parte, la Dirección de Supervisión de esta Unidad indicó en su informe del 24 de agosto de 2020 que “[e]n el marco de la verificación realizada, los inspectores actuantes solicitaron las operaciones correspondientes al periodo 18.05.2015 al 19.05.2016, a fin de verificar el debido cumplimiento de las políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por parte del sujeto obligado.// Estas operaciones fueron realizadas por el Sujeto Obligado en su calidad de ALyC para su cliente MLPF&S en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). (...) Al respecto surgen las siguientes consideraciones: - A través de Nota SCCNV N° 4089/GPLD de fecha 18/09/2019, dicha gerencia le requirió nuevamente al sujeto obligado que aporte la documentación que respalde las operaciones detalladas en dicha misiva. - Del análisis efectuado por dicha subgerencia se concluyó que de las diecisiete (17) operaciones concertadas para su liquidación en dólar cable, solo pudo efectuarse su correspondencia con el cliente MLPF&S en siete (7) de ellas, conforme se detalla en el anexo I obrante a fojas 539. Y respecto a las operaciones concertadas para su liquidación en pesos no ha podido identificarse al comitente MLPF&S en el origen y el destino, según corresponda a compra o a ventas, de los fondos. - En esta instancia, y tal como lo ha venido concluyendo la CNV en reiteradas ocasiones (las que han sido expuestas a lo largo del presente informe), ha quedado acreditado que no se ha podido determinar de dónde provienen los fondos para las operaciones que se realizan por orden del comitente MLPF&S sociedad perteneciente al mismo grupo económico del sujeto obligado.//Sumado a esto, el sujeto obligado manifestó que “respecto de lo requerido en el punto b) de la Vista se informa que quien actúa en calidad de Agente Custodio del Comitente es Citibank NA, por lo que cualquier requerimiento referido a la cuenta en pesos, títulos y dólares del Comitente deberá ser dirigido al Citibank”, evidenciándose que M. L. Argentina S.A. no guarda registro respecto de la modalidad en la que los fondos ingresan y egresan a fin de realizar esas operaciones. Conforme lo manifestado por el sujeto obligado, se incumpliría lo dispuesto en el inc. Ll) del Art. 18 de la Res. 229/2011.”

Que, así, cabe concluir, en primer lugar, que MLPFS era cliente de MLASA y que MLPFS concertó las

operaciones informadas y detalladas por la CNV a fs. 2751/2778 a través de MLASA, a excepción de las operaciones con número de boleto 31001 y 31006 ambas del día 04.05.2016 (v. específicamente fs. 2576vta.), las cuales conforme lo determinó la Instrucción a f. 2780 no son objeto de imputación del presente sumario.

Que, en virtud de ello, sin importar quién liquidó dichas operaciones, MLASA tenía el deber de conocer e informar las cuentas de origen y destino de los fondos, tal como lo prevé el artículo 18 inciso II), “... los *Sujetos Obligados deberán recabar información precisa del remitente y receptor de la operación y de los mensajes relacionados. La información deberá permanecer con la transferencia, a través de la cadena de pagos...*” (el destacado me pertenece).

Que, tal como surge de lo informado por la CNV y de lo manifestado por la Dirección de Supervisión en su informe MLASA no guardaba registro de las cuentas de origen y destino de los fondos.

Que, como fuera dicho, CNV revisó una muestra de las operaciones, y sólo se pudo verificar la correspondencia con MLPFS en SIETE (7) de las DIECISIETE (17) operaciones concertadas en dólar cable, encontrándose falencias en las restantes DIEZ (10).

Que, es decir, excepto respecto de esas SIETE (7) operaciones concertadas en dólar cable del total de operaciones ya sea en PESOS o en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se constató en la supervisión que el Sujeto Obligado no contaba con la información del remitente y receptor de la operación.

Que la prueba aportada en el marco del presente sumario, tanto lo informado por el Citibank como el MAE y la documentación presentada por los sumariados, no logran desvirtuar el presente cargo, ello toda vez que no prueban que al momento de la supervisión contaran con la información requerida y exigida por la norma.

Que, en virtud de lo expuesto, la Instrucción entendió que el cargo se encuentra acreditado configurándose una infracción a lo dispuesto en el inciso II) del artículo 18 de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, en lo que respecta a la indelegabilidad, tal como se concluyó previamente, MLPFS era cliente de MLASA y concertó a través de este último las operaciones informadas por la CNV oportunamente, v. fs. 2750/2778 y 2788/2789. Así las cosas, recae en cabeza de MLASA el deber de contar con la información requerida por el organismo de contralor.

Que, cabe agregar que la CNV, tal como fuera citado previamente, informó que no se registraron operaciones concertadas por MLPFS a través de Citibank NA Sucursal Argentina, observándose únicamente operaciones canalizadas por MLASA (fs. 2789).

Que, al respecto, conforme se observa en reiteradas ocasiones, el Sujeto Obligado intentó desligarse de su obligación indicando que quien actuaba de Agente Custodio del Comitente era Citibank NA (fs. 455, 553).

Que, atento lo expuesto, la Instrucción concluyó que el cargo se encuentra acreditado en infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Resolución UIF N° 229/2011. \_

**Que en relación con el cargo por falta de registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y las que, por haber sido consideradas sospechosas, hayan sido reportadas la Instrucción consideró que el incumplimiento se encontraba acreditado en infracción a los artículos 3° inciso g), 7° inciso f) y 21 inciso f) de la Resolución UIF N° 229/2011 y aconsejó una sanción de multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).**

Que en relación al presente cargo la Resolución de Instrucción imputó: *“Que en lo que respecta a la verificación del cumplimiento por parte de M [REDACTED] L [REDACTED] ARGENTINA de la obligación de contar con un registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas, y de las que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas, la Dirección de Supervisión destacó -en primer término- que “... el sujeto obligado manifestó que no poseen un registro de análisis y que las inusualidades son tratadas según el sistema de alertas descrito en el manual (fs. 3/7). //Que, no obstante ello, el Informe agregó que “... en el marco de la aplicación de medidas correctivas de fs. 307; el sujeto obligado manifestó que realiza un análisis periódico y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas en el marco de las reuniones del grupo de gobierno corporativo que se asientan en el Libro de Comité de Prevención y Lavado de Activos que lleva a tal efecto (fojas 309). Sin embargo, no se ha aportado el mencionado libro. En cambio, aportaron copia de un acta del libro “Grupo de Control de Gobierno Corporativo para la PLA de origen ilícito N° 80” de fecha 28/ 03/ 2016. De ella surge que se habían generado 85 alertas entre diciembre y marzo de 2016, siendo cerradas en su totalidad (fs. 380). Asimismo, aportaron copia del acta del mismo Libro, correspondiente al 28/06/2016 de la cual surgen que se generaron 137 alertas desde marzo de 2016 a junio de 2016, las cuales fueron cerradas al igual que las mencionadas previamente”.// Que, en el marco de su análisis, la Dirección de Supervisión consideró que el Sujeto Obligado debería haber aportado el registro de alertas al que se hizo referencia a fs. 380/381, junto con el detalle de la operatoria inusual, su tratamiento, el motivo por el cual las alertas fueron cerradas y la documentación de respaldo que acreditara el motivo o fundamento por el cual no fueron consideradas sospechosas.// Que, a modo de conclusión del análisis del incumplimiento de esta obligación, el Informe expresó que “... el sujeto obligado no habría llevado adelante un registro de análisis de operaciones inusuales en forma adecuada, verificándose prima facie el incumplimiento del artículo 3° inciso g) y artículo 21 inciso f) de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias, toda vez que en el caso de detectarse operaciones inusuales el Sujeto Obligado deberá profundizar el análisis de las mismas con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma.”*

Que en cuanto a la normativa endilgada como infringida el inciso g) del artículo 3° de la Resolución UIF N° 229/2011 establece: *“A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos, 20 bis, 21 a. y b. y 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de conformidad a la presente Resolución.//La misma deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: (...) g) La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas...”*.

Que el artículo 7° inciso f) de la Resolución UIF N° 229/2011 dispone: *El Oficial de Cumplimiento tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones: (...) f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas (que contenga e identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas).”*

Que, por su parte, el inciso f) del artículo 21 de la misma Resolución, establece: *“Durante el curso de la relación contractual o comercial el Sujeto Obligado deberá llevar a cabo las siguientes acciones: (...) f) En caso de detectarse operaciones inusuales se deberá profundizar el análisis de las mismas con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma...”*.

Que, en lo que respecta al presente cargo, los sumariados sostuvieron que MLASA contaba con un sistema de registro y análisis de gestión de riesgos de operaciones inusuales.

Que informaron que el diseño, implementación y gestión de ese proceso estaba a cargo de la *División Global Financial Crimes de Bank of America Corporation*, a través del *Financial Intelligence Unit*, unidad especializada en control e inteligencia financiera, dedicada a monitorear y controlar las operaciones que se canalizaban a través de ese proceso desde todas las compañías de *Grupo Bank of America*.

Que al respecto describieron el proceso e indicaron que se utiliza un sistema de monitoreo corporativo, sistema MANTAS, que realiza en forma automática una evaluación de las transacciones de los clientes, mediante escenarios previamente establecidos y parametrizados de acuerdo al nivel de riesgo determinado para el cliente y su historial de transaccionalidad entre otros.

Que, finalmente, en el caso de las operaciones en Argentina, el análisis y conclusiones son remitidas al Oficial de Cumplimiento para su análisis final respecto de si corresponde o no la formulación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF.

Que el análisis por parte del Oficial de Cumplimiento de MLASA y la decisión alcanzada se realizan en el marco de Comité de Prevención de Lavado de Activos (Grupo de Control de Gobierno Corporativo para la Prevención del Lavado de Activos de Origen Ilícito). Las reuniones de ese comité son instrumentadas a través de actas contenidas en el Libro de Comité de PLA (cuya denominación interna es Libro del Grupo de Control de Gobierno Corporativo para la Política de Lavado de Activos), actas que fueron acompañadas en instancia presumarial y en la cuales se consignan las alertas generadas y su tratamiento (v. fs. 380/394).

Que, agregaron que, tal como fue reconocido por la CNV, dichas actas son un elemento de prueba suficiente para acreditar que MLASA cumplió con su deber de contar con un sistema y registro de análisis y gestión de riesgos de operaciones inusuales (v. fs. 429/431, donde consta el dictamen de la Gerencia de PLD de la CNV).

Que sostuvieron que del inciso g) del artículo 3° y del inciso f) del artículo 21 de la Resolución UIF N° 229/2011 no se desprende que en la documentación relativa a la evaluación de las operaciones deba dejarse constancia de un desarrollo argumental de las razones que llevaron a descartar que una operación inusual sea una operación sospechosa.

Que en relación con dicha defensa, corresponde señalar que el propio Manual del Sujeto Obligado establece que una de las acciones a llevar a cabo en la relación comercial o contractual es “g) *Profundizar el análisis, en caso de detectarse operaciones inusuales, con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma*” (f. 27 vta). Por lo que a todas luces resulta que la defensa impetrada atentaba contra las propias políticas de PLA/FT de los sumariados.

Que indicaron asimismo los sumariados que el sistema MANTAS no registró alertas en relación a las operaciones realizadas por MLPFS en el período mayo 2015/mayo 2016 (v. Anexos V y VI) y que de un informe de una firma auditora (“*Gran Thornton*”) se desprende que durante el período 18/05/2015 al 19/05/2015 MLASA contaba con un sistema de PLAyFT adecuados para el cumplimiento de lo establecido por la UIF (Anexo XIX).

Que, finalmente, solicitaron la aplicación retroactiva de la Resolución UIF N° 21/2018, indicando nuevamente que se establecen exigencias mínimas en materia de conocimiento e identificación de clientes como MLPFS por ser, al igual que MLASA una subsidiaria de *B. o. A. C.*

Que refirieron nuevamente a la jurisprudencia antes invocada, indicando que se estableció que, en aquellos casos de clientes sujetos a exigencias mínimas en materia de identificación, no solo no resulta obligatorio elaborar un

perfil de dicho cliente, sino que además no están obligados a monitorear y controlar las operaciones de ese cliente.

Que, ahora bien, tal como se desprende del acta de verificación de la CNV, de la Resolución de Instrucción y del Informe Final de la Dirección de Supervisión de esta UIF, en un principio, el Sujeto Obligado, en el marco de la verificación manifestó que no poseían un registro de análisis y que las inusualidades eran tratadas según el sistema de alertas descrito en el manual (v. fs. 3/7).

Que, luego, el Sujeto Obligado, al momento de la aplicación de medidas correctivas manifestó que *“realiza un análisis periódico y gestión de riesgo de operaciones sospechosas en el marco de las reuniones del grupo de gobierno corporativo que se asientan en el Libro de Comité de Prevención de Lavado de Activos que lleva a tal efecto”* (fs. 309).

Que dicho libro jamás fue aportado, sino que aportaron actas del Libro del *“Grupo de Control de Gobierno Corporativo para PLA de origen ilícito N°80”* de fechas 28 de marzo de 2016 y 28 de junio de 2016.

Que, conforme lo sostiene la Dirección de Supervisión de esta UIF, el Sujeto Obligado debería haber aportado el registro de alertas al que hizo referencia a fs. 380/381, junto con el detalle de la operatoria inusual, su tratamiento, el motivo por el cual fueron cerradas y la documentación de respaldo que acredite el motivo por el cual no fueron consideradas.

Que la normativa es clara al establecer que debe dejarse constancia por escrito de las conclusiones y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma.

Que es por ello que las dos actas aportadas no resultan suficientes para dar cumplimiento a dicho requerimiento y los sumariados no han aportado en el trámite sumarial la documentación alegada en donde figuraría tal asiento, no pudiendo desacreditar el respectivo cargo.

Que, los sumariados, tal como fuera mencionado previamente, en su descargo refieren a la opinión emitida por la CNV en su informe de fs. 429/431, más precisamente que *“A fs. 375/389 obran copias de Actas del Grupo de Control de Gobierno Corporativo para la Prevención del Lavado de Activos de Origen Ilícito, donde dan tratamiento a las alertas generadas en el sistema. Y también señalan la resolución dada. No surgirían observaciones.”*

Que, en relación a la misma, cabe destacar lo dispuesto por el artículo 7° de la Resolución UIF N° 229/2014, a saber: *“Remisión de Informes a la UIF. //a. Dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ los Órganos de Contralor Específicos, remitirán a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA los Informes Finales elaborados en virtud de los mismos.//El Informe Final confeccionado por cada organismo, que no será vinculante para esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, deberá contener los antecedentes, las tareas realizadas, el análisis de la información y el resultado de la supervisión, fiscalización e inspección in situ. Asimismo, de corresponder, el Informe Final deberá contener detalle de las medidas y acciones correctivas adoptadas o requeridas a los Sujetos Obligados, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del presente Anexo, como así también de las acciones de seguimiento que se hubieran dispuesto...”*.

Que, así las cosas, la Dirección de Supervisión constató y concluyó que el Sujeto Obligado *“no habría llevado adelante un registro de operaciones inusuales en forma adecuada, verificándose prima facie el incumplimiento del artículo 3 inciso g) y artículo 21 inciso f) de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias, toda vez que en*

*el caso de detectarse operaciones inusuales el Sujeto Obligado deberá profundizar el análisis de las mismas con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma."*

Que, asimismo, resulta adecuado destacar que los sumariados no lograron desvirtuar el cargo imputado.

Que, por otra parte, en lo que respecta a la solicitud de aplicación retroactiva de la Resolución UIF N° 21/2018, cabe remitirnos a lo analizado en los cargos anteriores donde se concluyó que no resultaba aplicable al caso que nos ocupa.

Que, en virtud de todo lo expuesto, la Instrucción entendió que el cargo se encuentra acreditado constituyendo una infracción a lo dispuesto en los artículos 3° inciso g), 7° inciso f) y 21 inciso f) de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, en relación al cargo por falta y detección de operaciones sospechosas, la Instrucción concluyó que el **incumplimiento se encuentra acreditado en infracción a los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y modificatorias y a los artículos 7° inciso g) y 26 incisos b), m) y p) de la Resolución UIF N° 229/2011.**

Que, en lo atinente al presente cargo, la Resolución de Instrucción imputó: *"Que en lo que hace a la evaluación del cumplimiento de la obligación relativa al análisis y detección de Operaciones Sospechosas y de Reportes de Financiación de Actividades Terroristas, la Dirección de Supervisión indicó que desde el primer momento de la verificación in situ y en respuesta a las notas y/ o requerimientos cursados por el Organismo de Contralor Especifico, ya sea- por la aplicación de medidas correctivas y/ solicitudes de ampliación de información, el sujeto obligado no aportó los registros de las cuentas corrientes, los cuales podrían haber coadyuvado a justificar el origen y el destino de los fondos involucrados."/*Que asimismo, el informe citó y transcribió el artículo 12 del Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 que reglamenta el procedimiento de supervisión en materia PLA/FT que lleva a cabo la CNV – concretamente- en lo que hace al deber de colaboración que deben prestar los Sujetos Obligados para con el Organismo supervisor y la provisión de toda la documentación pertinente; como así también la obligación de abstenerse de cualquier denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de las supervisiones, las que serán consideradas faltas graves y darán lugar a la aplicación de las medidas y acciones correctivas correspondientes previstas en esa norma, y a la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder conforme el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias. //Que, en específica referencia a esta cuestión, la Dirección de Supervisión entendió que "... el Oficial de Cumplimiento debió haber aportado en el marco de la inspección in situ realizada, los registros requeridos por los inspectores actuantes en relación a las cuentas corrientes de sus clientes, y evitar así las reiteradas solicitudes. El hecho de no aportar los mencionados registros tornó más dificultoso el análisis final. Teniendo en cuenta esta particularidad se considera que el sujeto obligado debería haber prestado mayor colaboración a los sucesivos requerimientos, por lo cual estos elementos constituirían un incumplimiento al inc. g) del art. 7 de la Res. UIF 229/2011."/Que por otra parte, la Comisión Nacional de Valores analizó incumplimientos a normativa propia conforme surge a fojas 289 del Dictamen efectuado por dicho organismo en relación a que, "los fondos y los valores negociables de propiedad de clientes propios de los ALyC, así como los fondos y los valores negociables de propiedad de los AN y de propiedad de los clientes de los AN, deberán mantenerse separados, de los valores negociables y de los fondos propios de los ALyC."/Que a estos efectos, los ALyC deberán abrir la cantidad de cuentas de custodia de valores negociables y de cuentas para el depósito de los fondos, que sean necesarias a los fines de mantener una clara separación e individualización de los activos propios del ALyC, de los activos de clientes propios de los



ALyC, de los activos de los AN y de los de los clientes de cada AN, con quienes tengan un convenio para liquidación y compensación de operaciones", conforme lo dispuesto en el Art. 7, de la Sección II, del Capítulo II, del Título VII de la Resolución General CNV 622/2013.//Que, en la continuidad de su análisis, la Dirección de Supervisión expresó que "... de la base de operaciones aportada por el sujeto obligado en el marco de la inspección in situ, efectuada por la Comisión Nacional de Valores, se visualiza que el total cursado durante el periodo de estudio fue el siguiente:

Moneda	Total operado 18/05/2015 a 31/12/2015	Total operado 01/01/2016 al 19/05/2016	TOTAL OPERADO 18/05/2015 al 19/05/2016
Pesos	\$2.425.350.352,70	\$9.324.102.141,36	\$11.749.452.494,06
Dólares	\$6.917.468,00	\$87.937.8911,20	\$94.855.359,20
Dólares pesificados	\$63.350.078,48	\$1.277.881.231,44	\$1.341.231.309,92
Total Operado Pesificado	\$2.488.700.431,18	\$10.601.983.372,80	\$13.090.683.803,98

Respecto del cuadro que antecede y en razón a la documentación que obra en el expediente se desprende que la operatoria realizada por el sujeto obligado corresponde a operaciones de compras y ventas que el cliente MLPF&S concertó en pesos y dólares para especies títulos públicos y Lebac. Por las razones plasmadas en el punto 8 del presente informe y toda vez que la documentación obrante en autos, no pudo verificarse: 1.- Origen de los fondos con los que el comitente MLPF&S operó; 2.- Destino de los fondos liquidados; A esta instancia se debe recordar que, el capítulo VI de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias, en su artículo 26 establece que los sujetos obligados deben reportar conforme lo establecido en el art. 20 bis y 21 inc. b) de la Ley 25.246 y modif., las operaciones inusuales que de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza y el análisis efectuado, se consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo."// Que es dable destacar que al margen del cuadro precedente se encuentra agregada en el Informe una nota a pie de página identificada como "I", en la cual se lee: "Los valores corresponden al total operado por el comitente que se detalla en los Anexos I y II".//Por último, es dable referir que , en cuanto al tipo de cambio al que fueron pesificadas las sumas en dólares , las mismas se desprenden del Anexo del informe de la Dirección de Supervisión obrante a fojas 563, el cual contiene el detalle del tipo de cambio al que, en cada caso, se pesificaron las operaciones en dólares detalladas en el mismo, por un total de U\$S 94.855.359 (Dólares Estadounidenses Noventa y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve) , equivalente a \$ 1.341.231.309,92 (Pesos Mil Trescientos Cuarenta y Un Millones Doscientos Treinta y Un Mil Trescientos Nueve con 92/100).//Por su parte, el detalle de las operaciones realizadas en pesos surgen del Anexo al referido informe obrante a fojas 559/562, por un total de \$ 11.749.452.494,06 (Pesos Once Mil Setecientos

Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 06/100). //Arrojando la sumatoria de ambas operatorias —en pesos y en dólares-, un total de \$ 13.090.683.803,98. (Pesos Trece Mil Noventa Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Tres con 98/100).//Que el Informe también hizo mención a que "El art. 26 describe a título enunciativo algunas situaciones que deben ser especialmente valoradas: b) los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes"; m) La compra de valores negociables por importes sumamente elevados" y p) 'Las operaciones en las cuales el Cliente no posee una situación financiera que guarde relación con la magnitud de la operación, y que ello implique la posibilidad de no estar operando en su propio nombre, sino como agente para un principal oculto.'//Que, a modo de colofón, en el informe de la Dirección de Supervisión se indicó que "Por lo expuesto precedentemente, y siendo que no se ha presentado el registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y las que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas, se concluye que el sujeto obligado no habría detectado las inusualidades expuestas precedentemente en relación a la totalidad de operaciones realizadas por el comitente MLPF&S, y consecuentemente no las reportó, según lo descripto en el artículo 26 incisos b), m) y p) de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias. Se destaca que dichas falencias, implicaron la ausencia de detección de operaciones inusuales, como así también la inobservancia del análisis necesario con el fin de obtener información adicional que revierta o corrobore las mismas, a los efectos de ser posteriormente reportadas como sospechosas ante esta Unidad de Información Financiera. //Como corolario de lo expuesto se concluye que:// I.- El perfil determinado por el sujeto obligado para el cliente MLPF&S no pudo ser verificado, atento que el legajo aportado en el marco de la verificación realizada por la CNV no cuenta con la documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera de dicho cliente. Asimismo, para la determinación de dicho perfil debió tomarse en consideración el motivo, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones realizadas por el cliente, así como el origen y destino de los fondos involucrados en su operatoria.// II.- De las constancias obrantes en el expediente, no surge que el sujeto obligado haya llevado un registro de análisis de operaciones inusuales en forma adecuada, impidiendo de esta manera profundizar el análisis de las mismas, con el fin de obtener Información adicional que corrobore o revierta las inusualidades, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de las mismas. En tal sentido, el sujeto obligado debió haber aportado el registro de alertas, junto con el detalle de la operatoria inusual, su tratamiento, el motivo por el cual las alertas fueron cerradas y la documentación de respaldo que acredite el fundamento por el cual no fueron consideradas sospechosas las operaciones, lo cual no se acreditó en el caso bojo análisis.// III.- El Sujeto Obligado tampoco aportó los registros de las cuentas corrientes, los cuales podrían haber coadyuvado a justificar el origen y el destino de los fondos involucrados en la operatoria realizada por el cliente MLPF&S.// IV.- Cabe poner de resalto que la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero de la CNV concluyó en la actuaciones que, a partir de la documentación que fuera aportada por la entidad "M██████ L██████ Argentina", respecto de su cliente MLPF&S, no se ha podido determinar de dónde provienen los fondos para las operaciones que se realizan por orden de dicho comitente (Nota N°: NO-2020-33506572-APN-GLPD#CNV del 21.05.2020- fs. 442/443). Conclusión que vino a corroborar lo ya expuesto por dicho Organismo de control y fiscalización a fojas 287/291 y a fs. 434, donde ya se había concluido que a criterio de la Comisión Nacional de Valores, no se había acreditado el origen de los fondos en relación a la operatoria cursada por el comitente MLPF&S.// V.- Por los motivos expuestos, se considera que el sujeto obligado habría incumplido con la obligación de reporte de operaciones sospechosas, en relación a la totalidad de las operaciones realizadas por el comitente MLPF&S durante el periodo 18.05.2015 al 19.05.2016, lo que implicaría un incumplimiento de lo estipulado en los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley 25.246 y modificatorias y el artículo 26 de la Resolución UIF 229/2011 y modificatorias.// Que en razón de todo lo expuesto, y conforme surge de los antecedentes referenciados, el Sujeto Obligado habría incumplido - prima facie- con la obligación de reportar como sospechosas las operaciones llevadas a cabo por el cliente MLPF&S

en el período comprendido entre los días 18 de mayo de 2015 y 19 de mayo de 2016, por la suma total de \$ 13.090.683.803,98 (Pesos Trece Mil Noventa Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Tres con 98/100)."

Que en lo que respecta a la normativa endilgada como infringida, el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246, vigente al momento de los hechos establecía que: *"El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. //El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente. //La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20. //En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. // En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma. // Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo."*

Que por su parte, el inciso b) del artículo 21 de la referida ley vigente al momento de los hechos disponía: *"Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones: (...) b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.//La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad..."*

Que los incisos b), m) y p) del artículo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011 establecen: *"Los Sujetos Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b. y 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación de Terrorismo. //Deberán ser especialmente valoradas, las siguientes circunstancias, que se describen a mero título enunciativo: (...) b) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes (...) m) La compra de valores negociables por importes sumamente elevados (...) p) Las operaciones en las cuales el Cliente no posee una situación financiera que guarde relación con la magnitud de la operación, y que ello implique la posibilidad*

*de no estar operando en su propio nombre, sino como agente para un principal oculto... ”.*

Que, por otra parte, el artículo 7° inciso g) de la Resolución UIF N° 229/2011 establece: *“El Oficial de Cumplimiento tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones: (...) g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y la COMISION NACIONAL DE VALORES en ejercicio de sus facultades legales.”*

Que, finalmente, el artículo 12 del Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 dispone: *En el marco de las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones efectuadas conforme las Leyes N° 25.246 y modificatorias, N° 18.924, N° 20.091, N° 20.321, N° 20.337, N° 21.526, N° 22.400, N° 24.144 y N° 26.831, los Sujetos Obligados deberán proporcionar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y a los Órganos de Contralor Específicos toda la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones, facilitando el acceso a locales y establecimientos correspondientes, y proveyendo toda la documentación pertinente.// La denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones será considerada falta grave, dando lugar a la aplicación de las medidas y acciones correctivas correspondientes de conformidad con la presente resolución, y a la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder conforme el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se pudiera derivar de la aplicación del Capítulo I del Título XI del Libro II del Código Penal.”*

Que los sumariados en su descargo sostuvieron que no existe ningún extremo a la luz de los hechos y circunstancias del caso en virtud del cual se pueda concluir que esas operaciones eran sospechosas, ello sumado a que todas las operaciones fueron analizadas a los fines de detectar transaccionalidad de carácter inusual de conformidad con la regulación aplicable conforme lo desarrollaron anteriormente.

Que señalaron que siempre se cumplió con el deber de análisis y registro de operaciones inusuales y que no hubo, durante todo el período bajo examen, operaciones sospechosas que debieron ser reportadas por MLASA.

Que agregaron que la UIF no sugiere que esas operaciones fueran, en concreto, sospechosas, considerando además que no se encuentran cuestionadas ante la Justicia por implicar lavado de activos o financiación de terrorismo, extremos demostrativos de que las operaciones de MLPFS no eran sospechosas y que, por lo tanto, MLASA, no incumplió ningún deber de reportar.

Que manifestaron que: a. Las operaciones de compraventa de títulos de MLPFS no fueron sospechosas porque no eran desconocidas las cuentas de origen y destino de los fondos, habiéndose realizado las transferencias en debida y legal forma. Al respecto refieren a lo explicado previamente en relación a las cuentas de origen y destino y la modalidad de liquidación de las operaciones; b. Las operaciones de MLPFS no involucraron montos inusualmente elevados y tampoco involucraron una complejidad ni una modalidad no habitual. El hecho de que no involucraron una complejidad o modalidad no habitual surge con claridad si se considera que fueron realizadas en el ámbito de negociación del MAE y según las reglamentaciones en vigencia en ese momento. Por otra parte, refieren al Informe de Aseguramiento Razonable realizado por la firma auditora *Grant Thornton* (Anexo XIX), la cual realiza la auditoría externa de MLASA, del cual surge que los montos del total de las operaciones del período 18/5/2015 al 19/5/2016, expresados en dólares estadounidenses, no fueron elevados. Agregando que si se consideran los montos totales, expresados en dólares estadounidenses, de las transacciones entre MLASA y MLPFS de períodos anteriores y posteriores, los montos de las transacciones del período 18/5/2015 al 19/5/2016, también expresados en dólares estadounidenses, estuvieron debajo del promedio para el período 18/5/2013 al 18/5/2017. Asimismo, sostuvieron que en dicha certificación se constató que la modalidad habitual de las operaciones del período bajo estudio no presentó aspectos inusuales respecto de las operaciones llevadas a cabo

durante los períodos 18/5/2013 al 17/5/2015 y del 20/5/2016 al 18/5/2017. Finalmente refieren a las operaciones que fueron pagadas por MLCS como consecuencia del *back to back trading* entre MLPFS y MLCS, sosteniendo que no cabe ninguna sospecha por tratarse de una modalidad transaccional habitual e histórica en los mercados capitales.; c. Las operaciones de MLPFS no involucraron importes sumamente elevados. En relación a este punto remitieron a lo expuesto en el punto b; d. La magnitud de las operaciones de MLPFS guarda relación con la situación financiera de ese cliente y fueron realizadas en su propio nombre. MLPFS gozó de suficiente capacidad económico-financiera para realizar las operaciones con MLASA. Según señalan los sumariados, el Informe de Aseguramiento Razonable emitido por la firma *Grant Thornton* deja ver que el volumen total de las operaciones de compra de MLPFS con MLASA durante el 2015 y 2016 representó una pequeña fracción de sus activos líquidos. Concluye dicho informe que el volumen operado durante el 2015 y 2016 es razonable con relación a sus estados financieros de igual período, estando dentro de la capacidad económico-financiera de esa compañía; e. El carácter no sospechoso de las operaciones de MLPFS se reafirma si se considera que Argenclear, MAE y Citibank, sucursal Argentina son sujetos obligados ante la UIF, intervinieron en diferentes instancias de las mismas no habiendo constancias de que las hayan reportado como sospechosas; f. El carácter no sospechoso de las operaciones de MLPFS fue analizado y determinado por el sistema MANTAS utilizado por MLASA para analizar operaciones que no arrojó ninguna alerta respecto de aquellas. Además estaban adecuadamente respaldadas documentalmente y encuadraban dentro del perfil de MLPFS. A todo evento, tal falta de alertas configura un supuesto de “error de tipo” o error de prohibición” que los exime de responsabilidad por falta de reporte de las operaciones de MLPFS. En relación a este punto, refieren a la nota emitida por Bank of America (Anexo V) donde manifiesta que, respecto de las operaciones investigadas en el sumario, el sistema MANTAS no arrojó ninguna alerta. Respecto del error de tipo, sostuvieron que, si el sistema no arrojó ninguna alerta, entonces, ningún reproche puede formularse a los sumariados pues esa falta de alertas los condujo a incurrir en el error de tipo. Aun si se considera que existió un error de prohibición, éste excluye cualquier reproche hacia los sumariados; g. No puede válidamente derivarse de la falta de un legajo completo del cliente MLPFS que las operaciones de éste fueran sospechosas y por tanto debieran ser reportadas; h. A todo evento, existió una razonable situación de duda acerca del encuadre de las operaciones de MLPFS, lo cual redundaba a favor de los imputados conllevando su absolución de toda culpa y cargo. Alegaron los sumariados que en materia penal rige la garantía “*in dubio pro reo*” que tiene su correlato en materia penal administrativa donde la garantía adopta el nombre de “*in dubio pro administrado*”. En virtud de ello, si existiera alguna duda razonable acerca de si las operaciones de MLPFS eran sospechosas o no, solicitaron que se aplique la garantía de *in dubio pro administrado* y se los absuelva de toda culpa y cargo; y, i. Subsidiariamente, alegaron que corresponde declarar la inexistencia de infracción a la luz de la aplicación retroactiva de la Resolución N° 21/2018. Indicaron nuevamente que MLPFS es una sociedad controlada por B. o. A. C. y que, en función del criterio emergente en los precedentes “Forlón” y “Banco de la Nación Argentina”, dada la obligación mínima en conocimiento de clientes aplicable a aquellos como MLPFS, se deriva que el Sujeto Obligado no solo no tiene obligación de trazar un perfil de los mismos, sino que no tiene obligación de controlar, monitorear y, eventualmente reportar las operaciones que ellos realicen.

Que, a fin de comenzar con el análisis del presente cargo, cabe recordar lo analizado previamente en cuanto a que, conforme lo informó la CNV, en las respuestas a los oficios enviados en el marco del presente sumario, MLPFS concertó las operaciones a través de MLASA que actuó como ALyC en dichas concertaciones, más allá de si llevó o no a cabo las liquidaciones.

Que, así, como fuera expuesto anteriormente, MLASA tenía la obligación de debida diligencia respecto de MLPFS, de analizar su operatoria y eventualmente reportarla en caso de ser sospechosa, ello en tanto MLPFS era cliente suyo y concertó las operaciones analizadas en autos a través de MLASA.

Que en lo que respecta a las operaciones concertadas y conforme la documentación aportada en el presente expediente, no se ha podido determinar el origen y destino de los fondos aplicados a las operaciones.

Que, en relación a este punto, y a fin de diferenciarlo del cargo tratado previamente, resulta oportuno mencionar nuevamente que existen dos obligaciones en cabeza del Sujeto Obligado, por un lado, conocer la cuenta de origen y de destino de los fondos involucrados en la operatoria y, por otro, conocer el origen y destino de los fondos, lo cual implica conocer la licitud de dichos fondos.

Que en el caso que nos ocupa, no sólo el Sujeto Obligado no contaba con la información correspondiente a las cuentas remitentes y receptoras sino que tampoco demostró conocer el origen de los fondos operados por su cliente.

Que, más aún, MLASA indicó que *Citibank NA* actuaba como custodio de las operaciones concertadas por MLPFS por lo que, al solicitarle a MLASA los datos y documentación relativa las cuentas corrientes en pesos, dólares y títulos del cliente, informó que los requerimientos debían cursarse al custodio, es decir, a Citibank NA.

Que dicha delegación no hace más que corroborar el incumplimiento de las obligaciones en cabeza de MLASA quien, como fuera constatado, concertó las operaciones analizadas en las presentes actuaciones para su cliente MLPFS.

Que, en este punto cabe citar lo expuesto en el informe de la CNV obrante a fs. 271/275: *"No se aporta en el legajo del comitente documentación válida alguna que justifique la operatoria del cliente. No se aportan los juegos de EECC ni declaraciones juradas impositivas ni manifestación de bienes alguna. Con la información disponible no puede determinarse el origen de los fondos operados."*

Que, luego a fs. 277/282 sostuvieron que: *"En relación a los comitentes: a).- "M. L. P. F. & S. I.": Falta la constancia de cotejo en el Listado Unificado de Terroristas (LUT), falta documentación respaldatoria que acredite el origen de los fondos, el Perfil del Cliente en los términos del Artículo 20 de la Resolución UIF N° 229/2011 y la identificación del beneficiario final. Respecto del representante legal no habría en el legajo ningún documento en el que conste que el Sr. K. es efectivamente el representante legal de la Sociedad. Por ende, el Sujeto Obligado debería presentar copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado"*.

Que, por otra parte, a fs. 429/431 manifestaron: *"A su vez considerando lo analizado por el Licenciado Grillo, interviniente anterior, a fs. 281 que se transcribe a continuación: 'Realizado el análisis e la operatoria de la cuenta comitente M. L., P., F. y S. I. se destaca que la totalidad de las operaciones de este cliente habrían sido realizadas a través de una cuenta cartera propia del SO que actuaría como intermediario de aquella.'* (El destacado me pertenece) (...) *"Es decir que, las operaciones solicitadas por el cliente (sean de compra o venta) son cursadas hacia el mercado (MAE a través de la cuenta propia M. L. A. S.A. (en forma de compra o venta). A su vez, esta cuenta, fue utilizada para realizar operaciones de contratos de futuros de dólar en el Mercado ROFEX: \$12.118.653.000 compras y \$11.675.336.750 ventas. //No se encuentran cuentas corrientes que puedan explicar el origen ni destino de los fondos utilizados para las operaciones descriptas"*.

Que, asimismo, resulta importante citar lo expresado por la CNV a fs. 274/275 en el sentido de que *"Realizado el análisis de la operatoria de la cuenta comitente analizada en I), se destaca que la totalidad de las operaciones de este cliente habrían sido realizadas a través de una cuenta de Cartera Propia del SO que actuaría como intermediario de ella. // Es decir, las operaciones solicitadas por el cliente (sean de compra o venta) son*

cursadas hacia el mercado (MAE) a través de la cuenta cartera propia "M. L., P., F. & S. I. Argentina S.A." (en forma de venta o de compra)". Cabe aclarar que en el punto 1) se analiza la cuenta comitente MLPFS.

Que, luego, en el informe de la CNV de fs. 429/431 la Dra. Fretes manifiesta respecto de MLASA y su operatoria cartera propia que: "[t]eniendo en cuenta que la operatoria bajo análisis, fue del periodo 18/05/2015 al 18/05/2016, y visualizando los EECC comparativos con el ejercicio 2015, **la liquidez de dicho ejercicio en relación con las operaciones efectuadas, no se encontrarían justificadas.** // A su vez considerando lo analizado por el Lic. Grillo, interviniente anterior, a fs. 281 que se transcribe a continuación: "realizando el análisis de la operatoria de la cuenta comitente M. L., P., F. & S. I., se destaca que la totalidad de las operaciones de este cliente habrían sido realizadas a través de una cuenta cartera propia del SO que actuaría como intermediario de aquella..." (el destacado no pertenece al original)

Que, por su parte, el informe elaborado por la CNV de fs. 373/375 cita lo señalado en la Auditoría (fs. 310) en el sentido de que "MLASA solo tiene un cliente, M. L., P., F. & S. I. (MLPF&S), una subsidiaria que pertenece en su totalidad a B. O. A. C. El único fin de MLASA es brindar servicios de compensación y de liquidación para la comercialización de los bonos gubernamentales argentinos que se lleva a cabo fuera de Nueva York. Ningún cliente está incorporado en Buenos Aires y la oficina no brinda otros productos ni servicios."

Que, hasta aquí cabe destacar que, el Sujeto Obligado, por un lado, reconoce a MLPFS como "cliente habitual", tardíamente presentó un perfil transaccional, reconoció en su propio descargo que de las operaciones realizadas nunca se produjo una alerta, es decir, habría reconocido que se encontraba en cabeza suya el deber de analizar las operaciones de MLPFS y que las mismas se concertaron a través suyo.

Que, por otro, sostuvo que "todas las operaciones realizadas por MLASA en el MAE son carta cartera propia, como así también las de ROFEX" (fs. 5)

Que, por su parte, la CNV señaló que MLASA no contaba con documentación de respaldo que permitiera justificar las operaciones involucradas, que la liquidez que arrojaba el ejercicio 2015 en relación con las operaciones efectuadas, no se encontrarían justificadas y que las operaciones fueron realizadas por MLASA para el cliente MLPFS a través de su cuenta cartera propia.

Que, en relación con esto último, el artículo 6° del Capítulo V del Título VI de las Normas de la CNV indica que "[s]e entiende que el concepto de carta cartera propia comprende las operaciones realizadas por los agentes para sí o para sus sociedades controladas, las controlantes o las que estén bajo control común dentro de un mismo grupo económico de la respectiva sociedad; y para sus miembros del órgano de administración, del órgano de fiscalización, síndicos, consejeros de vigilancia, gerentes, socios, accionistas, empleados, administradores, apoderados y representantes. Asimismo, los parientes de éstos por consanguinidad en línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, por afinidad en línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, al cónyuge o las personas con análoga relación de afectividad."

Que, así, toda vez que, tal como lo informa la Dirección de Supervisión de esta UIF en su Informe Final a fs. 551 vta., MLASA y MLPFS pertenecen al mismo grupo económico por lo que las operaciones efectuadas por MLASA en favor de MLPFS entran dentro del concepto carta cartera propia.

Que, no obstante ello, el hecho de operar como carta cartera propia no exime a MLASA de la obligación de efectuar la debida diligencia, de analizar la operatoria, de contar con la documentación que permita conocer el origen de los fondos aplicados y de reportar la operatoria si la misma lo amerita.

Que, luego, a fin de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en el marco del presente sumario, la Instrucción ordenó remitir el expediente a la Dirección de Análisis de esta UIF a fin de que informe si los sumariados debieron formular Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y si, efectivamente los formularon, en el período objeto de estudio (18/5/2015 al 19/5/2016) en relación a las operaciones identificadas por la Dirección de Supervisión en su Informe Final obrante a fs. 550/562.

Que, en virtud de dicho requerimiento, la Dirección de Análisis, visto el expediente, remitió la nota agregada a fs. 3472/3475. En la misma manifestaron: *“Del relevamiento de la documentación obrante en el expediente administrativo de la referencia, se observaron como elementos de significativa relevancia lo siguiente: M. L., P., F. y S. I.: La operatoria del cliente no se justifica, toda vez que no existe documentación suficiente en el legajo que permita determinar el origen de los fondos operados. Hay que destacar que no se aportan los Estados Contables, ni declaraciones juradas impositivas, ni ninguna documentación apropiada a dichos efectos. Hay que destacar, que la operatoria analizada es de montos significativos realizada por un cliente extranjero que declara que los fondos utilizados en las operaciones a desarrollar provienen de las actividades propias de corredor registrado y asesor de inversiones. Estos elementos, hacen aún más grave la inusualidad de las operaciones”*.

Que, finalmente, en la referida nota proveniente de la Dirección de Análisis se concluye: *“Todo lo hasta aquí expuesto, habiéndose elevado las constancias que conforman el expediente administrativo de referencia y observado las mencionadas circunstancias de relevancia, conduce a la opinión de que el cargo por falta de Reporte de Operaciones Sospechosas de las operaciones analizadas debiera prosperar, en atención a que los elementos colectados producto del análisis efectuado llevan a concluir que se encuentran reunidos los elementos para considerar las operaciones en su carácter de sospechosas debiendo haber realizado el sujeto obligado, el respectivo Reporte de Operaciones Sospechosas (...) Respecto a si efectivamente formularon los reportes en el período objeto de estudio (18/5/2015 al 19/5/2016) en relación con las operaciones identificadas por la Dirección de Supervisión en el Informe Final obrante a fs. 550/562, es dable mencionar que es el mismo Sujeto Obligado, que en el Acta de la Inspección manifiesta, ante la solicitud del “Registro de Análisis y Gestión de Riesgo de Operaciones Inusuales o Sospechosas”, que: “Dado que no realizaron ROS, no poseen dicho registro”.// En este sentido, se menciona que no existe registro de la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas realizado por el Sujeto Obligado respecto a las operaciones objeto de estudio”*.

Que, en virtud de lo expuesto, la Instrucción concluyó que: a. MLPFS era cliente de MLASA; b. MLASA concertó para MLPFS las operaciones que se detallan en el archivo embebido a la presente identificado con el IF-2025-65720402-APN-DRAS#UIF; c. MLASA concertó las operaciones en favor de MLPFS a través de su cuenta cartera propia; d. MLASA no contaba con el perfil transaccional elaborado de MLPFS al momento de la verificación y, por lo tanto, tampoco al momento de concertar las operaciones; e. MLASA no contaba con documentación de respaldo o información patrimonial, financiera, económica ni tributaria que justificara el origen y destino de los fondos involucrados en la operatoria llevada a cabo en favor de MLPFS. El Sujeto Obligado no contaba con documentación alguna, se le solicitaron los EECC con cierre en 2015 y 2016 lo cual no fue oportunamente acompañado. Al respecto cabe aclarar que los EECC al 31 de diciembre de 2016 presentados por el SO ante la CNV (fs. 3050/3093) el 28 de enero de 2019, fueron aportados tardíamente y, los acompañados al descargo a fs. 762/801 y 854/902 no logran eximir del deber de reportar oportunamente del Sujeto Obligado ni de contar con la documentación de respaldo de las operaciones al momento de ser efectuadas. Es decir, al momento en que el Sujeto Obligado debió reportar, no contaba con la documentación que permitiera justificar las operaciones concertadas en favor de MLPFS; f. MLASA jamás acompañó los registros de la cuenta corriente de MLPFS solicitados; g. De esta forma, cabe observar que el Sujeto Obligado no administraba ni gestionaba el riesgo de operaciones inusuales o sospechosas de LA/FT, siendo su sistema de PLA/FT deficiente; h. La prueba



aportada en autos no logra desvirtuar el cargo imputado toda vez que no exime al Sujeto Obligado de su deber de Reportar ni permite justificar las operaciones analizadas; e, i. En virtud de todo lo expuesto, las operaciones efectuadas por MLASA a través de su cuenta cartera propia en favor de MLPFS revisten el carácter de sospechosas y debieron ser reportadas por el Sujeto Obligado.

Que el artículo 26 de la Resolución UIF N° 229/2011 y modificatorias establece que los sujetos obligados deben reportar conforme lo establecido en el artículo 20 bis y 21 inc. b) de la Ley 25.246 y modificatorias, las operaciones inusuales que de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza y el análisis efectuado, se consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.

Que, en este punto vale destacar que el cumplimiento de la obligación de reportar operaciones sospechosas resulta esencial para una adecuada alimentación de la base de datos con que cuenta la UIF. La información contenida en dicho reporte, adecuadamente sistematizada se vincula con el resto de la información habida en la base de datos, lo que puede derivar en importantes hallazgos que permitan contribuir a detectar operaciones o tipologías delictivas y prevenir e impedir el LA/FT.

Que, si esa información no es puesta a disposición de la UIF, el trabajo de interrelación no puede realizarse interfiriéndose en la labor que el legislador ha impuesto a la Unidad.

Que, en definitiva, la emisión de los reportes de operaciones sospechosas no constituye una mera formalidad sino que resulta de vital importancia a fin de que la UIF desarrolle su misión legal en forma eficaz y eficiente.

Que, en fecha 18 de agosto de 2025, la Instrucción elaboró un Informe Final Aclaratorio en el que consideró oportuno adicionar algunas consideraciones respecto al presente cargo.

Que, conforme se desprende de dicho Informe, en primer término, vale señalar nuevamente que luego de un detenido estudio de todo lo actuado en el procedimiento, que MLPFS concertó las operaciones detalladas en el IF-2025-65720402-APN-DRAS#UIF, agregado a fs. 3543/3546, entre los días 18-05-2015 y 19-05-2016 a través de MLASA, quien se desempeñó en aquellas como ALyC con notoria y extremadamente grave desatención de su rol como sujeto obligado en materia de PLA/FT.

Que, en efecto, a partir de un detenido estudio de todas las constancias colectadas en el sumario, se desprende sin esfuerzo, que el rol de MLASA como ALyC y sujeto obligado en materia de PLA/FT tuvo numerosas, profundas y esenciales falencias que significaron un incumplimiento de sus deberes normativos básicos como sujeto obligado, con respecto a las operaciones indicadas.

Que, así las cosas, teniendo en consideración lo desarrollado en el Informe Final de fs. 3503/3546, cabe concluir en síntesis que se encuentra acabadamente probado que MLASA incumplió normas vigentes relativas a: (i) Falta de identificación y conocimiento del cliente; (ii) Falta de identificación del beneficiario final; (iii) Falta de determinación del perfil del cliente, y falta de documentación de respaldo para definir el perfil del cliente; (iv) Falta de cumplimiento del deber de recabar información precisa del remitente y receptor de las operaciones y de los mensajes relacionados, así como el mantenimiento de la información con la transferencia, a través de la cadena de pagos; (v) Falta de perfil transaccional elaborado por MLPFS, al momento de la ejecución de las operaciones; (vi) Falta de cumplimiento de la obligación de indelegabilidad en terceras personas ajenas a los Sujetos Obligados; (vii) Falta de cumplimiento del principio esencial, fijado como axioma de los estándares emitidos por el GAFI/FATF, conocido como "Conozca a su Cliente" o "Know Your Customer" (KYC), con respecto fundamentalmente a los destinatarios de los fondos; (viii) Falta de documentación de respaldo o información -sea esta de naturaleza financiera, económica, tributaria u otra- que justificara o al menos permitiera

presumir seriamente, la licitud tanto del origen, como del destino de los fondos involucrados en las operaciones de marras, perfeccionadas en favor de MLPFS; (ix) Falta de registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y las que, por haber sido consideradas sospechosas, hayan sido reportadas.

Que la nómina de falencias detallada precedentemente implica una fáctica declinación de las más elementales obligaciones impuestas por la norma vigente a MLASA, como sujeto obligado en materia de LA/FT.

Que el elevado número de faltas cometidas, como así también la trascendencia técnica de las omisiones dentro del sistema de la Ley 25.246 y sus modificatorias, hizo que la obligación de control de MLASA como sujeto obligado de PLA/FT pueda calificarse de “ilusoria” o “aparente”. Debe destacarse que todos los incumplimientos enumerados, conforman medidas elementales de Debida Diligencia del Cliente, algunas expresamente indicadas en la Recomendación 10 del GAFI-FATF, lo que genera clara idea de la magnitud de las falencias verificadas en el sistema de PLA/FT de MLASA.

Que en las presentes actuaciones se alegaron una serie de argumentos defensistas relacionados con las acciones en extraña jurisdicción de MLPFS, en el campo de la PLA/FT, su valor reputacional, la calidad y cantidad de información pública disponible y otras que de alguna manera, “suplieron” el cumplimiento de obligaciones en cabeza de MLASA y que resultarían -más allá del accionar concreto en la jurisdicción argentina de MLASA- garantía de licitud de los fondos involucrados, así como de la transparencia de la operatoria en general y de sus clientes. Además, debería sumarse a lo dicho la intervención de terceras organizaciones financieras multinacionales y de control pertenecientes a estados extranjeros. Todo ello debería habilitar la presunción de legitimidad, frente a las graves falencias en esos campos que observó MLASA.

Que, sin perjuicio de ello, lo cierto es que el análisis en las presentes actuaciones se circunscribe exclusivamente a la actuación de MLASA conforme a la norma vigente en la jurisdicción argentina, en el periodo indicado y respecto de las operaciones ejecutadas en ese plazo y bajo su responsabilidad como sujeto obligado. Todo ello sin perjuicio que otros sujetos obligados hayan cumplido sus obligaciones normativas en la jurisdicción argentina.

Que, en ese sentido, de la totalidad de lo actuado surgen con claridad meridiana que los incumplimientos indicados en la enumeración precedente tuvieron esenciales implicancias para la totalidad del sistema de PLA/FT que obligatoriamente debía desarrollar MLASA como sujeto obligado frente a la ley argentina. En este sentido, las operaciones perfeccionadas no pueden considerarse -sin más- fuera de toda sospecha de lavado de activos, pues MLASA -habiendo omitido las principales obligaciones impuestas por la norma como viene afirmándose- no estaba en condiciones de sostener presunción alguna sobre la legitimidad de los fondos, ni la capacidad transaccional de sus clientes.

Que ello así, pues, del acta aportada por el propio sujeto obligado, identificada con el número N° 80 de fecha 28-03-2016, surge que entre marzo y diciembre de 2016, se generaron OCHENTA Y CINCO (85) alertas que fueron cerradas en su totalidad. También se incorporó un similar documento de fecha 28-06-2016, que da cuenta que entre marzo y junio de 2016 se generaron CIENTO TREINTA Y SIETE (137) alertas, que también fueron cerradas. Estas DOSCIENTAS VEINTIDOS (222) alertas cerradas carecen en el presente sumario de justificación, ya sea por la existencia de documentación respaldatoria suficiente, u otros motivos o fundamentos.

Que lo dicho en el párrafo precedente es claro y compatible con las constancias del sumario, DOSCIENTAS VEINTIDOS (222) alertas se cerraron sin que pueda verificarse la justificación de aquellas bajas. Está claro, conforme lo sostuvo la Dirección de Supervisión de la UIF, el sujeto obligado debería haber aportado el registro de alertas al que hizo referencia a fs. 380/381, que contuviera los elementos necesarios para comprender que

dichas operaciones no debieron ser reportadas. No lo hizo, entonces el cargo por omisión de reporte debe prosperar.

Que tampoco la defensa de MLASA aportó los registros de las cuentas corrientes de sus clientes que, quizás, hubiera arrojado luz sobre las DOSCIENTAS VEINTIDOS (222) operaciones alertadas.

Que también se desprende de las constancias de sumario, que el sujeto obligado MLASA no tuvo capacidad de verificar, por las omisiones señaladas, ni el origen de los fondos con los que el comitente operó, ni el destino de los fondos liquidados.

Que, se encuentra probado que el cumulo de falencias y omisiones largamente señaladas, no permitieron al sujeto obligado realizar un análisis adecuado del cliente y fundamentalmente del origen del flujo de fondos que ingreso al sistema financiero. MLASA con sus propios recursos, no pudo, como resultado de todas las omisiones indicadas, conformar un cuadro de información o datos sustentables que permitiera, al menos suponer, con un alto grado de probabilidad, que los fondos aplicados a las operaciones de marras tenían origen en actividades lícitas. Es decir, MLASA no pudo “per se” despejar la sospecha que justifica la emisión de un ROS. Por el contrario, “confiaron” que otras organizaciones vinculadas hicieran el trabajo y cumplieran las obligaciones impuestas por la norma argentina a MLASA.

Que debe tenerse en cuenta, que uno de los capítulos trascendentes del sistema de PLDFT que surge a partir de las 40 Recomendaciones emitidas por el organismo intergubernamental GAFI-FATF, es la emisión -ante la sospecha de presencia de fondos de origen criminal- del ROS por parte de los sujetos obligados.

Que todo este complejo sistema está orientado a que los sujetos obligados *-en función de una multiplicidad de recursos establecidos por la Ley 25.246 y sus modificatorias, los decretos emitidos por el PEN y el cumulo de resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera-* ante la sospecha de que los fondos aplicados sean de origen criminal- emitan un ROS.

Que para ello deben llevar adelante todas las medidas de debida diligencia del cliente (DDC) que prescribe la norma, a los efectos de verificar que sus clientes operan con fondos de origen lícito. Si, por el contrario, omiten aquella DDC no estarán en condiciones de ponderar adecuadamente el origen de los fondos, como tampoco el perfil transaccional de sus clientes.

Que en el caso de los presentes autos administrativos, el sujeto obligado MLASA, incurrió en una abultada serie de graves y esenciales incumplimientos que impidieron conocer el perfil transaccional y verificar o al menos presumir, la licitud de los fondos con los que operó su cliente. Ello con mucha más razón, cuando a lo largo del procedimiento no pudo brindar una respuesta clara, precisa y contundente, con los fundamentos pertinentes al caso, que las operaciones no reportadas, no obstante, las alertas acreditadas y cerradas, fueron producto de resoluciones fundadas de las autoridades internas competentes, tomadas en legal forma.

Que, en virtud de lo expuesto, la Instrucción entendió que el cargo por falta de reporte de operación sospechosa se encuentra acreditado en infracción a lo dispuesto en los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley 25.246 y el artículo 26 incisos b), m) y p) de la Resolución UIF N° 229/2011.

Que, tal como fuera aclarado previamente, a la presente se acompaña como archivo embebido el IF-2025-65720402-APN-DRAS#UIF, el cual forma parte de la presente, con el detalle de operaciones analizadas del cual se desprende que el total cursado durante el período de estudio fue de \$13.090.683.803,98.

Que en cuanto al tipo de cambio al que fueron pesificadas las sumas en dólares, las mismas se desprenden del Anexo del informe de la Dirección de Supervisión obrante a fojas 563, el cual contiene el detalle del tipo de cambio al que, en cada caso, se pesificaron las operaciones en dólares detalladas en el mismo, por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (US\$ 94.855.359), equivalente a PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 92/100 (\$1.341.231.309,92).

Que, por su parte, el detalle de las operaciones realizadas en pesos surge del Anexo al referido informe obrante a fojas 559/562, por un total de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 06/100 (\$ 11.749.452.494,06).

Que, así, la sumatoria de ambas operatorias, en pesos y en dólares, arroja un total de PESOS TRECE MIL NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES CON 98/100 (\$ 13.090.683.803,98).

Que, por otra parte, la Resolución de Instrucción imputó un presunto incumplimiento al artículo 7° inciso g) de la Resolución UIF N° 229/2011 indicando que el Oficial de Cumplimiento debió haber aportado, en el marco de la inspección, los registros de las cuentas corrientes de los clientes de MLASA y que el hecho de no haber aportado los referidos registros tornó más dificultoso el análisis final.

Que, al respecto, cabe señalar que se desprende de las constancias de autos las reiteradas solicitudes realizadas por la CNV al Sujeto Obligado a efectos de que aporte los registros de las cuentas corrientes de los clientes. En la primera de ellas, el Sujeto Obligado indicó que no tenía la cuenta custodia del cliente y que por lo tanto no cuentan con dicha información (fs. 3/5).

Que, luego, el 18 de septiembre de 2019 la CNV requirió nuevamente a MLASA copia de la cuenta corriente en pesos, títulos y dólares de M. L., P., F. y S. I. por el periodo 18.05.2015-19.05.2016 y copia de la cuenta corriente de cartera propia de M. L., P., F. y S. I. Argentina S.A indicando las operaciones realizadas a nombre de M. L., P., F. y S. I., por el período 18.05.2015 a 19.05.2016 (fs. 452).

Que, en respuesta a dicho requerimiento el Sujeto Obligado acompañó copia de la cuenta corriente de cartera propia pero sin indicar las operaciones realizadas a nombre de MLPFS; sin embargo, respecto de la cuenta corriente de MLPFS indicó lo siguiente: “[r]especto a lo requerido en el punto b) de la VISTA, se informa que quien actúa en calidad de Agente Custodio del Comitente es Citibank NA, por lo que cualquier requerimiento referido a la cuenta en pesos, títulos y dólares del Comitente deberá ser dirigido Citibank NA.”.

Que, en relación al presente cargo, cabe señalar que el Sujeto Obligado prestó colaboración en el marco de la inspección efectuada en relación al resto de la documentación e información requerida aunque se halla corroborado la existencia de ciertos faltantes, conforme fuera analizado en los cargos precedentes.

Que, por otra parte, si bien es cierto que no entregó los registros de la cuenta corriente del cliente MLPFS, no se negaron a entregarlas sino que indicaron que ellos no tenían la cuenta custodia de dicho cliente y que quien poseía dicha cuenta custodia era Citibank NA.

Que, por ello, visto los antecedentes de la inspección, la documentación obrante en el presente expediente, la Instrucción entendió que no hubo falta de colaboración por parte del Sujeto Obligado y por tanto no se configuró

la infracción al artículo 7 inciso g) de la Resolución UIF N° 229/2011 y al artículo 12 del Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014.

Que, en ese orden de ideas, mediante el artículo 14 apartado 8. de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, establece que: *“La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para (...) 8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso”*.

Que, en este estado, corresponde señalar que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo que impone el inciso 8 del artículo 14 de la Ley N° 25.246, y que el inciso f) del artículo 1° de la -ley N° 19.549 garantiza para los procedimientos administrativos –entre ellos los sancionadores- como comprensivo de la posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada (conf. Tawil, Guido Santiago “Procedimiento Administrativo”, Abeledo Perrot, 2010, p. 535; Dictamen PTN 223:128; y fallos CSJN 186:297 y 207:293).

Que con ello, a su vez, se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutela efectiva prescripta por el artículo 18 y el inciso 22 del 75 de la Constitución Nacional y artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y su aplicación al procedimiento administrativo a la luz de lo resuelto por la CSJN (Fallos 325:1649 “Banco Integrado Departamental” y 327:1249 “Atienza”), y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Tribunal Constitucional vs. Perú” (sentencia del 31 de enero de 2001) y “Baena Ricardo y otros vs. Panamá” (sentencia del 2 de febrero de 2001).

Que los artículos 23 y 24 de dicha norma –Capítulo IV- establecen las sanciones que corresponde aplicar a quienes incumplan alguna de las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que, en lo que respecta a las sanciones a aplicar, es menester recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, vigente al momento en que los hechos objeto del presente sumario, establecía que la persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpliera alguna de las obligaciones ante la UIF sería pasible de sanción de multa.

Que el entonces artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 establecía que la totalidad de los integrantes del órgano de administración (incluido el Oficial de Cumplimiento) son responsables solidaria e ilimitadamente por el deber de informar previsto en el artículo 21 de la referida Ley.

Que, por su parte, el entonces inciso 2 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 establecía que la misma sanción sería aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñaren los sujetos infractores.

Que, en tal sentido, el artículo 24, apartados 1. y 3., vigente al momento de los hechos, de la referida Ley N° 25.246, establecía una pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción; así como también un monto mínimo y un máximo de la multa (entre \$10.000 y \$100.000) para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de los bienes involucrados en la operación, respectivamente.

Que, en virtud de los estándares GAFI recepcionados en la Recomendación N° 35 resulta necesario que las sanciones impuestas a dichos Sujetos Obligados sean eficaces, proporcionales y disuasivas.

Que, a fin de dar cumplimiento con lo señalado precedentemente, la UIF cuenta con un régimen sancionatorio tendiente a deslindar las responsabilidades respecto de incumplimientos constatados y penalizar las conductas contrarias a la legislación vigente.

Que, ahora bien, la finalidad de las sanciones administrativas es, junto con el reproche concreto por el incumplimiento constatado, la prevención y disuasión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, evitando la reiteración de incumplimientos por parte de los sumariados y la vigencia y efectividad de las normas de PLA/FT para el resto de los actores del sistema.

Que, junto con lo anterior, el procedimiento administrativo debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Que, al respecto, cabe recordar que el principio de proporcionalidad encierra una exigencia de ponderación guiada a que se corresponda la gravedad de la sanción con la del comportamiento de los sumariados.

Que, como principio, la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación (PTN *Dictámenes* 261:121, entre otros).

Que, en efecto, es dable señalar que en numerosas oportunidades se ha dicho que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (cfr. *Musso, Walter c. Prefectura Naval Argentina*, CNACAF, 27/5/97 y Sala II, fallos del 20/11/07 *Herrera, Jorge R. y otros c. BCRA-Resol. 414/02 Expte. 100966782 Sum Fin 556*"; del 10/12/09 *Pasamar SA y otros c/BCRA – Resol. 347/06*"; Causa N° 8.612/07; *García Belsunce* del 18/11/76; *Groisman* del 13/7/82; y *Transatlántico S.A. Casa de Cambio y otros c/ BCRA-Resol. 419/11 Expte. 100661/04 Sum Fin 1138* del 10/7/12, entre otros).

Que, en tal sentido, no resulta exigible una exacta correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (cfr. *Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art. 4*" CNACAF, Sala V, 14/7/2015).

Que, sin perjuicio de ello, resulta importante señalar que existen medios para limitar la discrecionalidad de la que goza la Administración Pública en la determinación del monto de las multas que impone, como son las reglas de graduación, resultando menester ponderar las circunstancias agravantes y atenuantes de cada caso a fin de fijar el quantum de la sanción.

Que, en consecuencia, resulta pertinente enunciar cuáles son, en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven de guía para la cuantificación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que se tuvieron en especial consideración las circunstancias que a continuación se detallan: (i) El riesgo en materia de PLA/FT al que se encuentra expuesta la actividad realizada por el Sujeto Obligado; (ii) El riesgo que representaron en el sistema de PLA/FT los incumplimientos acreditados, consistentes en la falta de una adecuada política de PLA/FT y de deficiencias en la Política de Identificación y Conocimiento del cliente, que derivaron en una clara vulnerabilidad y generación de riesgos para la integridad del sistema económico-financiero; (iii) El riesgo en que se expuso al sistema económico y financiero por la falta de Reporte de Operación Sospechosa; (iv) La envergadura del giro comercial de MLASA contando con un patrimonio neto al 31 de diciembre de 2016 de un total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS; y, (v) Por último, debe señalarse que se tiene en cuenta que el presente Sumario es el primero que registra tanto el Sujeto Obligado como el oficial de cumplimiento y miembros del órgano de

administración en funciones al momento de los hechos objeto del presente sumario ante la UIF.

Que, por todos los factores de ponderación señalados, la Instrucción del presente Sumario formó su sana convicción respecto del monto de la sanción aconsejada.

Que las conclusiones a las que arribó la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto en lo que hace al procedimiento seguido para la comprobación de los presuntos incumplimientos detallados en la Resolución de Apertura, así como para el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros. 111/2012, 152/2016 y 127/2023).

Que, en tal entendimiento, se comparten las conclusiones arribadas por la Instrucción del presente Sumario en su Informe Final respecto de la constatación de los cargos endilgados en la Resolución de Apertura y de los montos de las multas propuestos, por considerarlos razonables y proporcionales a los cargos imputados.

Que la Dirección del Régimen Administrativo Sancionador y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención correspondiente.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y el Decreto N° 290/2007 y sus modificatorios.

Por ello,

#### **EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** RECHAZAR los planteos de inconstitucionalidad, aplicación de la ley más benigna, prescripción y nulidad interpuestos por los sumariados, de conformidad con las consideraciones vertidas en el CONSIDERANDO de la presente.

**ARTÍCULO 2°.-**RECHAZAR los planteos de atipicidad de los hechos investigados por inexistencia de afectación del bien jurídico protegido, atipicidad de los hechos por inexistencia de obrar humano doloso o culpable interpuestos por los sumariados, de conformidad con las consideraciones vertidas en el CONSIDERANDO de la presente.

**ARTÍCULO 3°.-** Hacer lugar parcialmente al planteo de falta de legitimación pasiva respecto al Sr. Adrián Fernando G[REDACTED] (DNI N° 20.838.545) y declarar su falta de legitimación pasiva respecto al incumplimiento imputado a los artículos 26 primer párrafo e incisos b), m) y p) de la Resolución UIF N° 229/2011 y 21 inciso b) de la Ley 25.246 y modificatorias.

**ARTÍCULO 4°.-** HACER LUGAR al planteo de falta de legitimación pasiva relativo a los Sres. Diego Alberto Á[REDACTED] (DNI N° 21.762.070) y Martín Eugenio C[REDACTED] (DNI N° 21.406.445).

**ARTÍCULO 5°.-** ABSOLVER a M[REDACTED] L[REDACTED] ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (CUIT N° 30-[REDACTED]462-2) y a los Sres. Leonardo Andrés F[REDACTED] (DNI N° 2[REDACTED]8), Adrián Fernando G[REDACTED] (DNI N° 2[REDACTED]545), Sebastián Guido L[REDACTED] (DNI N° 2[REDACTED].645), Francis Joseph McG[REDACTED] (DNI N° [REDACTED].173), Lucas P[REDACTED] (DNI N° [REDACTED].666) y a la Sra. Nuria M[REDACTED] (Pasaporte N° P[REDACTED]56), en su carácter de miembros del órgano de administración del Sujeto Obligado, respecto de los cargos imputados en presuntas infracciones a los artículos 7 inciso g) y 14 apartado I inciso i) de la Resolución

UIF N° 229/2011 y al artículo 12 del Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014.

**ARTÍCULO 6°.- DECLARAR** que los hechos investigados, en los términos antes expuestos constituyen un incumplimiento a las obligaciones estatuidas por los artículos 20 bis, 21 inciso a) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; y en los artículos 3° inciso g), 7° incisos f), 12 inciso b), 14 apartado I incisos h), j) y k) y apartado II, 18 inciso II), 19 inciso a), 20, 21 inciso f) y 22 de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias e **IMPONER** a de los Sres. Leonardo Andrés F [REDACTED] (DNI N° [REDACTED] 818), Adrián Fernando G [REDACTED] (DNI N° 2 [REDACTED] 5), Sebastián Guido L [REDACTED] (DNI N° 2 [REDACTED] 645), Francis Joseph McG [REDACTED] (DNI N° [REDACTED] 73), Lucas P [REDACTED] (DNI N° [REDACTED] 666) y a la Sra. Nuria MA [REDACTED] (Pasaporte N° PA [REDACTED] 5), de acuerdo a lo previsto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246, vigente al momento de los hechos objeto del sumario, una sanción de MULTA por la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000) de conformidad con el siguiente detalle:

**6.1.** una MULTA de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000) por las deficiencias en la identificación del cliente en infracción al artículo 14 apartado I incisos h), j) y k) de la Resolución UIF N° 229/2011.

**6.2.** una MULTA de PESOS CIEN MIL (\$100.000) por falta de determinación del perfil del cliente y falta de documentación respaldatoria para su determinación en infracción a los artículos 12 inciso b), 14 apartado II, 19 inciso a) y 20 de la Resolución UIF N° 229/2011.

**6.3.** una MULTA de PESOS CIEN MIL (\$100.000) por no contar con información precisa respecto del remitente y receptor de las operaciones en infracción al artículo 18 inciso II) de la Resolución UIF N° 229/2011.

**6.4.** una MULTA de PESOS CIEN MIL (\$100.000) por delegación de obligaciones previstas en la normativa en infracción al artículo 22 de la Resolución UIF N° 229/2011.

**6.5.** una MULTA de PESOS CIEN MIL (\$100.000) por falta de registro de análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas y las que, por haber sido considerada sospechosas, hayan sido reportadas en infracción a los artículos 3° inciso g), 7° inciso f) y 21 inciso f) de la Resolución UIF N° 229/2011.

**ARTÍCULO 7°.- DECLARAR** que los hechos investigados, en los términos expuestos en el considerando y de acuerdo al detalle del Anexo (IF-2025-65720402-APN-DRAS#UIF) que como embebido forma parte integrante de la presente, constituyen un incumplimiento a las obligaciones estatuidas por los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y el artículo 26 incisos b), m) y p) de la Resolución UIF N° 229/2011 e **IMPONER** a Leonardo Andrés F [REDACTED] (DNI N° 2 [REDACTED] 18), Sebastián Guido L [REDACTED] (DNI N° [REDACTED] 45), Francis Joseph McG [REDACTED] (DNI N° 9 [REDACTED] 3), Lucas I [REDACTED] (DNI N° [REDACTED] 666) y a la Sra. Nuria M [REDACTED] (Pasaporte N° P [REDACTED] 1156), de acuerdo a lo previsto en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246, vigente al momento de los hechos objeto del sumario, una sanción de MULTA de UNA VEZ EL VALOR DE LAS OPERACIONES POR LA SUMA DE PESOS TRECE MIL NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES CON 98/100 (\$ 13.090.683.803,98) por falta de reporte de operaciones sospechosas en infracción a los artículos 20 bis y 21 inciso b) de la Ley N° 25.246, vigente al momento de los hechos objeto del sumario, y artículo 26 incisos b), m) y p) de la Resolución UIF N° 229/2011.

**ARTÍCULO 8°.- IMPONER** a M [REDACTED] I [REDACTED] ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (CUIT N° 30- [REDACTED] 9462-2) la sanción mencionada en los ARTÍCULOS 6° y 7°, de conformidad a lo normado en el inciso 2) del artículo 24 de la Ley N° 25.246, vigente al momento en que los hechos objeto del sumario tuvieron lugar.



**ARTÍCULO 9°.-** Notifíquese e intímese los Sumariados a efectivizar el pago de la multa impuesta en los artículos 6°, 7° y 8°, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda- (<https://erecauda.mecon.gov.ar>), bajo apercibimiento de iniciarse la correspondiente ejecución. En caso de cancelarse la multa deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma clara los sumariados que han efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

**ARTÍCULO 10°.-** Hacer saber a los sumariados que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el plazo de TREINTA (30) días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha de su notificación conforme lo dispuesto en el artículo 25 bis de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.

**ARTÍCULO 11.-** COMUNICAR la medida a la Comisión Nacional de Valores de conformidad con los artículos 31 y 35 de la Resolución UIF N° 111/12.

**ARTÍCULO 12.-** Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

Digitally signed by STARC Paulo  
Date: 2025.09.16 11:21:29 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paulo Starc  
Presidente  
Unidad de Información Financiera



Instancia	Fecha Op.	Fecha Vto.	Especie	Moneda	Tipo Op.	Cantidad	Precio/Tasa	Monto (\$)
Terminal	21/5/2015	27/05/2015	BONARX	ARP	TIV	1.000.000,00	11,6700	11.670.000
Terminal	21/5/2015	27/05/2015	TVPP	ARP	TIC	160.000.000,00	0,0750	12.000.000
Terminal	28/5/2015	29/05/2015	DICP	ARP	TIC	3.160.000,00	3,3700	10.649.200
Terminal	28/5/2015	02/06/2015	RO15D	ARP	TIV	900.000,00	11,7100	10.539.000
Terminal	16/6/2015	19/06/2015	BONARX	ARP	TIC	1.500.000,00	11,8100	17.715.000
Terminal	23/6/2015	26/06/2015	DICP	ARP	TIC	5.200.000,00	3,2500	16.900.000
Terminal	23/6/2015	26/06/2015	RO15D	ARP	TIV	1.000.000,00	12,4830	12.483.000
Terminal	13/7/2015	16/07/2015	RO15D	ARP	TIV	1.000.000,00	13,5000	13.500.000
Terminal	13/7/2015	16/07/2015	AY24D	ARP	TIC	500.000,00	13,1300	6.565.000
Terminal	15/7/2015	20/07/2015	BONARX	ARP	TIV	900.000,00	13,3000	11.970.000
Terminal	20/7/2015	24/07/2015	DICP	ARP	TIV	10.100.000,00	3,1200	31.512.000
Terminal	20/7/2015	24/07/2015	BONARX	ARP	TIC	3.000.000,00	13,5200	40.560.000
Terminal	20/7/2015	24/07/2015	RO15D	ARP	TIV	3.000.000,00	13,6788	41.036.400
Terminal	24/7/2015	31/07/2015	RO15D	ARP	TIV	1.500.000,00	13,3450	20.017.500
Terminal	24/7/2015	29/07/2015	AO16D	ARP	TIC	2.000.000,00	9,9500	19.900.000
Terminal	27/7/2015	31/07/2015	DICP	ARP	TIC	3.000.000,00	3,1300	9.390.000
Terminal	29/7/2015	03/08/2015	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	3,0800	6.160.000
Terminal	30/7/2015	07/08/2015	RO15D	ARP	TIV	1.000.000,00	13,3550	13.355.000
Terminal	30/7/2015	04/08/2015	RO15D	ARP	TIV	470.000,00	13,3500	6.274.500
Terminal	30/7/2015	04/08/2015	RO15D	ARP	TIV	530.000,00	13,3500	7.075.500
Terminal	30/7/2015	04/08/2015	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	10,0900	10.090.000
Terminal	30/7/2015	04/08/2015	AO16D	ARP	TIC	2.000.000,00	10,0800	20.160.000
Terminal	30/7/2015	04/08/2015	BONARX	ARP	TIV	2.250.000,00	12,8900	29.002.500
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	RO15D	ARP	TIC	300.000,00	13,5300	4.059.000
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	10,1500	10.150.000
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	10,1600	10.160.000
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	10,1600	10.160.000
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	BONARX	ARP	TIV	3.000.000,00	13,0400	39.120.000
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	AO16D	ARP	TIC	2.000.000,00	10,1500	20.300.000
Terminal	4/8/2015	07/08/2015	BONARX	ARP	TIV	800.000,00	13,0707	10.456.560
Terminal	5/8/2015	10/08/2015	BONARX	ARP	TIV	1.000.000,00	13,2000	13.200.000
Terminal	5/8/2015	10/08/2015	RO15D	ARP	TIC	500.000,00	13,6000	6.800.000
Terminal	5/8/2015	10/08/2015	RO15D	ARP	TIC	500.000,00	13,6000	6.800.000
Terminal	11/8/2015	14/08/2015	BONARX	ARP	TIV	2.000.000,00	13,3700	26.740.000
Terminal	11/8/2015	14/08/2015	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	12,9250	25.850.000
Terminal	2/9/2015	07/09/2015	BONARX	ARP	TIV	2.000.000,00	13,6750	27.350.000
Terminal	2/9/2015	07/09/2015	DICP	ARP	TIC	8.000.000,00	3,3050	26.440.000
Terminal	16/9/2015	22/09/2015	DICP	ARP	TIC	4.000.000,00	3,6400	14.560.000
Terminal	16/9/2015	22/09/2015	BONARX	ARP	TIV	1.000.000,00	14,3260	14.326.000
Terminal	17/9/2015	22/09/2015	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	3,6000	7.200.000
Terminal	17/9/2015	22/09/2015	BONARX	ARP	TIV	500.000,00	14,2600	7.130.000
Terminal	18/9/2015	23/09/2015	NF18P	ARP	TIV	15.500.000,00	1,3100	20.305.000
Terminal	18/9/2015	30/09/2015	BONARX	ARP	TIV	1.500.000,00	14,3575	21.536.250
Terminal	18/9/2015	23/09/2015	AO16D	ARP	TIC	2.000.000,00	10,8500	21.700.000
Terminal	22/9/2015	25/09/2015	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	3,5100	7.020.000
Terminal	22/9/2015	25/09/2015	BONARX	ARP	TIV	500.000,00	13,3300	6.665.000
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	DICP	ARP	TIC	4.000.000,00	3,4650	13.860.000
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	DICP	ARP	TIC	3.000.000,00	3,4500	10.350.000
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	BONARX	ARP	TIV	2.000.000,00	12,6100	25.220.000
Terminal	24/9/2015	30/09/2015	NF18P	ARP	TIC	5.000.000,00	1,2575	6.287.500
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	DICP	ARP	TIC	3.000.000,00	3,4300	10.290.000
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	DICP	ARP	TIC	4.000.000,00	3,4298	13.719.200
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	DICP	ARP	TIC	4.000.000,00	3,4150	13.660.000
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	BONARX	ARP	TIV	1.000.000,00	12,8900	12.890.000
Terminal	24/9/2015	29/09/2015	BONARX	ARP	TIV	2.000.000,00	12,6000	25.200.000
Terminal	1/10/2015	06/10/2015	DICP	ARP	TIC	100.000,00	3,6400	364.000
Terminal	5/10/2015	08/10/2015	AY24D	ARP	TIC	3.000.000,00	13,5300	40.590.000
Terminal	5/10/2015	08/10/2015	AY16P	ARP	TIV	38.000.000,00	1,0550	40.090.000
Terminal	5/10/2015	08/10/2015	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	14,0000	14.000.000
Terminal	5/10/2015	09/10/2015	AY16P	ARP	TIV	13.000.000,00	1,0546	13.709.150
Terminal	14/10/2015	21/10/2015	AY24D	ARP	TIC	1.600.000,00	13,7800	22.048.000
Terminal	14/10/2015	20/10/2015	AJ17D	ARP	TIV	2.000.000,00	11,0300	22.060.000
Terminal	14/10/2015	20/10/2015	AJ17D	ARP	TIV	1.000.000,00	11,0300	11.030.000
Terminal	14/10/2015	20/10/2015	AY24D	ARP	TIC	2.500.000,00	13,7900	34.475.000
Terminal	14/10/2015	21/10/2015	AJ17D	ARP	TIV	2.000.000,00	11,0450	22.090.000
Terminal	28/10/2015	03/11/2015	AY24D	ARP	TIV	750.000,00	14,9500	11.212.500

Terminal	28/10/2015	03/11/2015	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	4,3100	8.620.000
Terminal	30/10/2015	04/11/2015	AY24D	ARP	TIC	400.000,00	14,4600	5.784.000
Terminal	30/10/2015	04/11/2015	AO16D	ARP	TIV	3.000.000,00	11,6160	34.848.000
Terminal	30/10/2015	04/11/2015	AY24D	ARP	TIC	2.400.000,00	14,4500	34.680.000
Terminal	4/11/2015	10/11/2015	BONARX	ARP	TIV	2.000.000,00	13,7400	27.480.000
Terminal	4/11/2015	10/11/2015	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	14,0500	28.100.000
Terminal	1/12/2015	01/12/2015	BONARX	ARP	TIC	69.600.042,00	14,3500	998.760.603
Terminal	9/12/2015	14/12/2015	AO16D	ARP	TIV	112.000,00	13,2700	1.486.240
Terminal	11/12/2015	16/12/2015	BONARX	ARP	TIC	100.000,00	15,2100	1.521.000
Terminal	18/12/2015	23/12/2015	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	14,3493	28.698.600
Terminal	18/12/2015	23/12/2015	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,3500	14.350.000
Terminal	21/12/2015	28/12/2015	AY24D	ARP	TIC	3.500.000,00	14,2085	49.729.750
Terminal	21/12/2015	28/12/2015	AY16P	ARP	TIV	60.000.000,00	1,0500	63.000.000
Terminal	7/1/2016	12/01/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,6000	29.200.000
Terminal	8/1/2016	13/01/2016	AM17	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0226	5.112.750
Terminal	8/1/2016	14/01/2016	AM17	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0231	5.115.250
Terminal	8/1/2016	13/01/2016	AF17D	ARP	TIV	4.000.000,00	12,8007	51.202.800
Terminal	11/1/2016	12/01/2016	H10F6	ARP	TIV	1.000.000,00	0,9784	978.390
Terminal	11/1/2016	12/01/2016	AY16P	ARP	TIC	1.000.000,00	1,0500	1.050.000
Terminal	11/1/2016	14/01/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,2500	13.250.000
Terminal	11/1/2016	14/01/2016	BONARX	ARP	TIV	1.000.000,00	14,6500	14.650.000
Terminal	11/1/2016	14/01/2016	AY16P	ARP	TIC	2.000.000,00	1,0525	2.105.000
Terminal	12/1/2016	15/01/2016	AF17D	ARP	TIC	5.000.000,00	12,6500	63.250.000
Terminal	12/1/2016	15/01/2016	AO16D	ARP	TIV	5.000.000,00	12,9700	64.850.000
Terminal	12/1/2016	20/01/2016	AO16D	ARP	TIV	2.000.000,00	12,9700	25.940.000
Terminal	12/1/2016	15/01/2016	AF17D	ARP	TIC	2.000.000,00	12,6500	25.300.000
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	AY16P	ARP	TIC	3.000.000,00	1,0510	3.152.850
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	AO16D	ARP	TIC	3.000.000,00	13,0700	39.210.000
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	BONARX	ARP	TIV	2.750.000,00	14,0600	38.665.000
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,1000	13.100.000
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	BONARX	ARP	TIV	1.000.000,00	14,0600	14.060.000
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,1000	13.100.000
Terminal	13/1/2016	20/01/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,0800	13.080.000
Terminal	13/1/2016	18/01/2016	AS17D	ARP	TIV	2.000.000,00	12,0000	24.000.000
Terminal	14/1/2016	20/01/2016	BONARX	ARP	TIV	1.800.000,00	13,9750	25.155.000
Terminal	14/1/2016	20/01/2016	AF17D	ARP	TIC	2.000.000,00	12,5700	25.140.000
Terminal	14/1/2016	15/01/2016	AY16P	ARP	TIV	12.000.000,00	1,0500	12.600.000
Terminal	14/1/2016	20/01/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	12,9040	12.904.000
Terminal	15/1/2016	18/01/2016	H10F6	ARP	TIC	1.000.000,00	0,9794	979.354
Terminal	15/1/2016	18/01/2016	AM17	ARP	TIV	1.000.000,00	1,0200	1.020.000
Terminal	19/1/2016	22/01/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	14,4900	28.980.000
Terminal	19/1/2016	22/01/2016	AY16P	ARP	TIV	16.200.000,00	1,0500	17.010.000
Terminal	20/1/2016	25/01/2016	NF18P	ARP	TIV	11.450.000,00	1,2700	14.541.500
Terminal	20/1/2016	25/01/2016	AY16P	ARP	TIV	13.000.000,00	1,0485	13.630.500
Terminal	20/1/2016	25/01/2016	AJ17D	ARP	TIV	2.000.000,00	12,2400	24.480.000
Terminal	20/1/2016	25/01/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	14,3700	28.740.000
Terminal	21/1/2016	26/01/2016	AO20D	ARP	TIC	1.100.000,00	14,3000	15.730.000
Terminal	21/1/2016	26/01/2016	DICP	ARP	TIC	3.000.000,00	5,0300	15.090.000
Terminal	21/1/2016	26/01/2016	AJ17D	ARP	TIV	2.700.000,00	12,2900	33.183.000
Terminal	22/1/2016	27/01/2016	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	5,0500	10.100.000
Terminal	22/1/2016	27/01/2016	DICP	ARP	TIC	3.000.000,00	5,0700	15.210.000
Terminal	22/1/2016	28/01/2016	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	5,0400	10.080.000
Terminal	25/1/2016	29/01/2016	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	5,0875	10.175.000
Terminal	25/1/2016	28/01/2016	AM17	ARP	TIV	39.000.000,00	1,0120	39.468.000
Terminal	25/1/2016	28/01/2016	AY16P	ARP	TIC	16.000.000,00	1,0545	16.872.000
Terminal	22/1/2016	27/01/2016	AS17D	ARP	TIV	2.000.000,00	12,1500	24.300.000
Terminal	25/1/2016	28/01/2016	BONARX	ARP	TIC	1.600.000,00	14,3675	22.988.000
Terminal	25/1/2016	28/01/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,3910	28.782.000
Terminal	25/1/2016	28/01/2016	AS16P	ARP	TIV	20.000.000,00	1,0192	20.384.000
Terminal	22/1/2016	28/01/2016	AS17D	ARP	TIV	2.000.000,00	12,1500	24.300.000
Terminal	26/1/2016	29/01/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,3500	28.700.000
Terminal	26/1/2016	01/02/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,3500	28.700.000
Terminal	27/1/2016	01/02/2016	BONARX	ARP	TIC	1.500.000,00	14,4775	21.716.250
Terminal	27/1/2016	01/02/2016	BONARX	ARP	TIC	1.500.000,00	14,4790	21.718.500
Terminal	27/1/2016	01/02/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,4790	28.958.000
Terminal	27/1/2016	01/02/2016	AO17P	ARP	TIV	47.000.000,00	1,0200	47.940.000
Terminal	27/1/2016	01/02/2016	A2S6P	ARP	TIV	45.000.000,00	1,0275	46.215.000

Terminal	28/1/2016	02/02/2016	AO17P	ARP	TIC	8.000.000,00	1,0235	8.188.000
Terminal	28/1/2016	04/02/2016	A2S6P	ARP	TIV	20.000.000,00	1,0250	20.500.000
Terminal	28/1/2016	02/02/2016	A2S6P	ARP	TIV	10.000.000,00	1,0245	10.245.000
Terminal	28/1/2016	02/02/2016	A2S6P	ARP	TIV	25.000.000,00	1,0250	25.625.000
Terminal	28/1/2016	02/02/2016	AY16P	ARP	TIC	10.000.000,00	1,0575	10.575.000
Terminal	1/2/2016	05/02/2016	AF17D	ARP	TIV	2.000.000,00	13,0200	26.040.000
Terminal	1/2/2016	05/02/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,3600	30.720.000
Terminal	1/2/2016	04/02/2016	AO16D	ARP	TIV	2.000.000,00	13,5300	27.060.000
Terminal	1/2/2016	04/02/2016	AF17D	ARP	TIV	500.000,00	13,0300	6.515.000
Terminal	1/2/2016	04/02/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,3600	30.720.000
Terminal	3/2/2016	10/02/2016	AF17D	ARP	TIV	3.000.000,00	13,1250	39.375.000
Terminal	3/2/2016	10/02/2016	AF17D	ARP	TIV	1.500.000,00	13,1150	19.672.500
Terminal	3/2/2016	10/02/2016	AF17D	ARP	TIV	500.000,00	13,1050	6.552.500
Terminal	3/2/2016	10/02/2016	AY24D	ARP	TIC	3.000.000,00	15,4000	46.200.000
Terminal	3/2/2016	10/02/2016	AO20D	ARP	TIC	1.500.000,00	15,0800	22.620.000
Terminal	4/2/2016	11/02/2016	AO17P	ARP	TIV	42.000.000,00	1,0300	43.260.000
Terminal	4/2/2016	11/02/2016	AY24D	ARP	TIC	3.000.000,00	15,5350	46.605.000
Terminal	4/2/2016	11/02/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	15,5350	15.535.000
Terminal	4/2/2016	11/02/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,5800	31.160.000
Terminal	4/2/2016	11/02/2016	AM17	ARP	TIV	59.000.000,00	1,0285	60.681.500
Terminal	5/2/2016	15/02/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,8500	13.850.000
Terminal	16/2/2016	17/02/2016	AM17	ARP	TIV	16.000.000,00	1,0340	16.544.000
Terminal	16/2/2016	17/02/2016	AY16P	ARP	TIC	16.000.000,00	1,0020	16.032.000
Terminal	17/2/2016	22/02/2016	DICP	ARP	TIC	1.000.000,00	5,4150	5.415.000
Terminal	17/2/2016	22/02/2016	AJ17D	ARP	TIV	1.120.000,00	13,5000	15.120.000
Terminal	18/2/2016	19/02/2016	AY16P	ARP	TIC	12.400.000,00	1,0020	12.424.800
Terminal	18/2/2016	19/02/2016	AO17P	ARP	TIV	12.000.000,00	1,0360	12.432.000
Terminal	18/2/2016	23/02/2016	AO16D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,3300	14.330.000
Terminal	18/2/2016	23/02/2016	AO16D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,3100	14.310.000
Terminal	18/2/2016	23/02/2016	AF17D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,8600	13.860.000
Terminal	18/2/2016	23/02/2016	AJ17D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,5300	13.530.000
Terminal	19/2/2016	24/02/2016	AO16D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,3200	14.320.000
Terminal	19/2/2016	24/02/2016	AJ17D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,5400	13.540.000
Terminal	22/2/2016	25/02/2016	DICP	ARP	TIC	1.000.000,00	5,4700	5.470.000
Terminal	22/2/2016	25/02/2016	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	5,4700	10.940.000
Terminal	22/2/2016	25/02/2016	AM17	ARP	TIV	20.000.000,00	1,0380	20.760.000
Terminal	23/2/2016	24/02/2016	AS16P	ARP	TIC	2.000.000,00	1,0400	2.080.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AJ17D	ARP	TIV	3.000.000,00	13,6500	40.950.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AO16D	ARP	TIC	3.000.000,00	14,6500	43.950.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AJ17D	ARP	TIV	3.000.000,00	13,6500	40.950.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AJ17D	ARP	TIV	1.000.000,00	13,6500	13.650.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,7700	16.770.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	BONARX	ARP	TIC	3.000.000,00	16,0300	48.090.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AF17D	ARP	TIV	1.500.000,00	14,0700	21.105.000
Terminal	23/2/2016	26/02/2016	AO16D	ARP	TIC	1.500.000,00	14,6000	21.900.000
Terminal	29/2/2016	03/03/2016	AM17	ARP	TIC	20.000.000,00	1,0420	20.840.000
Terminal	29/2/2016	03/03/2016	AO17P	ARP	TIV	42.000.000,00	1,0430	43.806.000
Terminal	29/2/2016	03/03/2016	AJ17D	ARP	TIC	300.000,00	14,1500	4.245.000
Terminal	29/2/2016	03/03/2016	AS16P	ARP	TIC	4.800.000,00	1,0430	5.006.400
Terminal	1/3/2016	04/03/2016	AY24D	ARP	TIC	4.000.000,00	17,3100	69.240.000
Terminal	1/3/2016	04/03/2016	AM17	ARP	TIV	20.000.000,00	1,0410	20.820.000
Terminal	1/3/2016	04/03/2016	AM17	ARP	TIV	20.000.000,00	1,0410	20.820.000
Terminal	1/3/2016	04/03/2016	AM17	ARP	TIV	25.000.000,00	1,0410	26.025.000
Terminal	2/3/2016	07/03/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,9500	16.950.000
Terminal	2/3/2016	07/03/2016	AO17P	ARP	TIV	15.000.000,00	1,0405	15.607.500
Terminal	2/3/2016	07/03/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	16,2600	16.260.000
Terminal	3/3/2016	08/03/2016	AO17P	ARP	TIV	10.000.000,00	1,0411	10.410.500
Terminal	3/3/2016	08/03/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,7100	16.710.000
Terminal	3/3/2016	08/03/2016	AF17D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,1000	14.100.000
Terminal	3/3/2016	08/03/2016	AF17D	ARP	TIV	1.000.000,00	13,9900	13.990.000
Terminal	3/3/2016	08/03/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,5500	16.550.000
Terminal	3/3/2016	08/03/2016	AO17P	ARP	TIV	3.500.000,00	1,0456	3.659.425
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,6000	16.600.000
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AO17P	ARP	TIV	1.500.000,00	1,0485	1.572.750
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,5300	16.530.000
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AF17D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,0000	14.000.000
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AF17D	ARP	TIV	400.000,00	15,9400	5.576.000

Terminal	4/3/2016	10/03/2016	AF17D	ARP	TIV	100.000,00	13,9000	1.390.000
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AF17D	ARP	TIV	1.500.000,00	13,9200	20.880.000
Terminal	4/3/2016	09/03/2016	AO16D	ARP	TIV	1.500.000,00	14,3500	21.525.000
Terminal	11/3/2016	16/03/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	15,7900	15.790.000
Terminal	11/3/2016	16/03/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	15,8300	15.830.000
Terminal	11/3/2016	16/03/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	15,7600	15.760.000
Terminal	11/3/2016	16/03/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	15,7500	31.500.000
Terminal	11/3/2016	16/03/2016	H13A6	ARP	TIV	11.000.000,00	0,9717	10.688.425
Terminal	11/3/2016	16/03/2016	AY16P	ARP	TIV	65.000.000,00	1,0200	66.300.000
Terminal	14/3/2016	16/03/2016	H13A6	ARP	TIV	46.000.000,00	0,9720	44.713.702
Terminal	14/3/2016	16/03/2016	AY16P	ARP	TIC	45.000.000,00	1,0165	45.742.500
Terminal	15/3/2016	18/03/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	15,2100	30.420.000
Terminal	15/3/2016	18/03/2016	BONARX	ARP	TIC	1.500.000,00	15,2100	22.815.000
Terminal	15/3/2016	18/03/2016	AM17	ARP	TIV	50.000.000,00	1,0620	53.100.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	BONARX	ARP	TIC	3.000.000,00	15,1600	45.480.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,6850	31.370.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,6975	31.395.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AM17	ARP	TIV	60.000.000,00	1,0635	63.810.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AM17	ARP	TIV	6.796.548,00	1,0650	7.238.324
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AM17	ARP	TIV	10.000.000,00	1,0626	10.625.500
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AM17	ARP	TIV	26.000.000,00	1,0655	27.703.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AO17P	ARP	TIV	4.000.000,00	1,0650	4.260.000
Terminal	16/3/2016	21/03/2016	AJ17D	ARP	TIV	300.000,00	13,2500	3.975.000
Terminal	17/3/2016	22/03/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,8125	31.625.000
Terminal	17/3/2016	22/03/2016	AO17P	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0676	5.337.750
Terminal	17/3/2016	22/03/2016	AO17P	ARP	TIV	11.000.000,00	1,0680	11.748.000
Terminal	17/3/2016	22/03/2016	AO16D	ARP	TIV	600.000,00	14,1500	8.490.000
Terminal	18/3/2016	23/03/2016	AS16P	ARP	TIV	35.000.000,00	1,0551	36.926.750
Terminal	18/3/2016	23/03/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	15,4250	30.850.000
Terminal	21/3/2016	22/03/2016	AS16P	ARP	TIV	3.000.000,00	1,0550	3.165.000
Terminal	21/3/2016	28/03/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	15,8200	15.820.000
Terminal	21/3/2016	22/03/2016	AY16P	ARP	TIC	2.000.000,00	1,0300	2.060.000
Terminal	22/3/2016	29/03/2016	AD16D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,5200	14.520.000
Terminal	23/3/2016	30/03/2016	AM17	ARP	TIC	26.000.000,00	0,9975	25.935.000
Terminal	28/3/2016	30/03/2016	AY16P	ARP	TIV	25.000.000,00	1,0350	25.875.000
Terminal	28/3/2016	31/03/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,1950	14.195.000
Terminal	29/3/2016	01/04/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,3000	14.300.000
Terminal	29/3/2016	01/04/2016	AM17	ARP	TIV	10.000.000,00	0,9976	9.975.500
Terminal	29/3/2016	01/04/2016	H20A6	ARP	TIC	20.000.000,00	0,9782	19.563.720
Terminal	29/3/2016	01/04/2016	A256P	ARP	TIV	30.000.000,00	1,0100	30.300.000
Terminal	30/3/2016	04/04/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,1000	14.100.000
Terminal	30/3/2016	04/04/2016	AS17D	ARP	TIV	1.000.000,00	12,9700	12.970.000
Terminal	30/3/2016	04/04/2016	AS17D	ARP	TIV	1.000.000,00	12,9500	12.950.000
Terminal	30/3/2016	04/04/2016	AO16D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,1000	14.100.000
Terminal	30/3/2016	04/04/2016	AO16D	ARP	TIC	500.000,00	14,1100	7.055.000
Terminal	1/4/2016	07/04/2016	TVPY	ARP	TIC	20.000.000,00	1,4500	28.999.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	AM17	ARP	TIV	12.000.000,00	1,0025	12.030.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	15,2810	30.562.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	AM17	ARP	TIV	3.000.000,00	1,0035	3.010.500
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	15,4000	30.800.000
Terminal	1/4/2016	04/04/2016	AY16P	ARP	TIV	3.750.000,00	1,0400	3.900.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	AM17	ARP	TIV	8.000.000,00	1,0050	8.040.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	AM17	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0050	5.025.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	AM17	ARP	TIV	7.000.000,00	1,0050	7.035.000
Terminal	4/4/2016	07/04/2016	AM17	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0050	5.025.000
Terminal	1/4/2016	06/04/2016	AM17	ARP	TIV	35.000.000,00	1,0040	35.140.000
Terminal	1/4/2016	07/04/2016	AM17	ARP	TIV	25.000.000,00	1,0050	25.125.000
Terminal	5/4/2016	08/04/2016	AO17P	ARP	TIV	19.000.000,00	1,0775	20.472.500
Terminal	5/4/2016	08/04/2016	AO17P	ARP	TIV	11.000.000,00	1,0775	11.852.500
Terminal	5/4/2016	08/04/2016	AM18D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,1200	13.120.000
Terminal	5/4/2016	08/04/2016	AS17D	ARP	TIC	2.000.000,00	13,2000	26.400.000
Terminal	5/4/2016	08/04/2016	AS16P	ARP	TIV	10.000.000,00	0,9990	9.990.000
Terminal	7/4/2016	12/04/2016	AS17D	ARP	TIV	2.000.000,00	13,0000	26.000.000
Terminal	7/4/2016	12/04/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	15,7800	15.780.000
Terminal	7/4/2016	12/04/2016	AY24D	ARP	TIC	3.000.000,00	15,8000	47.400.000
Terminal	7/4/2016	12/04/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	15,3400	30.680.000
Terminal	7/4/2016	12/04/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,7900	31.580.000

Terminal	8/4/2016	13/04/2016	BONARX	ARP	TIC	4.000.000,00	15,2700	61.080.000,00
Terminal	8/4/2016	13/04/2016	AO17P	ARP	TIV	50.000.000,00	1,0061	50.302.500
Terminal	8/4/2016	15/04/2016	AO17P	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0050	5.025.000
Terminal	8/4/2016	15/04/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	15,2900	15.290.000
Terminal	11/4/2016	12/04/2016	H18Y6	ARP	TIV	15.000.000,00	0,9641	14.461.560
Terminal	11/4/2016	15/04/2016	AM18D	ARP	TIV	1.000.000,00	13,0000	13.000.000
Terminal	12/4/2016	13/04/2016	AY16P	ARP	TIV	78.000.000,00	1,0450	81.510.000
Terminal	8/4/2016	13/04/2016	AO17P	ARP	TIV	25.000.000,00	1,0060	25.150.000
Terminal	13/4/2016	18/04/2016	AO16D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,0100	14.010.000
Terminal	13/4/2016	18/04/2016	AM18D	ARP	TIV	1.000.000,00	12,8600	12.860.000
Terminal	13/4/2016	18/04/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,6500	29.300.000
Terminal	14/4/2016	20/04/2016	H18Y6	ARP	TIV	8.000.000,00	0,9711	7.768.544
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	14,7300	14.730.000
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	BONARX	ARP	TIC	3.000.000,00	14,6775	44.032.500
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	AY16P	ARP	TIV	23.000.000,00	1,0500	24.150.000
Terminal	14/4/2016	20/04/2016	H18Y6	ARP	TIV	60.000.000,00	0,9711	58.264.080
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	14,6400	14.640.000
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	15,9625	31.925.000
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	TVPE	ARP	TIC	10.000.000,00	1,6595	16.595.000
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	BONARX	ARP	TIC	1.000.000,00	14,6000	14.600.000
Terminal	15/4/2016	15/04/2016	AY16P	ARP	TIC	5.000.000,00	1,0500	5.250.000
Terminal	15/4/2016	15/04/2016	AO17P	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0000	5.000.000
Terminal	14/4/2016	19/04/2016	AY24D	ARP	TIC	500.000,00	15,9900	7.995.000
Terminal	15/4/2016	20/04/2016	H15J6	ARP	TIV	15.000.000,00	0,9504	14.256.330
Terminal	15/4/2016	20/04/2016	TVPE	ARP	TIC	25.000.000,00	1,6499	41.247.500
Terminal	15/4/2016	20/04/2016	TVPE	ARP	TIC	25.000.000,00	1,6499	41.247.500
Terminal	18/4/2016	21/04/2016	DICP	ARP	TIC	250.000,00	5,1400	1.285.000
Terminal	19/4/2016	21/04/2016	H26Y6	ARP	TIV	132.000.000,00	0,9648	127.352.544
Terminal	19/4/2016	22/04/2016	H26Y6	ARP	TIV	43.500.000,00	0,9667	42.050.711
Terminal	19/4/2016	25/04/2016	H26Y6	ARP	TIV	30.000.000,00	0,9667	29.000.490
Terminal	19/4/2016	22/04/2016	AY24D	ARP	TIC	5.000.000,00	15,8400	79.200.000
Terminal	19/4/2016	22/04/2016	AO17P	ARP	TIV	5.500.000,00	1,0050	5.527.500
Terminal	19/4/2016	22/04/2016	AM17	ARP	TIV	25.000.000,00	1,0050	25.125.000
Terminal	19/4/2016	22/04/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	16,0300	32.060.000
Terminal	19/4/2016	22/04/2016	AY24D	ARP	TIC	1.500.000,00	15,9950	23.992.500
Terminal	20/4/2016	27/04/2016	TVPE	ARP	TIC	50.000.000,00	1,6649	83.245.000
Terminal	20/4/2016	27/04/2016	AM17	ARP	TIV	35.000.000,00	1,0075	35.262.500
Terminal	21/4/2016	22/04/2016	H13L6	ARP	TIV	22.000.000,00	0,9310	20.481.560
Terminal	21/4/2016	26/04/2016	H16N6	ARP	TIV	30.000.000,00	0,8499	25.495.950
Terminal	20/4/2016	26/04/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	16,1400	32.280.000
Terminal	21/4/2016	27/04/2016	TVPE	ARP	TIC	25.000.000,00	1,6924	42.310.000
Terminal	21/4/2016	27/04/2016	TVPE	ARP	TIC	25.000.000,00	1,6949	42.372.500
Terminal	21/4/2016	27/04/2016	AM17	ARP	TIV	50.000.000,00	1,0085	50.425.000
Terminal	21/4/2016	26/04/2016	H27A6	ARP	TIC	80.000.000,00	0,9948	79.583.040
Terminal	21/4/2016	26/04/2016	AO17P	ARP	TIV	14.500.000,00	1,0125	14.681.250
Terminal	22/4/2016	27/04/2016	AO17P	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0110	5.055.000
Terminal	21/4/2016	27/04/2016	BONARX	ARP	TIV	3.000.000,00	14,6915	44.074.500
Terminal	22/4/2016	25/04/2016	H26Y6	ARP	TIC	30.000.000,00	0,9687	29.062.080
Terminal	22/4/2016	26/04/2016	H28D6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,8243	41.214.550
Terminal	22/4/2016	25/04/2016	H21D6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,8284	41.420.800
Terminal	22/4/2016	27/04/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,7475	29.495.000
Terminal	22/4/2016	27/04/2016	BONARX	ARP	TIC	2.000.000,00	14,7475	29.495.000
Terminal	22/4/2016	27/04/2016	H13L6	ARP	TIV	36.000.000,00	0,9338	33.617.088
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AM18D	ARP	TIC	2.000.000,00	13,1500	26.300.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AM18D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,1000	13.100.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,2200	16.220.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	16,2650	32.530.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AM17	ARP	TIV	10.000.000,00	1,0125	10.125.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AO17P	ARP	TIV	30.000.000,00	1,0100	30.300.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AM17	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0110	5.055.000
Terminal	25/4/2016	28/04/2016	AM17	ARP	TIV	15.000.000,00	1,0125	15.187.500
Terminal	26/4/2016	02/05/2016	H08J6	ARP	TIV	4.000.000,00	0,9636	3.854.276
Terminal	26/4/2016	29/04/2016	DICP	ARP	TIC	2.000.000,00	5,1100	10.220.000
Terminal	27/4/2016	29/04/2016	H04E7	ARP	TIV	75.000.000,00	0,8261	61.954.050
Terminal	27/4/2016	02/05/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,1750	16.175.000
Terminal	27/4/2016	02/05/2016	AY24D	ARP	TIC	1.000.000,00	16,1850	16.185.000
Terminal	27/4/2016	02/05/2016	AY24D	ARP	TIC	2.000.000,00	16,1750	32.350.000

Terminal	27/4/2016	02/05/2016	AM17	ARP	TIV	60.000.000,00	1,0160	60.961.200
Terminal	29/4/2016	04/05/2016	AO17P	ARP	TIV	19.000.000,00	1,0200	19.380.000
Terminal	29/4/2016	02/05/2016	AL16	ARP	TIC	32.500.000,00	1,0290	33.442.500
Terminal	29/4/2016	04/05/2016	AS16P	ARP	TIC	10.000.000,00	1,0235	10.235.000
Terminal	29/4/2016	04/05/2016	DICP	ARP	TIV	1.500.000,00	5,1450	7.717.500
Terminal	29/4/2016	02/05/2016	H28D6	ARP	TIV	20.000.000,00	0,8399	16.797.060
Terminal	29/4/2016	04/05/2016	AO17P	ARP	TIV	30.000.000,00	1,0150	30.450.000
Terminal	2/5/2016	05/05/2016	AY16P	ARP	TIC	13.000.000,00	1,0660	13.858.000
Terminal	2/5/2016	05/05/2016	AO17P	ARP	TIV	11.500.000,00	1,0220	11.753.000
Terminal	3/5/2016	05/05/2016	H26Y6	ARP	TIC	2.000.000,00	0,9779	1.955.794
Terminal	3/5/2016	04/05/2016	AY16P	ARP	TIC	50.000.000,00	1,0660	53.300.000
Terminal	3/5/2016	04/05/2016	H16N6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,8613	43.062.750
Terminal	3/5/2016	06/05/2016	AY16P	ARP	TIC	40.000.000,00	1,0660	42.640.000
Terminal	3/5/2016	04/05/2016	H18Y6	ARP	TIC	2.500.000,00	0,9858	2.464.550
Terminal	3/5/2016	06/05/2016	AM18D	ARP	TIV	446.404,00	13,0600	5.830.036
Terminal	3/5/2016	06/05/2016	PR15	ARP	TIV	20.000.000,00	1,6350	32.700.000
Terminal	5/5/2016	06/05/2016	H11E7	ARP	TIV	50.000.000,00	0,8290	41.449.000
Terminal	5/5/2016	05/05/2016	H06L6	ARP	TIV	30.000.000,00	0,9439	28.316.520
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	H08J6	ARP	TIV	100.000.000,00	0,9718	97.181.700
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	AS17D	ARP	TIC	3.000.000,00	13,0500	39.150.000
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	AS17D	ARP	TIC	4.000.000,00	13,0750	52.300.000
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	H06L6	ARP	TIV	21.000.000,00	0,9489	19.926.438
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	DICA	ARP	TIC	2.000.000,00	21,3900	42.780.000
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	H08J6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,9718	48.590.850
Terminal	5/5/2016	10/05/2016	AM17	ARP	TIV	50.000.000,00	1,0280	51.400.000
Terminal	6/5/2016	11/05/2016	H10G6	ARP	TIV	75.000.000,00	0,9261	69.458.550
Terminal	6/5/2016	11/05/2016	DICA	ARP	TIC	4.000.000,00	21,2500	85.000.000
Terminal	6/5/2016	11/05/2016	H11E7	ARP	TIV	60.000.000,00	0,8324	49.942.980
Terminal	6/5/2016	11/05/2016	H11E7	ARP	TIV	50.000.000,00	0,8324	41.619.150
Terminal	9/5/2016	12/05/2016	AS17D	ARP	TIC	3.000.000,00	13,0500	39.150.000
Terminal	9/5/2016	16/05/2016	DICY	ARP	TIC	500.000,00	21,4200	10.710.000
Terminal	9/5/2016	12/05/2016	H18Y6	ARP	TIC	57.500.000,00	0,9939	57.150.055
Terminal	9/5/2016	10/05/2016	H26Y6	ARP	TIC	55.000.000,00	0,9841	54.126.875
Terminal	9/5/2016	12/05/2016	H15J6	ARP	TIV	59.000.000,00	0,9671	57.059.962
Terminal	9/5/2016	12/05/2016	H11E7	ARP	TIV	100.000.000,00	0,8330	83.295.300
Terminal	9/5/2016	13/05/2016	AA26D	ARP	TIC	1.600.000,00	14,5042	23.206.720
Terminal	10/5/2016	10/05/2016	AS17D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,0500	13.050.000
Terminal	10/5/2016	10/05/2016	AS17D	ARP	TIC	2.000.000,00	13,0500	26.100.000
Terminal	10/5/2016	11/05/2016	AS17D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,0500	13.050.000
Terminal	10/5/2016	11/05/2016	AJ17D	ARP	TIC	3.000.000,00	13,2500	39.750.000
Terminal	10/5/2016	16/05/2016	DICY	ARP	TIC	1.000.000,00	21,3000	21.300.000
Terminal	10/5/2016	16/05/2016	DICY	ARP	TIC	1.000.000,00	21,3400	21.340.000
Terminal	10/5/2016	12/05/2016	AJ17D	ARP	TIC	1.000.000,00	13,2500	13.250.000
Terminal	10/5/2016	13/05/2016	H15J6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,9681	48.402.700
Terminal	10/5/2016	12/05/2016	AA26D	ARP	TIC	1.000.000,00	14,5200	14.520.000
Terminal	10/5/2016	13/05/2016	AA26D	ARP	TIV	1.000.000,00	14,5200	14.520.000
Terminal	10/5/2016	13/05/2016	TVPP	ARP	TIC	50.000.000,00	0,0950	4.750.000
Terminal	10/5/2016	13/05/2016	TVPP	ARP	TIC	50.000.000,00	0,0950	4.750.000
Terminal	11/5/2016	13/05/2016	H01J6	ARP	TIC	113.000.000,00	0,9800	110.739.661
Terminal	11/5/2016	16/05/2016	H15J6	ARP	TIV	80.000.000,00	0,9709	77.669.920
Terminal	11/5/2016	16/05/2016	AD16D	ARP	TIC	8.000.000,00	14,5500	116.400.000
Terminal	11/5/2016	16/05/2016	H17G6	ARP	TIV	100.000.000,00	0,9246	92.461.200
Terminal	11/5/2016	16/05/2016	H18E7	ARP	TIV	50.000.000,00	0,8336	41.679.500
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	H17G6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,9254	46.268.150
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	H17G6	ARP	TIV	2.800.000,00	0,9254	2.591.016
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	H04E7	ARP	TIV	1.400.000,00	0,8432	1.180.521
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	DICY	ARP	TIC	3.860.000,00	21,2460	82.009.560
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	DICY	ARP	TIC	2.000.000,00	21,2900	42.580.000
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	DICY	ARP	TIC	1.000.000,00	21,2800	21.280.000
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	H15J6	ARP	TIV	54.415.256,00	0,9718	52.881.671
Terminal	12/5/2016	17/05/2016	AD16D	ARP	TIC	3.000.000,00	14,5750	43.725.000
Terminal	13/5/2016	16/05/2016	AJ17D	ARP	TIC	3.700.000,00	13,1000	48.470.000
Terminal	13/5/2016	18/05/2016	DICP	ARP	TIV	5.000.000,00	5,2500	26.250.000
Terminal	13/5/2016	18/05/2016	DICP	ARP	TIV	5.000.000,00	5,2100	26.050.000
Terminal	13/5/2016	18/05/2016	H03G6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,9368	46.838.100
Terminal	13/5/2016	18/05/2016	H03G6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,9368	46.838.100
Terminal	13/5/2016	16/05/2016	H05O6	ARP	TIV	1.300.000,00	0,9965	1.294.599



Terminal	13/5/2016	16/05/2016	H23N6	ARP	TIV	8.000.000,00	0,8653	6.922.344
Liquidacion	16/5/2016	19/05/2016	H15J6	ARP	TIV	15.000.000,00	0,9741	14.610.915
Liquidacion	16/5/2016	19/05/2016	DICA	ARP	TIC	1.000.000,00	21,7400	21.740.000
Liquidacion	17/5/2016	20/05/2016	H22J6	ARP	TIV	50.000.000,00	0,9680	48.398.450
Liquidacion	17/5/2016	20/05/2016	H17G6	ARP	TIV	30.000.000,00	0,9261	27.784.470
Liquidacion	17/5/2016	20/05/2016	H22J6	ARP	TIV	17.000.000,00	0,9681	16.456.918
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	DICY	ARP	TIC	2.000.000,00	21,8450	43.690.000
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	AO17P	ARP	TIV	20.000.000,00	1,0300	20.600.000
Liquidacion	18/5/2016	19/05/2016	H20L6	ARP	TIV	75.000.000,00	0,9484	71.133.450
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	DICY	ARP	TIC	2.000.000,00	21,8250	43.650.000
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	AO17P	ARP	TIV	5.000.000,00	1,0300	5.150.000
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	H04E7	ARP	TIV	115.000.000,00	0,8478	97.493.895
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	DICA	ARP	TIC	1.000.000,00	21,8525	21.852.500
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	H01J6	ARP	TIC	31.240.000,00	0,9910	30.959.465
Liquidacion	18/5/2016	23/05/2016	DICA	ARP	TIC	2.000.000,00	21,8400	43.680.000
Liquidacion	18/5/2016	19/05/2016	H26Y6	ARP	TIC	75.000.000,00	0,9931	74.485.725
Liquidacion	18/5/2016	19/05/2016	H08J6	ARP	TIC	105.989.694,00	0,9807	103.939.429
Liquidacion	19/5/2016	19/05/2016	AO17P	ARP	TIV	150.000.000,00	1,0280	154.200.000
TOTAL OPERADO PESOS								11.749.452.494

Fecha Op.	Fecha Vto.	Especie	Moneda	Tipo Op.	Cantidad	Precio/Tasa	Monto (usd)	tdc a la fecha	Monto (\$)
19/5/2015	20/05/2015	DICP	USD	TIC	10.340.000,00	0,2902	3.000.668	8,86	26.585.918
14/10/2015	15/10/2015	AY16P	USD	TIC	38.000.000,00	0,0768	2.918.400	9,39	27.389.184
15/10/2015	15/10/2015	AY16P	USD	TIC	13.000.000,00	0,0768	998.400	9,39	9.374.976
7/1/2016	11/02/2016	AY16P	USD	TIC	13.600.000,00	0,0735	1.000.008	13,60	13.600.109
8/1/2016	11/01/2016	AY16P	USD	TIC	27.200.000,00	0,0735	2.000.016	13,60	27.200.218
18/2/2016	18/02/2016	AS16P	USD	TIC	13.200.000,00	0,0682	900.240	14,80	13.323.552
1/3/2016	01/03/2016	AO16D	USD	TIC	2.100.000,00	0,9500	1.995.000	15,55	31.022.250
21/3/2016	22/03/2016	AS16P	USD	TIV	62.000.000,00	0,0726	4.500.580	14,70	66.158.526
1/4/2016	04/04/2016	AY16P	USD	TIV	14.250.000,00	0,0702	1.000.065	14,90	14.900.969
6/4/2016	07/04/2016	H13L6	USD	TIV	31.000.000,00	0,0630	1.951.450	14,80	28.881.460
8/4/2016	11/04/2016	H08J6	USD	TIV	75.000.000,00	0,0656	4.917.750	14,60	71.799.150
11/4/2016	12/04/2016	H13L6	USD	TIV	78.000.000,00	0,0637	4.970.940	14,60	72.575.724
12/4/2016	13/04/2016	H18Y6	USD	TIV	23.000.000,00	0,0663	1.525.820	14,70	22.429.554
12/4/2016	13/04/2016	H26Y6	USD	TIV	86.665.000,00	0,0659	5.709.490	14,70	83.929.506
13/4/2016	13/04/2016	H20L6	USD	TIV	95.000.000,00	0,0634	6.020.150	14,60	87.894.190
20/4/2016	21/04/2016	H28D6	USD	TIV	100.000.000,00	0,0573	5.732.000	14,50	83.114.000
20/4/2016	21/04/2016	H14D6	USD	TIV	100.000.000,00	0,0580	5.798.000	14,50	84.071.000
21/4/2016	22/04/2016	H28D6	USD	TIV	50.000.000,00	0,0573	2.865.000	14,50	41.542.500
21/4/2016	22/04/2016	H14D6	USD	TIV	150.000.000,00	0,0578	8.668.500	14,50	125.693.250
22/4/2016	27/04/2016	H13L6	USD	TIV	64.000.000,00	0,0651	4.164.480	14,60	60.801.408
27/4/2016	27/04/2016	H01J6	USD	TIV	113.000.000,00	0,0678	7.656.880	14,40	110.259.072
27/4/2016	27/04/2016	H29J6	USD	TIV	75.000.000,00	0,0662	4.963.500	14,40	71.474.400
29/4/2016	29/04/2016	AL16	USD	TIV	27.500.000,00	0,0728	2.002.000	14,50	29.029.000
13/5/2016	16/05/2016	H18E7	USD	TIV	100.000.000,00	0,0588	5.882.800	14,40	84.712.320
13/5/2016	16/05/2016	AJ17D	USD	TIV	4.000.000,00	0,9250	3.700.000	14,40	53.280.000
17/5/2016	19/05/2016	H03G6	USD	TIV	200.000,00	0,0661	13.222	14,30	189.075
TOTAL							94.855.359		1.341.231.309,92



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2025-65720402-APN-DRAS#UIF

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 18 de Junio de 2025

**Referencia:** LISTADO DE OPERACIONES

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2025.06.18 11:32:46 -03:00

Alejandra BONETTI  
Instructora Sumariante  
Dirección de Régimen Administrativo Sancionador  
Unidad de Información Financiera

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2025.06.18 11:32:46 -03:00

